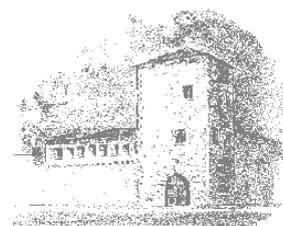




Universidad de Salamanca
**Instituto Interuniversitario
de Iberoamérica**



Máster Oficial de Estudios Latinoamericanos

Tesis de Máster

Y se llama Perú... ¿con p de patrimonialismo?

**Análisis del régimen político tras la crisis política
acaecida entre 1987-1995**

Por

D. Héctor Jesús Huerto Vizcarra

Dirigido por

Dr. Guillermo Mira Delli - Zotti

Dr. Juan Martín Sánchez

Universidad de Salamanca

Junio de 2009

¡Y se llama Perú!

Augusto Polo Campos

Cosechando mis mares sembrando mi tierra
quiero más a mi patria,
Mi nación que luchando rompió las cadenas
de la esclavitud.

Es la tierra del Inca que el sol ilumina
porque Dios lo manda,
y es que Dios a la gloria le cambió de nombre
y le puso PERU.

Atesoran tus playas la riqueza pesquera
de mi mar soberano,
y en la sierra bravía la nieve perpetua
es bandera de paz,
la montaña en sus venas guardara el petróleo
de nuestro mañana,
y la tierra serrana nos da a manos llenas
el acero y el pan.

Y se llama PERU, con P de patria,
la E del ejemplo, la R de rifle,
la U de la unión...

Yo me llamo PERU, pues mi patria peruana
con la sangre y el alma pintó los colores
de mi pabellón.

Yo también me llamo PERU con P de Patria
la E del ejemplo, la R de rifle,
la U de la unión...

Yo me llamo PERU, pues mi raza peruana
con la sangre y el alma pintó los colores
de mi pabellón.

Índice

I. Y SE LLAMA CRISIS.....	1
II. LA ANUNCIACIÓN DE FUJIMORI.....	23
II. EL RÉGIMEN POLÍTICO FUJIMORISTA	78
III. EL DESENLACE DE LA CRISIS.....	116
IV. BIBLIOGRAFÍA	126

I. Y se llama crisis.-

“Y se llama Perú” es el título de una de las canciones más emblemáticas de la música peruana, que despierta, de tanto en tanto, el alicaído nacionalismo de los peruanos. Quizá lo que llame más la atención de su letra es la especie de acróstico que se ensaña con las letras del nombre patrio. Es un intento por definir la historia del Perú a través de las palabras que recrean su nombre. En cierta medida, esta investigación es una tentativa por completar un acróstico mejor del Perú, es decir, una mejor definición de parte de su historia.

El presente trabajo está focalizado en analizar los principales aspectos del régimen político peruano que nace en 1980 y se desarrolla hasta 1995. Por régimen político se entiende al conjunto de instituciones que regulan el ejercicio y la lucha por el poder, así como los valores que animan la vida de tales instituciones (Bobbio, 1983: 1409). Asimismo, se entiende que una institución es un conjunto de normas, reglamentaciones, supuestos y, sobre todo, rutinas que definen determinados rasgos estructurales de la sociedad, y que aglutinan dentro de sí a “grupos de individuos” (Peters, 2003: 50). Además, las instituciones pueden ser formales, como el Parlamento, o informales, como el patrimonialismo.¹ Asimismo, requieren de cierta estabilidad a través del tiempo, afectan el comportamiento individual de sus miembros, restringiéndolo, y comparten, entre los mismos, valores comunes (Peters, 2003: 37).

La importancia de las instituciones que ayudan a definir el régimen

¹ Al respecto, Hall señala que su definición de institución no sólo se refiere a la constitución y las prácticas políticas formales sino también a redes organizativas menos formales (Rhodes, 1997: 64; Hall, 1986: 19-20).

Y se llama Perú...

político se encuentra en que permiten seleccionar a la clase dirigente y asignar un rol a los diversos individuos comprometidos con la lucha política. El empleo de determinadas instituciones, es decir, el empleo de determinados medios para la formación de las decisiones políticas, en desmedro de otros, condiciona la elección de determinados valores para un régimen político, sobre todo porque cada institución tiene una carga valorativa propia (Bobbio, 1983: 1410). Lucio Levi afirma que el nexo entre la estructura del régimen y los valores se entiende en los límites que imponen dichos valores a la acción de un gobierno (Bobbio, 1983: 1410). Aún así, será la lucha política la que definirá los rasgos esenciales de los regímenes políticos, es decir, la forma como se conquista y se mantiene el poder político; sin olvidar, por cierto, el contexto en donde se desarrolla (Bobbio, 1983: 1411).²

Uno de los objetivos que tiene esta investigación es identificar cuáles son las principales instituciones que operan dentro del régimen político peruano y ayudan a definirlo. Para esto, es importante reconocer los esfuerzos de aquellos investigadores como North o Pedrosa que están enfatizando el estudio de las instituciones informales para entender a las sociedades en donde la adecuación entre el comportamiento formal previsto y el efectivo es mínima, como la sociedad peruana. North plantea que las instituciones informales se encuentran en interacción constante con las formales, generando una red interconectada (North, 1993). Por su parte, Pedrosa (2005) señala que las instituciones informales también pueden ser conocidas y aceptadas, a la par que se sostienen en su propia efectividad y en las fuertes tradiciones que les

² Levi plantea una relación de dependencia de la lucha política con respecto a su contexto. La relación que se establece en este trabajo es más bien de influencia mutua e interrelación constante.

Y se llama Perú...

dieron origen. La corrupción, el personalismo, el patrimonialismo y el clientelismo son algunos ejemplos de instituciones informales porque también constituyen conjuntos de normas, supuestos y especialmente rutinas que definen rasgos estructurales de la sociedad, agrupando dentro de sí a numerosas personas.³

Estas redes interconectadas que menciona North se acercan mucho a lo que se entiende por redes de consolidación. Una red de consolidación es el conjunto de organizaciones y grupos poblacionales, que pueden ser denominados como sectores, que se encuentran agrupados por transacciones colusivas, es decir, por poderosos mecanismos intersectoriales de dominación (Dobry, 1988: 96).⁴ Una red de consolidación tiene la capacidad de influenciar en las decisiones que los actores políticos dan de sí mismos, de los otros actores y de su entorno político. Por tanto, estas interrelaciones se dan de manera privilegiada entre las instituciones formales y las informales. Además, estas transacciones colusivas implicarían el funcionamiento de las instituciones informales.

Las diferencias entre las institucionales formales y las informales radicarían en su forma de organización y en la transversalidad de las segundas. En cuanto a lo primero, las instituciones informales difícilmente se pueden entender a cabalidad si no se comprende el entramado de relaciones en las que se encuentran inmersas. El concepto de red de consolidación sirve

³ Usualmente se entiende a todos los mencionados más como fenómenos políticos que como instituciones, puesto que encierran una complejidad mayor, sin embargo, el uso del concepto de redes de consolidación pretende tomar en cuenta dicha complejidad.

⁴ Dobry denomina también a los sectores como campos políticos, y los explica como esferas sociales relativamente autónomas, donde tienen lugar las competiciones por bienes o posiciones considerados políticos por la población (1988: 27, 83). Sin embargo, pese a la utilidad que pueda tener este concepto, se evitará su uso dentro del presente trabajo para no teorizarlo en exceso.

Y se llama Perú...

para ese efecto. Por otra parte, hay que entender su transversalidad como su capacidad de afectar al conjunto de la comunidad política, lo que incluye a las instituciones formales obviamente.

Se plantea entonces que cada red de consolidación está nucleada alrededor de una institución predominante. Por lo tanto, su influencia resulta determinante en el funcionamiento de un régimen político. Esto no quiere decir que en la red de consolidación no se permitan comportamientos contradictorios puesto que se trata de un proceso interactivo y constante lo que produce el predominio de una institución sobre otras. Es un proceso que puede ser reversible a favor de otra institución. Además, dicha evolución tiende a marginar, en cuanto al peso e influencia social, a los sectores con dinámicas ajenas al juego de los agradecimientos mutuos que ha impuesto dicha red de consolidación (Dobry, 1988). Por último, puede existir más de una red de consolidación dentro de un régimen político mientras tiendan a complementarse en gran medida.

Para comprender el desarrollo del régimen político peruano en el contexto de la crisis política (1987-1995), es necesario caracterizar primero el funcionamiento que venía teniendo este régimen político en los años previos a la crisis. Para ello, se plantea la caracterización del régimen político en base al estudio de las instituciones predominantes de sus principales redes de consolidación. Estas instituciones serían el patrimonialismo, el personalismo y la competencia política.

Entonces, se parte de una idea *a priori*, en donde son estas instituciones lo suficientemente preponderantes como para configurar a su alrededor al

Y se llama Perú...

régimen político que se desarrolla en la década de 1980, distinto de los que prevalecieron anteriormente. Sin olvidar por cierto, que existen otras instituciones con un grado alto de importancia dentro de la configuración de las redes de consolidación, por ende del régimen político, como son el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, los grupos de interés ligados a las finanzas y los medios de comunicación, el clientelismo, el populismo, la corrupción y el autoritarismo.

Este análisis deja de lado todas las consideraciones en torno a la calidad de la democracia puesto que las investigaciones en ese sentido tienden a caer en la tentación de comparar las realidades estudiadas con un supuesto modelo teórico de “democracia” que no tiene una correlación real. En parte, se hace lo mismo que se criticaba a los investigadores marxistas del pasado, sobreponer sus esquemas ideológicos a su objeto de investigación. Esto conlleva a una falta de definición que obliga a colocarle adjetivos al término democracia para poderlo entender. Así tenemos los conceptos de democracia delegativa, democraduras, dictablandas, etc. Por tanto, el calificar al régimen político peruano que surge en 1980 como muy democrático o poco democrático no tiene mayor utilidad para esta investigación. En cambio, lo que interesa es analizar cómo se desenvuelve su dinámica política. Para ello, resultan importantes los planteamientos que realiza Dobry (1988) en torno al estudio de la crisis política puesto que se insertan en el análisis de cómo se desarrolla una coyuntura política y no cómo debería desarrollarse.

La competencia política implica, siguiendo en parte a O'Donnell (2004), la participación en el sistema político de dos o más agrupaciones políticas, con

Y se llama Perú...

la presentación de sus postulados y/o propuestas, principalmente a través de procesos electorales institucionalizados.⁵ Sin embargo, la competencia política también se desarrolla dentro de los grupos de interés, especialmente en los sindicatos de trabajadores e, incluso, dentro de los movimientos sociales. Se puede afirmar que el fin último de la competencia política es la elección de representantes, tanto en el plano organizacional, local, regional y nacional; pero no lo es todo. También implica el debate en torno a posturas, ideas y/o planteamientos. Asimismo, estos procesos de selección formalmente tienen que mostrarse como libres, igualitarios, decisivos e inclusivos. En la práctica, las posibilidades de que no se coercione el voto, de que cada voto sea contado igualitariamente, de que los funcionarios/representantes elegidos cumplan correctamente con sus funciones y de que no se excluya la participación de alguien, fluctúan entre distintas gradaciones, dependiendo de cada contexto, sobre todo de la influencia de otras instituciones y de las opciones tácticas de los actores políticos.⁶

Para apreciar sus continuidades o variaciones a lo largo de 1980-1995, es necesario tomar en cuenta algunos indicadores que pauten este proceso. El primero se enfoca en la forma como está organizado y se desenvuelve el sistema electoral: en si otorga facilidades a todos los ciudadanos para participar en los procesos electorales, tanto como candidatos o como electores; si sobre-representa o sub-representa a algunos grupos o regiones; si hay

⁵ En este aspecto de la competencia política estoy siguiendo la conceptualización que hace O'Donnell (2004) al respecto de lo que él denomina como régimen democrático.

⁶ Los procesos electorales son decisivos en tres aspectos: cuando los ganadores logran ocupar sus respectivas posiciones institucionales, cuando pueden efectivamente actuar de acuerdo a lo que su nueva posición les permite y autoriza, y cuando finalizan sus mandatos de acuerdo a los plazos previamente estipulados (O'Donnell, 2004: 23).

Y se llama Perú...

acceso libre a los lugares de votación para los representantes de los partidos, observadores electorales y los medios de comunicación; si los resultados de la elección son aceptados como válidos por la población; si existe una frecuencia en el desarrollo de los distintos procesos electorales; si los votantes son intimidados o presionados. El segundo está dirigido hacia cómo se interrelacionan los distintos partidos políticos, es decir: el grado de consolidación del sistema de partidos; su grado de polarización; el grado de volatilidad en el voto; si existen obstáculos significativos para la creación y las actividades de los partidos; si todos los partidos y candidatos son tratados con respeto e imparcialidad por las autoridades públicas; y cómo evalúan los partidos o movimientos políticos a los procesos electorales (O'Donnell 2004: 27).⁷ De esta manera, sin agotar el tema, se tocarían los aspectos más resaltantes de la competencia política.

El patrimonialismo se entiende como el uso de los recursos del Estado por parte de organizaciones o grupos de individuos que han cooptado cierto poder político, tanto en el ámbito local, regional o nacional, en beneficio de sus intereses personales, políticos y económicos. En la práctica, esto implica la atenuación de los límites entre lo público y lo privado. Asimismo, a diferencia de lo que postula Trocello (2004), este concepto puede implicar alternancia política, como es el caso peruano.⁸ Además, esta institución informal se encuentra estrechamente interrelacionada con el populismo.

⁷ Aunque buena parte de los indicadores provienen de O'Donnell, hay que considerar que no se incluyen todos los mencionados por él y se agregan otros. Lo mismo sucede con los indicadores de las otras dos instituciones.

⁸ Trocello (2004) plantea que con el patrimonialismo se produce la eliminación de las fronteras entre lo público y lo privado. También señala que el patrimonialismo existe en la medida en que una organización logra controlar el Estado y perpetuarse en el poder, con lo cual la competencia política queda muy restringida como para ser importante.

En el necesario ajuste entre los elementos normativos del régimen político y el patrimonialismo, el discurso populista ha jugado un papel central, en donde determinados actores, con cierta independencia de su representatividad, apelan al pueblo-unitario legítimo en cuyo nombre ejercen discrecionalmente la acción de gobierno.⁹ El discurso populista es habitual en toda competencia política, en especial en la que se reclama democrática por su papel en la constitución del “demos”, pero cuando se une a una gestión patrimonialista del Estado suele desarrollar la legitimación de una estructura de competencia política desequilibrada a favor del actor patrimonialista: ya que suele darse en medio de una gran ventaja por parte de quien controla al Estado, puesto que se suele utilizar sus recursos para favorecer a candidaturas propias o amigas en los diferentes procesos electorales.

Otro rasgo del patrimonialismo es que las relaciones de dominación política estructuran sus prácticas en forma radial, donde la élite gobernante se ubica en el centro de la toma de decisiones y funda su ejercicio de autoridad sobre la base de relaciones personales establecidas sobre la base de obligaciones recíprocas. De esta manera, las estructuras burocráticas formales conviven paralelamente con otras informales, conformadas por personas que tienen acceso directo al gobernante porque son consideradas de confianza. Esto provoca un alto grado de incertidumbre en las relaciones burocráticas,

⁹ Aunque sería muy interesante analizar cómo el discurso democrático ha terminado preponderando en la cultura política peruana o latinoamericana, este análisis escapa a esta investigación. O'Donnell (1993) ya ha identificado antes que la democracia formal puede convivir con otras instituciones como el patrimonialismo, que se creían superadas, y denominó a las zonas donde esto se daba como zonas marrones. En ese trabajo suyo postula que los términos democráticos no sólo tienen que ser analizados a nivel del régimen político sino también del Estado. Sin embargo, desde mi punto de vista, la equiparación automática que hace de régimen como régimen democrático le impide encontrar estos rasgos dentro de la misma concepción del régimen político, los cuales obviamente también se ven reflejados en la forma como se organiza y desarrolla el Estado.

Y se llama Perú...

dado que se superponen las lealtades a la legalidad. También, se ejerce una acción desmovilizadora a través de la cooptación de dirigentes provenientes de diversos grupos de interés, incluyendo a partidos políticos opositores, usándose para este fin, en ocasiones, un discurso que no diferencia entre el Estado y el gobierno. Esta cooptación se realiza con la ubicación de los líderes opositores en sectores de la administración o por la compra de favores.

Además, el patrimonialismo lleva a cabo políticas sociales basadas en relaciones clientelares que son gestionadas desde instituciones estatales. Asimismo, las estructuras informales, dependientes del gobernante o la élite, cumplen funciones esenciales de apoyo político y asesoría técnica. Las políticas patrimonialistas exigen un estricto control de los recursos, con una tendencia distributista pero con una intencionalidad política de corto plazo, donde impera la discrecionalidad en el manejo presupuestario por medio del otorgamiento de partidas fijas para gastos corrientes y la constitución de fondos especiales asignados al gobernante, o en todo caso, al Ejecutivo. Por eso, la acción estatal se orienta a las siguientes acciones: medidas populistas y subsidiarias, que no distribuyen la riqueza realmente, y en concesiones de privilegios de explotación (Trocello, 2004; O'Donnell, 1997).¹⁰ Por último, el uso particular de los recursos del Estado viene de la mano con actos de corrupción generalizados en las distintas esferas del mismo.

Entonces, de acuerdo a lo anterior, se van a tomar en cuenta los siguientes indicadores con respecto al patrimonialismo: si se llevan cabo desde el Estado políticas sociales con rasgos clientelares y la proporción de las

¹⁰ En esta definición del patrimonialismo se está tomando en cuenta la conceptualización que hace O'Donnell sobre lo que considera como democracias delegativas.

Y se llama Perú...

mismas; si existen redes clientelares; si existen estructuras burocráticas informales basadas en relaciones personales de obligaciones recíprocas, relacionadas con el gobernante o la élite dirigente; si se produce la cooptación de dirigentes de la oposición o de distintos sectores sociales por parte del gobierno; si se utilizan los recursos del Estado para atacar y desprestigiar a los rivales políticos, o apoyar ciertas candidaturas durante los procesos electorales; si se desarrollan actos de corrupción dentro del marco de las relaciones clientelares; si impera cierta discrecionalidad en el manejo presupuestario por medio de partidas fijas para gastos corrientes y la constitución de fondos especiales asignados al gobernante; si se toman medidas de gobierno que favorecen a grupos particulares.¹¹

Según María Moliner (2007) el personalismo tiene dos acepciones que interesan para esta investigación. Por un lado, significa la adhesión a una persona o a las ideas que representa, sobre todo en política. Por el otro, el protagonismo de una persona.¹² Para este trabajo, el personalismo es aquella práctica política que se basa en el culto a la personalidad de un líder y en el uso desmedido que hace un líder del protagonismo que se le ha concedido.

Si bien es cierto que los postulados ideológicos pueden encontrarse presentes dentro del discurso de un líder de esta naturaleza, no son

¹¹ De acuerdo con la descripción de patrimonialismo presentada dentro de estos indicadores podría colocarse al discurso populista, sin embargo, dicho aspecto será resaltado más como un indicador del personalismo, que será descrito a continuación.

¹² Se podría haber escogido el término de caudillismo en vez del de personalismo, pero el primero está más relacionado a una etapa histórica latinoamericana inmediatamente posterior a la independencia, lo cual podría generar confusiones innecesarias (Bobbio, 1983: 232-238). Sin embargo, si se puede observar el uso extendido de ese término al referirse al régimen político peruano de los ochenta y noventa. Entre ellos, Lynch (1999: 86) intenta darle una definición, la cual se relaciona con lo que aquí se denomina como personalismo: “Empleamos aquí el término *caudillo* para designar al hombre fuerte que pretende encarnar al movimiento que dirige, reservándose el derecho a la comunicación directa con sus seguidores y a la interpretación, en última instancia, de los objetivos del movimiento.”

Y se llama Perú...

determinantes al momento de crear lealtades y afinidades políticas. El líder personalista tiende a obviar cualquier tipo de intermediación política que le obstaculice un trato “directo” con la población, incluso si se trata de su propia agrupación política. También suele hacer uso de un discurso populista como forma de legitimar sus actos o posiciones políticas, aunque esto parece no darse en todos los casos.

Dentro de las organizaciones políticas, el personalismo implica la cooptación de la dirigencia por una persona y su cúpula de allegados, y basa su juego político en una serie de alianzas que implican prebendas y favores, creando sobre la base de esto algo similar a lo que sucede con el patrimonialismo: una estructura burocrática informal. En cierta forma, el patrimonialismo y el personalismo se complementan en muchos de sus aspectos.

Además, otra característica fundamental del personalismo es el autoritarismo que deviene tanto del desconocimiento de las normas formales, en beneficio de las decisiones personales del líder, como de la relación vertical que el líder utiliza con sus seguidores. Este carácter decisional que tiene un líder no puede institucionalizarse en una normatividad específica debido en parte a que carece de la “previsibilidad” que puede otorgar el seguimiento de las normas legales. Por último, en el ámbito estatal, el personalismo implica a un Ejecutivo fuerte en desmedro del Legislativo, quien se ve dominado por el primero. Esto viene de la mano con políticas diseñadas y ejecutadas discrecionalmente desde arriba, calificadas usualmente como autoritarias, así como con el empoderamiento de instituciones jerárquicas y verticales, como las

Y se llama Perú...

Fuerzas Armadas o determinados grupos de interés.

Por ello, para esta investigación se tendrán en cuenta dos grupos de indicadores con respecto al personalismo. Por una parte estarían los aspectos que perfilan la acción del líder personalista: la forma como los partidos o agrupaciones políticas eligen a sus autoridades y a sus candidatos electorales; si se desarrollan discursos de corte populista y cuál es su papel en la competencia política; si se crean burocracias informales que dependen únicamente del líder en el ámbito de las agrupaciones políticas; el grado de predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo; el grado de respeto o vulneración de los derechos y libertades de los ciudadanos y sus asociaciones por parte del líder político o por actores vinculados con él. Por otra parte estarían los aspectos del régimen político que se engarzan, en una relación de causa y efecto recíproco, con el personalismo: el grado de homogeneidad o heterogeneidad con el que el Estado se extiende a lo largo de su territorio, y a través de clases, sectores y grupos; el nivel de respeto de la policía y las FFAA de los derechos de todos los habitantes; y, tal vez el más relevante en cuanto al papel del personalismo en el régimen político, la existencia y eficiencia de instituciones autorizadas y habilitadas para el ejercicio de la *accountability* horizontal y vertical (O'Donnell, 2004: 41-42).¹³

Lo hasta aquí dicho servirá para caracterizar y analizar el régimen político imperante en Perú en la década de los ochenta, pero hace falta una perspectiva metodológica desde la que plantear la interrogante sobre el cambio

¹³ Es una adaptación de los indicadores que presenta O'Donnell en el acápite de "Sugerencias empíricas concernientes al Estado". Se toma en cuenta, principalmente, los relativos al sistema legal, al poder judicial y a la burocracia.

o permanencia del régimen político a raíz de la presencia de una crisis política a partir 1987 hasta 1995. Para responder dicha pregunta es imprescindible entender primero cómo se suele desenvolver una crisis política y lo que ella implica. A la vez, hay que tener presente que el mero cambio de una Constitución política a otra, de la de 1979 a la de 1993, no constituye un factor determinante para señalar el cambio de un régimen político a otro, sobre todo tal como se ha definido el concepto de régimen político al inicio de este capítulo. En todo caso, habría que analizar cuál es el sentido que tiene dicho cambio Constitucional, si altera o refuerza los elementos fundamentales del régimen político.

La posible permanencia de un solo régimen político entre 1980 y 1995 no quita que se haya producido cambios, incluso importantes, dentro del aparato del Estado, sobre todo en sus aspectos formales con el ingreso de la Constitución de 1993. Por tanto, se tiene que ponderar si dichos cambios son lo suficientemente trascendentales como para configurar un nuevo régimen político. De lo contrario, si sólo se toma en cuenta la creación de una nueva Constitución, el Perú habría tenido en total 11 regímenes políticos distintos, algunos de ellos con sólo meses de duración.

Los planteamientos de Dobry (1988) sobre las crisis políticas son importantes porque inciden en la necesidad de estudiar la coyuntura misma de una crisis política. Además, privilegia el uso de métodos cualitativos de investigación para entender los posicionamientos políticos de los actores dentro de este proceso. De esta manera, son los actores políticos, con sus respectivas acciones y decisiones, los principales objetos de estudio, pero sin dejar de lado

Y se llama Perú...

el contexto social y político en el cual se desarrollan. En cierta forma, a pesar que su acercamiento es sociológico, concuerda con el análisis historiográfico al señalar que es imposible limitar una investigación en unos cuantos indicadores, puesto que plantea que la dinámica política de una sociedad está compuesta de múltiples sectores que se interrelacionan constantemente entre sí, e incluso dentro de sí mismos, en relaciones de confrontación, dominación y permisibilidad. Lamentablemente sus planteamientos no han sido utilizados hasta el momento para entender la crisis política peruana.¹⁴

En primer lugar, lo más notorio de su planteamiento es lo que él ha denominado como la hipótesis de la continuidad. Dicha hipótesis se opone a la idea de que las crisis políticas, que pueden conducir a rupturas en el funcionamiento de las instituciones políticas, sean vistas como “discontinuidades” que intervienen en el flujo “normal” de los intercambios políticos.¹⁵ No existe la necesidad de buscar factores o variables radicalmente diferentes o excepcionales de las que se suelen utilizar para explicar coyunturas políticas más rutinarias, ya que plantea que las causas de las crisis no se encuentran exclusivamente en situaciones extremas de anormalidad social. Al contrario, suelen encontrarse dentro de la propia estructura política de la sociedad, con la única diferencia de mostrar una dinámica política diferente a la rutinaria. Por eso, para una mayor comprensión de estos fenómenos de

¹⁴ En adelante, salvo que indique lo contrario, voy a seguir los planteamientos de Dobry sobre las crisis políticas.

¹⁵ Esto no quiere decir que toda crisis política genera una ruptura dentro de las instituciones. Es posible que una crisis política pueda solucionarse con el fortalecimiento de algunas de sus instituciones preexistentes, lo que va de la mano con la consolidación de ciertas prácticas políticas que funcionan de transacciones colusivas en el régimen político imperante. Sobre la idea de que toda crisis política genera una ruptura, se puede consultar a Gianfranco Pasquino en su desarrollo que hace del concepto (Bobbio, 1983).

crisis política, recomienda una especial atención a la actividad táctica de sus protagonistas, en desmedro de posturas que enfatizan la explicación de las mismas en sus antecedentes históricos o sobre la base de sus resultados.¹⁶ Sin por ello descuidar o dejar de lado al contexto estructural en que se desarrollan dichas actividades tácticas, ya que existe entre ambos aspectos un proceso constante de influencia mutua.

El enfoque de investigación de las crisis políticas de Dobry toma en cuenta las diferencias que se presentan entre las dinámicas rutinarias de la sociedad y las dinámicas que se desenvuelven durante las crisis políticas, asumiendo que la diferencia principal radica en los tipos de movilizaciones políticas que se producen dentro de un sistema político. Entonces, una crisis política implica principalmente dos planteamientos: la presencia de movilizaciones multisectoriales que afectan a gran parte del régimen político y las variaciones en las interacciones que se llevan a cabo dentro del mismo.

Para esto, se entiende que una movilización se produce cuando cualquier tipo de recursos se inserta en una jugada, dentro de un contexto conflictivo.¹⁷ A su vez, la jugada se define como aquellos actos y

¹⁶ En el segundo capítulo de su libro Dobry plantea algunos “espejismos” que recomienda se deben evitar al investigar las crisis políticas. Son: el espejismo etiológico que enfoca la explicación de las crisis en sus antecedentes históricos, dejando sin explicar la coyuntura misma de la crisis política; el espejismo de la historia natural, que se basa en la idea de encontrar ciertas secuencias dentro del transcurso de los hechos históricos tomando como base los efectos que produjeron, lo que provoca un severo recorte de la realidad; el espejismo heroico, que paradójicamente plantea a las situaciones de crisis políticas como momentos en donde la acción de los individuos o grupos tiene una mayor preponderancia para el análisis, que las estructuras o contextos en donde interactúan, porque concibe a las coyunturas rutinarias como un conjunto de acciones políticas no intencionadas; cuando al final, es el análisis conjunto de las estructuras y de las acciones de los distintos actores políticos, lo que nos permite entender tanto los procesos de crisis como lo que entendemos como coyunturas rutinarias (Dobry, 1988: 34-105).

¹⁷ Según Almond, existen tres tipos de recursos. El primero consiste en las posiciones institucionales de los actores políticos, es decir, en su posición dentro de la estructura gubernamental del régimen. El segundo consiste en su influencia, lo cual tiene que ver con

Y se llama Perú...

comportamientos, individuales o colectivos, que afectan las expectativas de los protagonistas de un conflicto, así como sus relaciones dentro de su entorno, o ambos simultáneamente. No hay que descartar que una jugada también genere repercusiones en el comportamiento de otros actores no involucrados directamente en esa acción.

Existen dos tipos de movilizaciones, las movilizaciones restringidas, que son las que están emplazadas en un sólo sector del régimen político, y las movilizaciones multisectoriales, que son aquellas que están localizadas en varios sectores a la vez. Entre éstas no existe una diferencia de naturaleza entre las movilizaciones de oposición y la actividad táctica de los agentes del control social, ya que ambas son movilizaciones. “Esto no quiere decir que no haya distancia entre los stocks de recursos y los “repertorios de acción” de los unos y los otros” (Dobry 1988: 13). La diferencia determinante gira alrededor de la evolución de una movilización, es decir, si afecta a un sólo sector o si se expande a través de más sectores del régimen político, ya que esto define la presencia o no de una crisis política.

Para entender cómo se desenvuelve una movilización, especialmente si

aspectos de lo más diversos, desde presentar informes como expertos, tener cierta presencia en los medios de comunicación, tener ascendencia dentro de distintos ámbitos sociales, ser un líder de opinión, etc. Sin embargo, tendrían en común el estar ajenos a la esfera de las instituciones gubernamentales, y el de afectar a las decisiones de gobierno mediante la persuasión y la negociación, más que por el uso de la violencia o la coacción. Por último, el tercero consiste en manifestaciones callejeras, huelgas, formaciones militares o paramilitares. Además, se tiene que tener en cuenta que la movilización también puede darse dentro de un plano meramente simbólico, es decir, con el uso táctico del potencial que tiene un recurso, sin que eso signifique utilizarlo (Dobry, 1988). Existe otra tipología de recursos que no se toma en cuenta en este trabajo, y que los divide en tres: económicos, que abarcan recursos productivos, capital físico, capital financiero y capital humano; políticos, que se refieren al acceso de las personas a los derechos establecidos en una sociedad; y culturales, que implica cuestiones como el idioma, la raza, el sexo, el parentesco, la educación, la ocupación, la religión y el origen demográfico (Figuroa, 1999).

Y se llama Perú...

es multisectorial, se tiene que tomar en cuenta las consideraciones siguientes. Primero, no se pueden ver a los recursos como entidades aislables de los contextos sociales en donde tienen lugar, ya que tienen un carácter relacional porque sólo tienen propiedades estables con relación a ciertas lógicas sociales y a determinadas líneas de acción que definen a las anteriores. Dobry enfatiza mejor esta idea:

“En resumen y más claramente, ni el “valor” o la eficacia de los recursos políticos, ni de sus propiedades -por muy intrínsecas que sean-, ni los cálculos o incluso las manipulaciones de que sean objeto, pueden ser tomados independientemente de sus relaciones con los contextos sociales en los que se inscriben las movilizaciones y, sobre todo, por lo que se refiere a las crisis políticas, de las conmociones que puedan sufrir estos contextos.” (Dobry, 1988: 26).¹⁸

Segundo, a pesar que la dimensión estratégica de las movilizaciones implica que los recursos se activan por los cálculos de los actores políticos, las movilizaciones no tienen un carácter centralizado, es decir, una dirección que moviliza determinados recursos con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos preestablecidos. Para Dobry los actores no pueden controlar la dirección que asumen las movilizaciones, por más que lo intenten. Más bien, lo que suele suceder es que existen ciertas jugadas políticas que consisten en mostrar que ciertos actores han logrado dirigir y controlar la dirección de una movilización. Las movilizaciones en realidad están cruzadas por distintas estrategias y/o por intereses contrapuestos, ya que no se realizan necesariamente en torno a cuestiones, objetivos o perspectivas estratégicas comunes para todos los

¹⁸ Por eso, Dobry plantea que los recursos no pueden operar ni intercambiarse del mismo modo como los bienes económicos, porque no existe un equivalente a la moneda para pautar los mismos, sobre todo porque el carácter relacional de los recursos está asociado a contextos y tácticas cambiantes.

Y se llama Perú...

actores y sectores movilizados. Esta dispersión no se limita a las grandes movilizaciones. Por tanto, el sentido que se le suele dar a las mismas responde más a una necesidad académica por sintetizar y explicar un acontecimiento, lo cual no invalida este proceso, pero sí exige una matización mayor del evento. Por eso, tampoco las instituciones actuarían como un sólo hombre ya que se pueden encontrar en ellas distintas facciones o sub-rutinas diferentes. En consecuencia, Dobry recomienda que, para dilucidar mejor este aspecto de las movilizaciones, se reemplace dentro de los análisis la pregunta del cuánto por el cómo.

Tercero, las distintas organizaciones e instituciones que operan dentro de un régimen político actúan dentro de las coyunturas rutinarias con relativa autonomía, que implica que mantienen su funcionamiento de acuerdo a una lógica propia. Sin embargo, como se trata de una autonomía relativa se van a encontrar afectados por la influencia de las redes de consolidación y por las relaciones que establecen con otros componentes del régimen político. Por eso, la autonomía tampoco significa autosubsistencia ni aislamiento. Aún así, implica asegurar a sus miembros una cierta capacidad para substraerse de interferencias o presiones externas. Su característica más importante radica en su capacidad de controlar la captación de los cálculos de sus miembros, de tal manera que ellos se muestren de acuerdo con la lógica predominante mientras se pueda corresponder con sus propios intereses y percepciones, sin que esto signifique lazos de lealtad u obediencia, puesto que no necesariamente se desarrollan adhesiones de orden afectivo.¹⁹ Evidentemente, salvo en el caso

¹⁹ Dobry plantea en este punto de que no es posible hablar de un consenso, ni siquiera tácito.

Y se llama Perú...

de ciertas agrupaciones o instituciones cuyas lógicas sectoriales se base en dichos lazos afectivos.

Cuarto, dada la falta de consenso con la que interactúan estas organizaciones e instituciones componentes de un régimen político, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones recíprocas, dichas relaciones están marcadas por la competencia y/o el enfrentamiento. Por lo tanto, cada organización e institución se convierte en un lugar de conflicto, lo cual sería uno de los factores que explican la posible extensión de las movilizaciones, de su multisectorización. Esto contradice los planteamientos que sólo conciben unas cuantas “arenas” o lugares de conflicto y competencia por régimen o sistema político.²⁰

Quinto, un componente principal de las crisis políticas es lo que Dobry denomina como la dessectorización coyuntural del espacio social que abarca tres aspectos importantes a tomar en cuenta. El primero de ellos tiene relación con la reducción de la autonomía de las organizaciones e instituciones antes mencionados, que se han visto afectados por las movilizaciones multisectoriales, que implica la interferencia de lógicas externas dentro del propio funcionamiento de dichos sectores. Además, evidencia la presencia de múltiples jugadas que afectan a diversos sectores a la vez. La interdependencia que surge dentro del contexto de crisis contribuye notablemente a reducir el control que los actores tienen sobre el alcance de sus propios actos y sobre su significación en el curso de la confrontación. El otro

²⁰ Linz y Stepan (1996) plantean que para el estudio de los procesos de consolidación democrática se tienen que estudiar cinco “arenas”: el Estado, la sociedad civil, la sociedad política, el imperio de la ley y la sociedad económica.

aspecto tiene que ver con el desplazamiento de los espacios de confrontación, que genera inestabilidad en cuanto a los temas de las confrontaciones. Se trata entonces de una coyuntura de fuerte movilidad de los temas y donde los actores encuentran muy difícil controlarlos, o mejor dicho, controlar el debate de una confrontación. Por último, implica la pérdida de la influencia de las lógicas internas de las organizaciones e instituciones con respecto a sus miembros, lo que genera que sean otros cálculos los que comienzan a prevalecer, la mayoría de ellos externos al sector. Este fenómeno bajo sus tres aspectos descritos es puramente coyuntural ya que usualmente no cristaliza en instituciones. Además, hay que tomar en cuenta que las transformaciones que se producen dentro de la coyuntura de la crisis política no son efecto de la degradación de las estructuras, sino al revés, son fruto de la intervención activa y costosa de los actores sociales.

Sexto, y último, paradójicamente estos procesos de crisis terminan recreando la “simplificación” del espacio social en la medida en que las definiciones de las confrontaciones no están uniformemente disponibles para todos los actores en los distintos contextos de interacción, ya que algunos se encuentran en mejor disposición para acceder a recursos que otros. Por tanto, son sólo algunos actores políticos los que encabezan una “salida” de la crisis.

Asimismo, sucede algo parecido con las identidades, ya que dichas coyunturas tienden a reducirlas, haciendo que la confrontación se defina con relación a unas cuantas. Es decir, identidades como las de nacionalidad, etnia, etc., se sobrepondrán a otras identidades que pueden ser más locales o sectoriales, aunque esto depende del desarrollo propio de cada crisis política.

Y se llama Perú...

Al respecto de las identidades, Touraine plantea: “la formación de la identidad solamente se realiza a través de las luchas sociales que permiten revelar las ilusiones de identidad. Existe, por tanto, *un lazo esencial entre identidad y conflicto*, en la medida en que el nacimiento de la identidad solamente puede hacerse a través del conflicto” (Mesones, 1999: 8-9).²¹

Finalmente, tomando en cuenta todo lo anterior, la hipótesis de este trabajo postula que el régimen político que se desarrolló entre 1980-1987 no cambió tras el largo proceso de crisis que abarcó los años de 1987-1995, ya que continuaron primando dentro de la lucha política, a lo largo de todo este tiempo, la competencia política, el patrimonialismo y el personalismo. Esto quiere decir que no se puede hablar de una ruptura dentro del desarrollo del proceso político peruano.

Tal como se ha mencionado antes, no se quieren obviar las distintas alteraciones a la dinámica política que se produjeron durante los años de 1987-1995, que tuvo como primeros afectados a los partidos políticos. Al contrario, dichas alteraciones se debieron en gran medida a la multisectorialización de las movilizaciones, sobre todo por la participación en la política activa de sectores sociales usualmente alejados de los procesos electorales. En ese sentido, se puede evidenciar una mayor presencia de empresarios y financistas como candidatos dentro de las distintas campañas políticas que componen el periodo de crisis, primero agrupados tras el liderazgo de Vargas Llosa, después

²¹ Con estos postulados no se agota todo el repertorio que Dobry presenta en su libro. Sin embargo, se ha resaltado lo más relevante para esta investigación. Con respecto al sexto punto, se tiene que dejar en claro que esto no tiene relación con la postura del estrechamiento de la arena política que plantea Linz, puesto que esa “simplificación” implica que las movilizaciones sean multisectoriales, es decir, que la lucha política involucre a distintos sectores de la población.

reciclados en el gobierno de Fujimori, especialmente tras su autogolpe de 1992. Junto con ellos incursionan en la política grupos de profesionales no partidarios, pequeños empresarios y profesores universitarios, todos ellos con un discurso apolítico, ya que se presentan a sí mismos como independientes, conformando todos ellos el núcleo central de la avalancha de “outsiders”. Estos *outsiders*, tal como se va a demostrar más adelante, no constituyen una alternativa política totalmente distinta a la que representaban los propios partidos políticos en los ochenta, ni configuran un nuevo régimen político, más bien son el resultado de una serie de jugadas relativamente exitosas llevadas a cabo por Fujimori y su grupo de allegados que le permiten posicionarse en el poder. La forma como la crisis política encuentra una salida, fortaleciendo las instituciones formales del régimen político como son los procesos electorales y la promulgación de una nueva Constitución, favorece la posición política de Fujimori. La evidencia de esto serían los resultados electorales de 1995. La corroboración o no de esta hipótesis se encuentra fundamentada en los siguientes capítulos.

II. La anunciación de Fujimori.-

El título del libro de Carlos Reyna (2000) sobre el primer gobierno de Alan García, La anunciación de Fujimori, bien podría resumir toda la década de 1980. Evidentemente no desde un punto de vista determinista que encuentre en los antecedentes a las elecciones de 1990 las explicaciones totales del proceso. Más bien, desde una percepción distinta que entienda a Fujimori como producto de las propias particularidades del proceso político peruano, tal como lo ha señalado Murakami (2007). Esfuerzos parecidos se pueden encontrar con anterioridad en autores como Lynch (1999), que han intentado entrelazar tanto los factores estructurales como los coyunturales para entender el proceso político del primer gobierno de Fujimori (1990-1995). De igual forma, son importantes los esfuerzos de Tanaka (1998, 1999, 2001) por enfatizar la necesidad de comprender la propia dinámica de la coyuntura política. Todos ellos contribuyen de manera invalorable a delinear un proceso histórico, que pese a la cantidad importante de investigaciones no está del todo explicado. Especialmente cuando se trata de contraponer dos dinámicas políticas distintas, con características propias: una dinámica que se podría llamar rutinaria, que abarca desde 1980 hasta 1987, y otra dinámica denominada como de crisis política, que cubre los años de 1987 hasta 1995.

Lo que hace difícil distinguir ambas dinámicas es que el Perú pareciera encontrarse en una situación de crisis crónica. Esto se debe principalmente a dos factores: la crisis económica que sufre el Perú desde finales de los años setenta, que es parte de un proceso económico global conocido como la “crisis

Y se llama Perú...

de la deuda externa”, y la presencia armada de dos partidos anti-sistema, como son Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). “Este contexto agudizaba la percepción de que el destino del país se jugaba en esos años” (Tanaka, 1998: 18). Por ello, se pueden encontrar investigaciones desde mediados de los años ochenta que ya están analizando el periodo de “crisis” que afecta al Perú después del segundo gobierno de Belaúnde (Stein y Monge, 1988). Desde el punto de vista de esta investigación, el uso indiscriminado del concepto de crisis poco ha ayudado a entender este proceso, sobre todo por las especificaciones que tiene un proceso de crisis que lo diferencia de otros contextos políticos rutinarios, tal como se ha especificado en el capítulo anterior (Dobry, 1988).

La característica más importante de esta especie de “crisis crónica” es la inestabilidad política que rige el periodo estudiado. Dicha inestabilidad se expresa en algunos fenómenos que se pueden encontrar durante la década del ochenta: la volatilidad electoral, una forma confrontacional de hacer política, y una evaluación política de corto plazo por parte de sus principales actores. Todo ello junto con una marcada postura ideológica por parte de la izquierda marxista, va a configurar a una sociedad altamente politizada que va a tener a un electorado en constante aprendizaje político.

Tampoco es cuestión de idealizar la actitud política de la población peruana durante fines de los setenta hasta gran parte de la década siguiente. Lo que se tiene para los ochenta es a un electorado novel en su mayoría, ya que el 60% de los votantes ejercieron su derecho a votar por primera vez en la Constituyente de 1979, cuando la votación sólo se amplió a todos los mayores

Y se llama Perú...

de 18 años, sin embargo, para las elecciones de 1980 se permitió votar a los analfabetos con lo que hubo otra cantidad importante de nuevos votantes. Ambos procesos electorales abrieron las puertas a un proceso de ciudadanía masiva de la población. Esto había tenido tres antecedentes inmediatos: la convocatoria a elecciones municipales en 1963, el otorgamiento del voto a la mujer en 1955 y la participación masiva y creciente de los sectores populares en la política desde los años sesenta.

La periodización de la crisis política (1987-1995) se da en razón a la aparición de nuevos actores en la contienda política, a una polarización política de grandes proporciones y al surgimiento de determinadas “anomalías” en el desenvolvimiento de la confrontación política. El periodo abarca desde mayo de 1987, mes en donde convergen distintos enfrentamientos políticos, hasta las elecciones generales de 1995 que le otorgan una rotunda victoria electoral a Fujimori, y por ende, su reelección con el 64% de los votos.²² El inicio de la crisis política coincide con un agravamiento de la situación económica que afecta los sectores productivos, como el industrial. Abugattas (1999) plantea que en el periodo de 1988-90 la producción industrial sufrió una severa contracción de alrededor del 30%. De igual manera, a partir de 1989 se puede evidenciar el descenso en la producción agrícola (Hopkins, 1999).²³

Tal como se ha venido señalando, esta periodización va a ayudar a comprender dos momentos distintos de la dinámica política peruana de ese entonces. En el primero se va a ir configurando el régimen político de los ochenta que va a entrar en una severa crisis política a fines de esa misma

²² Una explicación mayor sobre la periodización de la crisis política se encuentra en el cuarto capítulo.

²³ La producción agrícola se recupera en 1993.

década. El segundo momento es la crisis misma, en donde las posibilidades de transformación de ese régimen político están latentes pero no son las únicas. La eventualidad de un “retorno a los habitus” o mejor dicho, el mantenimiento del *statu quo* preexistente, donde preponderan algunas de sus instituciones y sus formas de interacción, representa una salida “institucional” nada fuera de lo común en tales acontecimientos, como bien ha señalado Dobry (1988) en el contexto europeo. Por ello, la caracterización del régimen que se va reconfigurando en la medida en que la crisis política va encontrando una salida, en base a tres de sus principales instituciones que conforman alrededor suyo redes de consolidación, va a permitir una comparación con el régimen político que antecede a la crisis. Dichas instituciones son: la competencia política, el personalismo, y el patrimonialismo.

El resultado de este balance va a mostrar si el régimen político se transformó o si, por el contrario, se mantuvo. Esto no quiere decir que no se hayan producido cambios dentro de todo este proceso, pero para valorizar los mismos habría que entender dos aspectos: las alteraciones coyunturales propias de una crisis política y los posicionamientos discursivos de los actores, que no necesariamente van de acuerdo con sus acciones y que responden, más bien, a una evaluación táctica de la situación de crisis. Asimismo, para todo el periodo estudiado habría que tomar en cuenta la distancia existente entre las leyes y la realidad, ya que el sólo estudio de la normatividad del periodo puede conllevar conclusiones equivocadas.

1. La competencia política de los ochenta.-

La diferencia más resaltante, en términos de competencia política, entre el régimen político de los ochenta con el que lo antecedió es la presencia de elecciones para seleccionar al jefe del gobierno, a los parlamentarios y a las autoridades de los gobiernos municipales, tanto a nivel distrital como provincial. Evidentemente, esto no niega la existencia de la competencia política durante los doce años del gobierno militar. Más bien, lo que se quiere resaltar es que dicha competencia encontró otros cauces en donde cobró mayor relevancia, como fueron los gremios y sindicatos de trabajadores.

La ausencia de este tipo de procesos electorales en el régimen anterior explica, en gran medida, el por qué durante el gobierno militar obtuvieron tanta relevancia los gremios, sindicatos y los movimientos sociales como espacios en donde se podía desarrollar la participación política.²⁴ También esto era fruto del discurso progresista, inclusivo, y reivindicativo que manejó el propio gobierno militar durante su primera fase (1968-1975), que había alentado la formación de organizaciones sindicales.²⁵ La importancia del sector organizado de los trabajadores fue tanta que los partidos políticos y el propio gobierno dirimieron sus conflictos dentro de ese sector.

En ese contexto, donde se privilegian a las organizaciones sindicales en desmedro de los partidos, el gobierno militar plantea la “ideología del no-

²⁴ Habría que tomar en cuenta los procesos electorales internos de cada organización de trabajadores, como las cooperativas que son creadas por el gobierno, ya que son un buen ejemplo de la dinámica política de entonces. Lamentablemente, no he encontrado investigaciones al respecto.

²⁵ Existen importantes excepciones como el caso del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), cuando el gobierno militar se negó reiteradamente a reconocerlo oficialmente. Es importante recalcar que para los casos de las organizaciones afines al gobierno de entonces, su reconocimiento era casi inmediato (Huerto, 2008).

partido". Esto representa el primer cuestionamiento severo a esa institución ya que se muestra a los partidos como lastres para el desarrollo del país. Este planteamiento, esbozado por los voceros intelectuales más representativos del gobierno, genera un amplio debate que se expone mediante conversatorios, artículos periodísticos y alguno que otro programa de televisión, principalmente durante todo el mes de agosto de 1974. Para Carlos Delgado, Director Superior del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), los partidos suscribían una concepción anti-participativa de la política, ya que basaban su accionar en la manipulación de sus miembros para el beneficio de pequeñas oligarquías dirigenciales. La consecuencia directa de este planteamiento político era la afirmación apresurada de que los partidos políticos tenían una fecha de defunción próxima. Por eso, Carlos Franco, otro importante funcionario del gobierno, señalaba que los partidos tenían una reducida militancia y no disponían de un anclaje social ni la capacidad operativa para movilizar masivamente al pueblo. De igual forma, Hugo Neira, entonces director del diario nacionalizado Correo, planteaba: "La noción misma de partido ha dejado de ser contemporánea, realista, de vanguardia" (DESCO: 913-914). Evidentemente, el tiempo no les dio la razón, al menos hasta la llegada de Fujimori donde vuelve a surgir nuevamente la ideología del no-partido, aunque con matices totalmente diferentes.

A pesar de su creciente importancia y número, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales que surgieron durante los setenta se fueron caracterizando, en la mayoría de casos, por su falta de autonomía o mejor dicho, por su dependencia de algunas organizaciones partidarias,

Y se llama Perú...

especialmente el APRA o la izquierda marxista. Esto condicionó la forma como estas organizaciones o movimientos desarrollaron la lucha política por sus reivindicaciones. Al respecto, un caso paradigmático fue el del SUTEP en donde terminaron primando los intereses partidarios de Patria Roja, que estaba más interesada en exacerbar las contradicciones con el gobierno que en las reivindicaciones laborales para los maestros (Huerto, 2008). Este tipo de protestas desmesuradas tenía como consecuencia directa el desgaste de la propia organización, que se daba como consecuencia de la represión gubernamental, lo que provocaría su posterior repliegue.

En términos cuantitativos, esta actitud de algunas cúpulas dirigenciales ligadas a los partidos de la izquierda marxista generó el aumento notable de las protestas sociales, las mismas que para los setentas tuvieron dos ciclos importantes: 1973-1975 y 1978-1982 (Lynch 1999). En la primera se produjeron 2 137 huelgas y en la segunda fueron 3 420.²⁶ El interés por las organizaciones sindicales y los movimientos sociales no radicaba en que eran espacios de participación popular, como era el discurso de cara a la opinión pública o a las “bases” por parte de los partidos de izquierda marxista, sino en su potencial capacidad de aglutinar “masas”, concientizarlas y dirigir las por el camino de la revolución. A su vez, el APRA utilizó a las organizaciones sindicales bajo su control para presionar al gobierno y obligarlo a tranzar, como ocurrió finalmente con Morales Bermúdez durante la transición política. “Pero, aún identificándose en el gobierno al APRA como un agente de estabilidad en el proceso, la

²⁶ Los acontecimientos más importantes de la protesta social se desarrollaron el 5 de febrero de 1975, en donde agitadores sociales, delincuentes comunes y población en general aprovecharon la huelga policial para salir a las calles para protestar o saquear, y en los paros nacionales del 19 de julio de 1977 y del 22-23 de mayo de 1978, organizados por la izquierda.

posición institucionalista que predominaba en las FFAA, impidió la formación de alianzas explícitas.” (Mauceri, 1989:21).

Hay que resaltar además dos aspectos importantes que son fruto de la transición política, específicamente del proceso de elección y conformación de la Asamblea Constituyente de 1979: la aparición de frentes políticos de izquierda y la ampliación del electorado. Para las elecciones de la Constituyente del 18 de junio de 1978, varios partidos de izquierda marxista evaluaron la conveniencia de participar en ese proceso electoral aunque asumieron dicha participación desde diferentes perspectivas.²⁷ Estos partidos, con la excepción del PSR y del PCP, se agruparon en dos frentes: Unidad Democrático Popular (UDP) y el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP).²⁸

El PCP, que era el partido marxista más consolidado, enmarcaba su participación en la Constituyente en el propósito de redactar una nueva Constitución que institucionalizara las transformaciones efectuadas por el gobierno militar.²⁹ En cambio, para las demás organizaciones de izquierda marxista, que tuvieron la necesidad de agruparse en dos frentes, la Asamblea Constituyente era un espacio político desde donde se podía agitar a las

²⁷ Lynch (1999: 117) resume de la siguiente manera las siguientes posturas que asumen las agrupaciones de izquierda: “La izquierda rechaza la idea de las elecciones pero se divide en torno a la participación, unos, los más moderados (PCP y PSR) participan para defender las reformas velasquistas, otros (la nueva izquierda y los trotskistas) lo hacen por razones de agitación y propaganda, y por último, los maoístas ortodoxos (Patria Roja y Sendero Luminoso) rechazan el evento como una maniobra más de las clases dominantes”.

²⁸ El Partido Socialista Revolucionario (PSR) surge como un partido de izquierda que recoge los planteamientos progresistas del gobierno militar. Una de sus principales características es que no se declara marxista. Además, está integrado por importantes figuras, civiles y militares, del gobierno de Velasco. La UDP se forma en enero de 1978 gracias a la confluencia de 19 organizaciones de izquierda, la mayoría de ellas pequeñas.

²⁹ Jorge del Prado, líder máximo del PCP de entonces dio declaraciones en ese sentido a la prensa el 7 de setiembre de 1977.

“masas” e inclusive, tentar la posibilidad de llegar al gobierno.³⁰ A pesar de su participación en la Asamblea, la postura política de la mayoría de partidos marxistas estaba lejos de decantarse a favor del régimen político que la Constituyente iba a normalizar:

“No obstante, durante esta etapa la izquierda mantuvo sus rasgos característicos, tales como su dogmatismo ideológico, su rigidez política para establecer alianzas más amplias, la aceptación de la lucha armada como un principio de base y la hegemonía en la conducción de las principales organizaciones sindicales y populares.” (CVR, 2003-II: 382).

En ese sentido, el dilema de ese grupo de partidos marxistas era en torno a la utilidad de la Asamblea como herramienta política para construir el camino hacia la revolución. Por eso, los pedidos de una convocatoria a una Asamblea Constituyente no venían sólo del APRA.³¹ Estas segundas intenciones, por parte de la mayoría de partidos marxistas, fueron explicitadas al instalarse la Asamblea. Después del discurso inaugural de Haya de la Torre se presentaron 3 mociones, la segunda de ellas estaba firmada por la casi totalidad de agrupaciones políticas presentes en la Asamblea, con excepción del APRA y del Partido Popular Cristiano (PPC), y solicitaba la inmediata reposición de todos los trabajadores despedidos, el pago de lo que se les

³⁰ En un documento conjunto de varias organizaciones políticas de izquierda en 1977 se señala lo siguiente: “Denunciar el carácter gran burgués de la Constituyente; Disputar la reacción y al reformismo la dirección del ascenso popular también en el terreno electoral, (...) combatiendo las posiciones revisionistas que pregonan el tránsito pacífico al socialismo (...); Utilizar las condiciones creadas por la coyuntura electoral para impulsar las tareas de agitación, propaganda, y apoyo a la lucha clasista de masas.” (CVR, 2003-III: 167). El documento está firmado por MIR Voz Rebelde, MIR-IV Etapa, Vanguardia Revolucionaria y el PCR Clase Obrera.

³¹ El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) había postulado desde antes la necesidad de una Asamblea Constituyente que estuviera controlada por las masas trabajadoras para así establecer un gobierno representativo provisional, de obreros y campesinos. Igualmente, el Frente de Izquierda Revolucionaria - Combatiente planteó, antes de 1977, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la que consideraba como la máxima expresión de la democracia burguesa, para usarla como un espacio para propagar sus ideas.

Y se llama Perú...

adeudaba y una amplia amnistía laboral. La tercera moción, que sólo estaba firmada por algunos Constituyentes de izquierda a nivel personal, planteaba el cese del gobierno de facto y que la Asamblea asumiera los poderes del Ejecutivo y el Legislativo. Evidentemente, la oposición conjunta del APRA y del PPC impidió que fueran aprobadas tales intenciones.

La tercera moción muestra también las fisuras existentes dentro del bloque de izquierda en la Constituyente. Por eso tan sólo estaba firmada por gran parte de los Constituyentes del FOCEP, dos del PSR y uno de la UDP. La facción ligada al partido maoísta Bandera Roja, que se encontraba dentro del FOCEP, no firmó el documento.³² Tampoco lo firman los 6 representantes del PCP, los 6 del PSR y los otros 3 de la UDP. Estos desencuentros no sólo se daban entre estas organizaciones, sino también al interior de las mismas. Este es el caso específico del FOCEP que se encontraba en un proceso de descomposición desde su nacimiento. Probablemente no se llegó a separar antes de las elecciones por la posibilidad del voto preferencial que fue estipulada para esos comicios electorales. Para Pedro Planas (2000) las agrupaciones mejor estructuradas nacionalmente son aquellas que tuvieron una votación relativamente pareja a nivel nacional, como fueron los casos del PCP y de UDP. En cambio, si bien es cierto el FOCEP, que fue la tercera agrupación más votada en esas elecciones, derrotó al APRA y al PPC en dos departamentos y 13 provincias, tiene una votación inferior al 5% en siete departamentos.³³

³² Estos son Saturnino Paredes, Romain Montoya, Victoriano Lázaro, Germán Chamba, Enrique Fernández y César Mateu.

³³ El APRA obtuvo el 35.3% de los votos para la Asamblea Constituyente, le sigue el PPC con el 23.8%,

Y se llama Perú...

Estos conflictos internos e intrapartidarios dentro de las organizaciones de la izquierda hace que sea poco apropiado evaluarlas como un solo actor. Más bien, a partir de la Constituyente de 1979 se puede dar cuenta del nacimiento de la izquierda marxista como fuerza electoral (Tuesta, 1995).

El marco del sistema electoral en la competencia política.-

La dinámica de los procesos electorales termina subsumiendo al mediano plazo la competencia política que se da en otros ámbitos, especialmente en los movimientos sociales y en las organizaciones sindicales. No sólo porque son las elecciones el medio por el cual se eligen a las nuevas autoridades y a los representantes políticos del país, sino también por el creciente interés de parte de la izquierda marxista en su participación electoral y por el desgaste de las propias organizaciones sindicales.

El ingente apoyo que Izquierda Unida (IU) va recibiendo desde su formación para las elecciones municipales de 1980, apoyo electoral que la izquierda peruana no había tenido en el pasado, crea la ilusión de una pronta victoria suya en las elecciones presidenciales. Para finales de los ochenta se afirma que IU constituye la segunda fuerza política del país y las encuestas señalan para 1988 que probablemente resultaría vencedora en las elecciones de 1990 (Pásara, 1989). Para Tuesta (1995) IU se convirtió, en términos electorales, en la izquierda más importante de América Latina. Eso explica por qué su trabajo político se va enfocando, cada vez más, en el Parlamento y en

el FOCEP con el 12.3%, el PSR con el 6.6%, el PCP con el 5.9% y la UDP con el 4.6%, entre otros (Tuesta 1987).

los procesos electorales municipales. Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003-I: 89):

“En estas zonas urbanas, en proceso de construcción, con servicios insuficientes, el papel de las municipalidades y de la lucha política por llegar al gobierno local fue muy importante. En los distritos populares de Lima, la izquierda pasó de su tradicional espacio en el movimiento obrero y barrial a tener funciones de gobierno. En 1980 y 1983, prácticamente todos los distritos de los conos norte, sur y este tuvieron alcaldes de izquierda.”³⁴

Esto viene de la mano con el desgaste que van sufriendo las organizaciones sindicales dentro de un contexto de crisis económica y represión gubernamental. “Así, en los años ochenta se comprueba la disminución de la influencia del movimiento sindical organizado. Su base de reclutamiento y con ella de renovación de dirigentes y participantes, resulta cada vez más reducida.” (Grompone, 1991: 34)

La creciente inestabilidad laboral junto con la paulatina disminución de la capacidad adquisitiva de la población hizo que el movimiento sindical se debilitara al disminuir la participación de los trabajadores (Stein y Monge, 1988). La caída más abrupta del empleo en el Perú se produjo entre 1987 y 1989, en un contexto en donde el primer gobierno aprista había introducido diversos contratos de corta duración donde los trabajadores no tenían ningún tipo de protección o beneficio (Thomas, 1999). Por eso, varios autores plantean que la progresiva desaparición de los movimientos sociales más importantes, que constituyeron la base social izquierdista, se da paulatinamente con el crecimiento del sector informal en la economía

³⁴ Para la CVR este trabajo político también fue importante porque iba alejando a los partidos de izquierda de sus postulados revolucionarios e iba atenuando su discurso radical.

(Lynch, 1999; Grompone, 1991; Stein y Monge, 1988).³⁵ Para Grompone (1991) el sector informal cada vez se vuelve más importante para analizar el intercambio de información y elaboración de decisiones políticas.

Asimismo, se producen dos olas represivas hacia los sindicatos, la primera de ellas durante la segunda etapa del gobierno militar (1975-1980) en donde el gobierno consiente abiertamente a los empleadores y empresarios a que despidan a sus trabajadores que se declaran en huelga, y la otra se da en el contexto de la guerra interna, donde se produce una represión indiscriminada por parte de Sendero y de las fuerzas del orden en contra de los dirigentes sindicales.³⁶ Este fue el caso del Secretario General de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), Hilario Ayuque Zúñiga, quien fue detenido en Huancavelica por la Guardia Republicana el 20 de setiembre de 1984 y desaparecido posteriormente.

Tomando en cuenta estos dos aspectos que afectaron a las organizaciones sociales, también se puede plantear el desgaste de una forma de lucha política, que tiene su canto del cisne en el año de 1988, que no sólo genera represión sino que también, en ocasiones, uno de sus

³⁵ La tasa de inflación anual en la primera mitad de los ochenta fue en aumento constante: 60.8% en 1980, 72.2% en 1981, 125.1% en 1983, 111.5% en 1984 y 158.3% en 1985 (Tanaka, 1998). Siguiendo a otro autor, Tanaka señala que el nivel de popularidad de García y de Belaúnde se vio afectado principalmente por el problema de la inflación y no por la actividad subversiva. La inflación acumulada para 1988 fue de 1 722%, para 1989 fue de 2 775% y para 1990 fue de 7 650% (Kisic, 1999). Además, durante los ochenta la tasa media de crecimiento industrial fue negativa (Abugattas, 1999). Durante el primer gobierno aprista, sobre todo después de 1988 la industria manufacturera entró en una crisis profunda, “se puede afirmar que esta fase tuvo un impacto más importante en el sector industrial que las reformas liberalizadoras adoptadas después de 1990 por el gobierno de Fujimori.” (Abugattas, 1999: 118). En realidad, este mismo autor postula que se puede observar una desindustrialización progresiva desde 1974 que se agudiza a finales de los ochenta.

³⁶ Sendero Luminoso ataca a líderes sindicales como una forma de amedrentar a sus opositores políticos. Dentro de su dogmatismo ideológico, para esa agrupación política todo aquel que no comulgara con sus ideas ya era de por sí un enemigo al que había que combatir (CVR, 2003). Al respecto, Thomas (1999: 278) afirma: “Sendero Luminoso trató de infiltrarse en los sindicatos, y asesinaron a varios líderes sindicales en el proceso, mientras que las fuerzas de seguridad adoptaron una actitud represiva frente al movimiento sindical.”

objetivos es propiciarla, como se fue el caso del SUTEP.³⁷ En 1991, el entonces Secretario General de la CGTP, Valentín Pacho, declaró a la prensa que los partidos de izquierda tenían la mayor parte de la responsabilidad por la desintegración y el fracaso del movimiento sindical porque creyeron que los sindicatos eran sus brazos políticos, por lo que ejercieron demasiada influencia: “con su dogmatismo y sectarismo inútiles han llevado a las centrales sindicales a un inminente colapso” (Tanaka, 1998: 76-77)

Entonces, la competencia política se va a desarrollar de manera privilegiada dentro de los procesos electorales durante la década del ochenta. El sistema electoral que va a regir durante esa década se va a ir construyendo desde la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Para la realización de la Constituyente el gobierno militar promulgó el 4 de octubre de 1977 el decreto ley 21949 en donde formalizó su convocatoria y especificó algunas de las particularidades que iba a tener el sistema de sufragio: la elección de 100 representantes a nivel nacional por distrito electoral único, la aplicación de la cifra repartidora, la incorporación por primera vez del voto preferencial, y el otorgamiento del derecho al voto a los mayores de 18 años (Tuesta, 1995).³⁸ Esto último fue lo que permitió la ampliación del electorado para esas elecciones. Además, resultó ser un antecedente importante de los cambios electorales que se sancionarían después; siendo el principal de ellos la

³⁷ Para más detalles sobre la actitud política que tuvo el SUTEP durante el gobierno militar ver Huerto (2008).

³⁸ El sistema de elección proporcional con el agregado de la cifra repartidora, en la modalidad del método D'Hondt fue incorporado en el sistema electoral peruano por la Junta Militar de Gobierno de 1962-1963 con la ley electoral 14250 (Tuesta, 1995).

Y se llama Perú...

concesión del voto para los analfabetos a partir de las elecciones generales de 1980.

De esta manera, se va a tener en toda esa década a un electorado joven y en constante crecimiento, que participa desde 1978 hasta 1995 en 13 procesos electorales.³⁹ Para 1978 el porcentaje de electores en relación con la población se había incrementado del 18% de las elecciones de 1963 al 25%. Con la nueva ampliación del voto en 1980 el porcentaje subió al 31%. En términos numéricos, el número de votantes entre las elecciones generales de 1963 y las de 1980 crece en un 162% (Lynch, 1999). De ahí para adelante, y durante todo el periodo estudiado, el porcentaje seguirá creciendo, tal como se muestra en el cuadro siguiente. Este crecimiento constante implica también la presencia permanente de un sector novel dentro del electorado, pero nada desdeñable, en cada proceso electoral.

Porcentaje de votantes en relación a la población (1963-1993)

Año	1963	1978	1980	1990	1993
Porcentaje de votantes	18%	25%	31%	35%	37%

Fuente: Tuesta (1995)⁴⁰

La Constitución de 1979 establece que las elecciones presidenciales y parlamentarias se producen cada 5 años, mientras que las elecciones

³⁹ Los procesos electorales son los siguientes: elecciones Constituyentes de 1978 y 1992; elecciones presidenciales y parlamentarias en 1980, 1985, 1990 y 1995; elecciones municipales de 1980, 1983, 1986, 1989 y 1993; elecciones regionales de 1989; y el referéndum de 1993.

⁴⁰ En Tanaka (1998: 16) se puede apreciar un cuadro similar que aparentemente tendría la misma fuente pero cuyos porcentajes son totalmente distintos.

Y se llama Perú...

municipales cada 3 años. Puede participar con su voto toda persona mayor de 18 años que se encuentre inscrita en el Registro Electoral, salvo el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, ya que mientras estén en el servicio activo no pueden votar ni ser elegidos (art. 67).⁴¹ El voto es personal, libre, igual y secreto hasta los setenta años de edad, desde entonces se vuelve facultativo (art. 65).

Para las elecciones presidenciales los candidatos debían ir acompañados con dos vicepresidentes. La Constitución de 1979 permite que tanto los candidatos a la presidencia como a la vicepresidencia puedan a la vez integrar las listas de los candidatos para el Congreso, sea para la Cámara de Diputados como para la de Senadores (art. 166). Para Tuesta (1995) esto se hizo para favorecer la presencia en el Parlamento de los principales líderes partidarios, pero tuvo consecuencias nefastas puesto que permitió en 1990 que un *outsider* llegara al poder, cuando sólo postulaba para obtener un cargo senatorial. Al parecer, esto se evidenciaría en la presencia de numerosas candidaturas presidenciales en cada uno de los procesos electorales de 1980, 1985 y 1990, tal como se muestra en el cuadro siguiente. “Esta doble postulación permitía al candidato con pocas probabilidades tentar un puesto parlamentario sobre la base de su propaganda como candidato presidencial.” (Tuesta, 1995: 70).⁴² De estas candidaturas, 12 de ellas en 1980, 5 en 1985 y 5 en 1990, postularon a la vez para la presidencia y para el senado. Sin

⁴¹ Esto constituye la última traba que impidió que la ampliación del voto haya sido un proceso realmente universal para el caso peruano.

⁴² Tuesta (1995) señala que bajo este sistema electoral en 1980 obtuvieron un escaño parlamentario Hugo Blanco, Carlos Malpica, Genaro Ledesma, Horacio Zevallos y Róger Cáceres. Todos ellos, menos el último, fueron importantes dirigentes de la izquierda. En 1985 y 1990, Róger Cáceres volvió a beneficiarse por este sistema. A finales del gobierno de Fujimori, sería recordado como uno de los tráfugas más renombrados.

Y se llama Perú...

embargo, para 1995 cuando esta posibilidad de doble postulación fue anulada, se tiene otra vez un número alto de candidatos presidenciales: 14. Entonces, habría que entender de otra manera el por qué hay tantos candidatos presidenciales para cada elección. Quizá la respuesta se encuentre en la forma como se va desarrollando la representación política.

Otro de los rasgos del sistema electoral de los ochenta era que para salir elegido presidente se necesitaba una votación de más de la mitad de los votos válidamente elegidos. De no lograrse esto en primera vuelta, se tendría que realizar una segunda ronda electoral dentro de los 30 días siguientes entre los dos candidatos con mayor votación (art. 203). No obstante, para las elecciones de 1980 se aprobó una disposición transitoria donde se estipuló que para esa ocasión al ganador sólo le bastaría obtener el 36% del total de votos válidos. De no lograrse esta meta, el Congreso elegiría al nuevo presidente entre los dos candidatos más votados. Esta medida buscó beneficiar al APRA y a su candidato Haya de la Torre para que llegara al poder. La intempestiva muerte de Haya y el posterior conflicto interno que estalló dentro del APRA por su sucesión en la candidatura presidencial, truncaron esta posibilidad.⁴³

⁴³ El enfrentamiento interno del APRA se dio entre dos facciones: una encabezada por Armando Villanueva y la otra por Andrés Townsend. Se calificaba a esta segunda facción como la más conservadora. Asimismo, la derrota del APRA en las elecciones de 1980 también se debe a la efectiva campaña electoral que realizó Fernando Belaúnde, “basada en su imagen carismática y un programa de ofertas electorales que incluía un millón de empleos, fue muy impactante y costosa” (Tuesta, 1995: 108).

Y se llama Perú...

**Número de partidos políticos participantes en las elecciones
presidenciales (1980-1995)**

1980	1985	1990	1995
15	9	9	14

Fuente: Tuesta (1995)

Para las elecciones del Congreso, que se realizan paralelamente a las elecciones presidenciales, donde se elegía a 60 senadores y a 180 diputados, puesto que se trataba de un Congreso Bicameral, la elección se daba mediante listas cerradas pero no bloqueadas. Esto último quiere decir que se podía hacer uso de un doble voto preferencial, que era opcional, pero también sólo se podía marcar el símbolo de un partido o agrupación política. Era una forma de facilitar el voto a los analfabetos (Tuesta, 1995). En la Constitución de 1979 se estipuló que los senadores serían elegidos por circunscripciones regionales, pero otra disposición transitoria dispuso que mientras no se culminara el proceso de regionalización del país, los senadores serían elegidos mediante un distrito nacional único, que fue la manera como fueron elegidos durante todo el periodo estudiado. En cambio, los diputados eran elegidos por circunscripciones departamentales.

Una tercera disposición transitoria determinó que para las elecciones de 1980 las listas para el Congreso fueran cerradas y a la vez bloqueadas, es decir, que el votante no tendría ninguna opción para elegir por el candidato de su preferencia, sólo podría votar por una lista partidaria. De esta forma, de acuerdo a los escaños designados como resultado del proceso electoral, serían

Y se llama Perú...

elegidos los congresistas en el orden en que figuraban en las listas de candidatos. No se entiende bien el sentido de esta disposición, sobre todo porque en las elecciones de 1978 se utilizó el voto preferencial. Sin lugar a dudas los más afectados por ello fueron las agrupaciones de izquierda que no pudieron ponerse de acuerdo con el orden de las listas y abortaron un proyecto de frente único: la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI).⁴⁴ Por eso, para las elecciones generales de 1980 la izquierda fue nuevamente dividida. Otra consecuencia del voto preferencial fue que entre 1978 y 1993 más de un tercio del parlamento varió su composición (Tuesta, 1995).

La designación de los escaños tanto para los diputados como para los senadores se daba de acuerdo a la cifra repartidora con la modalidad del método D'Hondt. La Constitución señalaba que la ley fijaba la distribución de los escaños principalmente de acuerdo a la densidad electoral, donde cada circunscripción tendría por lo menos un diputado. El resto de escaños se distribuía entre Lima Metropolitana, las demás provincias del departamento de Lima, la provincia constitucional del Callao y cada uno de los demás departamentos del país. Aparte de la densidad electoral también se tomaba en cuenta a la densidad demográfica. Tuesta (1995) señala que uno de los errores de la repartición de escaños fue haber tomado como base la información demográfica del Censo Nacional de 1972, cuyas proyecciones no eran confiables. Asimismo, plantea que el criterio de representación se vio

⁴⁴ Víctor Polay, máximo dirigente del MRTA, afirmó que la experiencia fracasada del ARI mostró en forma descarnada las tremendas limitaciones de la izquierda y sus desviaciones (CVR, 2003). Para Tuesta (1995) fue la posibilidad del voto preferencial lo que evitó que el Frente Democrático (FREDEMO), liderado por Vargas Llosa, se truncara como proyecto político. Para este autor, al escoger la variante del voto preferencial se optó por reforzar la relación elector-candidato, disminuyendo a la vez la influencia del partido sobre los miembros que compiten por un puesto en la representación política.

Y se llama Perú...

distorsionado cuando se estableció un límite para la representación de Lima Metropolitana, ya que se estipuló que tendría 40 diputados de antemano. Esta medida fue defendida en su momento por algunos políticos como una buena manera de disminuir el centralismo limeño. En cambio, Tuesta (1995) afirma que el resultado de esta medida fue la sobrerrepresentación y la subrepresentación de algunas circunscripciones electorales. Los 40 diputados para Lima Metropolitana representaban el 22% de la composición de la Cámara de Diputados, mientras que esa circunscripción representaba al mismo tiempo al 32% del electorado nacional. En total, 16 circunscripciones quedaron sobrerrepresentadas, 10 permanecieron igual y 2 departamentos estuvieron subrepresentados (Tuesta, 1995)

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la competencia no implica instantáneamente competitividad (Lynch, 1999).⁴⁵ Por ello, en la década del ochenta se evidencia una competencia política restringida, o en todo caso, influenciada por ciertos factores políticos que alteraron su libre desarrollo. En los procesos electorales esto es notorio por los intentos constantes de Sendero Luminoso (SL) por sabotear los comicios electorales. En un texto de SL publicado en mayo de 1980 se fundamenta su posición con respecto a las elecciones:

“Así las elecciones son, pues, un instrumento de la guerra contrarrevolucionaria.(...) El boicot, por tanto, es una realidad incontrovertible y su éxito indiscutible; y muestra palmariamente cómo la política de entorpecer las elecciones, socavarlas e impedir las donde sea posible es altamente

⁴⁵ Siguiendo a Ware, Lynch señala que la competencia por sí misma no tiene un efecto democrático.

fructífera y, lo principal, genera una tendencia antielectoral, coadyuvando a la formación de la conciencia política del pueblo (...)" (CVR, 2003-II: 33)

No es casualidad que la acción simbólica que da inicio a la lucha armada de SL contra el Estado peruano fue la quema pública de las ánforas electorales del distrito de Chuschi (Ayacucho) el 17 de mayo de 1980. El párrafo anterior también muestra el desprecio que SL tiene contra toda organización política que participa en los procesos electorales, incluyendo a los partidos de izquierda, puesto que considera a las elecciones como un "instrumento de la guerra contrarrevolucionaria".

Para la CVR (2003), las elecciones municipales de 1980, que se realizaron el 22 de noviembre, demostraron que la fuerza de SL era mayor a la esperada. Esto se evidenciaría en la gran cantidad de votos nulos en algunos distritos rurales de Ayacucho. De igual forma, en uno de los distritos de la provincia de Angaraes (Huancavelica) no se pudo realizar la elección municipal, posiblemente a causa de SL. Aunque habría que matizar esta aseveración, teniendo en cuenta para ello la poca costumbre que existía en la población analfabeta de participar en los procesos electorales. Por ello, para las elecciones generales de 1980 se había decretado una medida transitoria en donde se estipulaba que para esas elecciones no se iba a sancionar a los analfabetos que no votaran. También, más importante fue el porcentaje de ausentismo en dichas elecciones que no sólo se restringió a Ayacucho o Huancavelica. Hay que hacer notar que los departamentos con un porcentaje alto de ausentismo también son los departamentos más pobres del país.⁴⁶

⁴⁶ El porcentaje nacional de ausentismo de esa elección fue del 31.1%. Esta cifra se obtiene de los datos

A pesar de todo, la presencia política de Sendero en determinadas zonas del país, como Ayacucho y Huancavelica, generó un efecto disruptivo importante del orden constitucional. Tal como lo constata la CVR (2003) hubo efectivamente zonas dentro del país donde logró erradicar toda presencia efectiva del Estado. En ese sentido, el sabotaje de los procesos electorales era importante para crear vacíos de poder en algunos distritos del país. Por eso, su accionar político-militar, paradójicamente, se intensificaba durante las campañas electorales. Para las elecciones municipales de noviembre de 1983, Sendero incrementó sus acciones armadas en el departamento de Huancavelica para obstruir la realización de elecciones en esa región. Durante la víspera de las mismas, detonaron 10 cargas explosivas en diferentes barrios de la ciudad de Huancavelica con lo que generaron terror entre la población. Como consecuencia de esta intensificación, no se pudieron realizar elecciones en los distritos de Manta, Vilca, Acobambilla, Pilchaca y Occoro (CVR, 2003). Evidentemente, no se trata de acciones aisladas, cada vez más Sendero logra realizar acciones armadas importantes en distintas zonas del país.⁴⁷

Para las elecciones generales de 1985, otra agrupación de izquierda alzada en armas se sumó al boicot contra el proceso electoral. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) hizo un llamamiento a favor del voto

presentados en dos cuadros de Tuesta (1987) donde se mencionan los resultados a nivel provincial y a nivel departamental. Sin embargo, la cifra del total de ausentes en ambos cuadros no corresponde con la cifra del cuadro de resultados a nivel nacional. Por tanto, el porcentaje que se presenta en ese cuadro es distinto (30.21%). Los departamentos que presentan los mayores porcentajes de ausentismo en las elecciones municipales de 1980 son: Amazonas (47.6%), Apurímac (52.6%), Ayacucho (52.2%), Cajamarca (45.5%), Cusco (45%), Huancavelica (47.8%), Huánuco (52.5%) y Pasco (40.5%). Asimismo, no se producen elecciones en las provincias de Sihuas (Ancash), Antabamba (Apurímac), Leoncio Prado (Huánuco), Loreto (Loreto), Mariscal Castilla (Loreto) y Manu (Madre de Dios).

⁴⁷ Hay que acotar que Sendero Luminoso no comienza siendo una agrupación netamente regional o circunscrita solamente a Ayacucho. Desde un inicio tiene cuadros operando en Huancavelica y en Lima.

Y se llama Perú...

viciado, a la vez que realizó diversos atentados. En marzo de 1985 atacaron la casa del entonces Ministro de Trabajo Joaquín Leguía y los locales de la cadena Kentucky Fried Chicken en Lima.⁴⁸ Por su parte, SL volvió a desarrollar una escalada armada, que tuvo como uno de sus hechos más importantes el atentado contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones el 24 de abril de 1985 (CVR, 2003).

Entre agosto y setiembre de 1989 se observó un nuevo repliegue de SL que aparentemente le sirvió para preparar su ofensiva en torno a las elecciones municipales de noviembre de ese año. A partir de octubre sus acciones subversivas se incrementaron notablemente, etapa que duró unos meses después, hasta diciembre. Una de las acciones de SL que generó más impacto fue el asesinato del alcalde provincial de Huamanga, Fermín Asparrent, en septiembre de 1989. Este tipo de atentados contra autoridades locales, especialmente alcaldes provinciales y distritales, era parte de la estrategia subversiva que dicha agrupación política tenía planificada. Para finales de los ochenta, SL logró desencadenar una ola de renuncias de autoridades municipales, especialmente en las zonas de emergencia: renunciaron 104 alcaldes y 224 regidores (Mauceri, 1989). Posteriormente, Sendero se repliega nuevamente hasta marzo del año siguiente para atacar con fuerza en el mes de mayo, en plena contienda electoral por la Presidencia de la República.

A pesar de todo, la contienda política en el aspecto electoral mantuvo su preponderancia en la década del ochenta. En cierta forma había demostrado ser más atractiva como ruta para la revolución o el cambio que el

⁴⁸ El MRTA comenzó sus acciones armadas oficialmente en 1984, aunque se venía preparando militarmente desde 1982.

planteamiento de una vía armada. Esto había llevado a la mayoría de partidos de izquierda a participar en los procesos electorales de forma intensa. No obstante, aún subsistía hasta finales de los ochenta un agudo conflicto ideológico interno; esto se expresó claramente en las pugnas dentro de la Izquierda Unida.⁴⁹ Por todo lo anterior, se puede señalar que la competencia política de los ochenta, en especial la electoral, fue restringida y limitada, tanto geográfica como socialmente.

Fueron las poblaciones más distantes, en ocasiones, y los grupos humanos más pobres y marginados los que sufrieron mayormente esta limitación, tal como lo ha señalado el Informe Final de la CVR (2003). Fueron víctimas de la represión del Estado y de la violencia vesánica de los subversivos. En ese sentido, no sólo se vio afectado el acceso de los representantes de los partidos, de observadores y medios de comunicación a los lugares de votación, sino que además había zonas del país donde incluso los propios candidatos no podían llegar. El peligro era doble si eran confundidos por los miembros del ejército como subversivos.⁵⁰

Por parte de la población existía el temor de las represalias de Sendero por su participación en los procesos electorales. En los lugares donde se desarrolló la violencia política de manera más virulenta, la población no era

⁴⁹ Las restricciones a la competencia política en el plano electoral no sólo se limitan a las incursiones armadas de Sendero, también habría que tomar en cuenta las limitaciones que impusieron, en los periodos electorales, los Estado de Emergencia que se establecieron en gran parte del país durante todo el periodo estudiado (1980-1995).

⁵⁰ Entrevista personal con el ex diputado por Huánuco Héctor Huerto Milla (1985-1990 y 1990-1992). Durante su campaña electoral de 1985 tuvo que lidiar tanto con Sendero como con los militares. En una ocasión, cuando realizaba su campaña electoral en un pueblo del departamento junto con su comitiva, fueron confundidos con subversivos por una patrulla del ejército, sobre todo, porque uno de los miembros de su comitiva iba armado, por lo que fueron retenidos. Felizmente, el jefe militar del departamento pudo identificarlos a tiempo. Existía la posibilidad de que fueran desaparecidos.

Y se llama Perú...

libre de ejercer su derecho de participar en los comicios electorales. Sin embargo, los procesos electorales no se paralizaron, continuaron dándose de manera periódica para frustración de los grupos alzados en armas.

Por último, en cuanto al desenvolvimiento y organización del sistema electoral, algo sumamente interesante es el grado de aceptación de los resultados electorales por parte de los distintos actores políticos durante toda la década del ochenta. La presencia de dos partidos políticos que operaban en la ilegalidad en oposición acérrima al régimen político no agravó los cuestionamientos hacia la forma como se desenvolvían los procesos electorales. Por ende, tan sólo se ha podido registrar un intento serio por desconocer los resultados electorales. Esto se dio tras las elecciones municipales de 1986, cuando uno de los más importantes dirigentes de IU, Alfonso Barrantes, en ese entonces alcalde de Lima, postuló a la reelección y perdió ante el candidato aprista, Jorge del Castillo. No obstante, la postura de IU no llegó a ser frontal, debido principalmente a la actitud de su candidato. Barrantes estaba, al parecer, más interesado en no dejarle espacio político a sus opositores dentro de IU que a enfrentarse con el gobierno aprista. Pronto, las acusaciones de fraude quedaron en el olvido.

El sistema de partidos de los ochenta.-

El debilitamiento de las organizaciones sociales como un espacio privilegiado para la competencia política, que en parte también era producto de las características institucionales del nuevo régimen político, trajo consigo la mayor figuración de los partidos políticos como actores predominantes dentro

de la escena política peruana. Aunque dicha relevancia también tuvo severas limitaciones. No obstante, los partidos políticos se convirtieron en los nuevos espacios favorecidos para el desarrollo de la lucha por el poder político.

Las interpretaciones sobre el sistema de partidos de los ochenta son diversas, e incluso, contrapuestas. No existe un consenso sobre el rol que jugaron en la década que desembocó en una crisis política de grandes magnitudes. Este debate va más allá de las interpretaciones del periodo, puesto que existe todavía una indefinición manifiesta sobre qué son los partidos políticos. La definición que se utiliza en este trabajo se contrapone a todas aquellas que relacionan intrínsecamente a los partidos políticos con los procesos electorales (Sartori, 1990; Busslleu, 2003; Tanaka, 1998; Tuesta, 1995).⁵¹ Para esta investigación se asume que los partidos políticos son fuerzas políticas organizadas cuyo objetivo es la conquista y el ejercicio del poder. Asimismo, los sistemas de partidos son la composición estructural de la totalidad de partidos políticos de un Estado (Murakami, 2007; Busslleu, 2003).

En el caso peruano se encuentra una gran paradoja que se contextualiza en un sistema de partidos embrionario y no institucionalizado.⁵² Esta paradoja, que ya ha sido definida antes como esquizofrenia para el caso específico de la izquierda marxista peruana (Huerto, 2008), se basa en la firme presencia de visiones encontradas de cómo debería ser el régimen político. Ambos bandos se debatían en torno a imágenes idílicas: el comunismo y la democracia. Aún así, todos los partidos políticos de los ochenta compartieron ciertas prácticas

⁵¹ Si para la existencia de los partidos políticos es necesaria su participación en procesos electorales, entonces resultaría válido preguntarse qué eran el APRA, AP y los partidos de izquierda durante los doce años de gobierno militar.

⁵² Lynch (1999) lo señala como un protosistema de partidos.

Y se llama Perú...

políticas, como el personalismo o el patrimonialismo, que han venido reeditándose continuamente en la política peruana y que obstruyen su desenvolvimiento. Entonces, este sistema embrionario se evidencia, tal como lo ha señalado Lynch (1999), en el pobre desempeño que tuvieron los partidos durante esa década.

Tanaka (1998), en cambio, plantea que, a pesar que considera al sistema de partidos como joven y frágil, funcionó efectivamente por lo que pudo cumplir con ciertos requisitos mínimos. Por eso, luego se refiere al colapso del sistema de partidos que aconteció a inicios de los noventa, ya que de no existir un sistema de partidos mínimamente estable resultaría muy difícil, al menos semánticamente, hablar luego de su colapso. De manera que para desarrollar esta parte voy a recurrir a los planteamientos de Tanaka (1998) de manera dialéctica.

El primer requisito que aparentemente habría cumplido el sistema de partidos peruano fue el lograr expresar las preferencias electorales dentro de los márgenes establecidos por ellos. De esta manera, el voto se concentra en cuatro actores políticos: Acción Popular (AP), el Partido Popular Cristiano (PPC), el APRA y la IU. Todos ellos conformarían al sistema de partidos exclusivamente. Lo primero que sale a luz frente a este postulado es que la dinámica de la contienda política y de la conformación del sistema de partidos de entonces no puede dejar al margen a los partidos antisistema (Sendero y el MRTA) ni generalizar de tal modo a los actores políticos como para reducirlos indebidamente de número.

Para tomar en cuenta a un partido político es necesario considerar tres aspectos fundamentales: las posibilidades que tiene un partido para ser gobierno o formar una coalición gobernante, sus posibilidades de chantaje desde la oposición y sus posibilidades de tener iniciativa política.⁵³ De acuerdo a esto habría que tomar en cuenta también a Sendero y al MRTA, que si bien es cierto nunca tuvieron posibilidades reales de llegar al poder, sí tuvieron la capacidad de cambiar la coyuntura política de acuerdo a sus expectativas, es decir, tuvieron iniciativa política. En el caso de Sendero esto es más notorio y se evidencia con el asalto a la cárcel de Huamanga en 1982, que motivó el posterior ingreso de las FFAA a Ayacucho, y el motín de presos senderistas en distintas cárceles de Lima en 1986, que terminó con la denominada masacre de los penales, entre otras acciones. En todas ellas demostró que era capaz de cambiarle la agenda política al gobierno de turno.

Además, dentro del grupo de los partidos “legales” no se encuentran sólo 4 actores políticos. Para entender a la izquierda es imposible hacerlo si se parte de la consideración de que constituye un solo actor político. En las primeras elecciones del periodo, la izquierda había demostrado las dificultades que tenía para organizarse en un frente. Incluso la experiencia de los frentes que se crearon para la Constituyente, especialmente el caso del FOCEP, había demostrado que el estar dentro de una plataforma política mayor no implicaba un mismo compromiso político. Por eso, tal como fue planteado en un inicio por las propias organizaciones integrantes, Izquierda Unida fue sólo una plataforma estratégica de lucha y no una estructura orgánica. Eso explica el por qué se

⁵³ Las dos primeras corresponden a planteamientos de Sartori (1990). Estos planteamientos son recogidos a la vez por Tuesta (1995), Lynch (1999) y Busslleu (2003).

Y se llama Perú...

demoraron casi nueve años en organizar un congreso, que al final produjo la ruptura definitiva del frente.

Inicialmente, IU estaba conformada por el Partido Comunista, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Revolucionario-Clase Obrera, la Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR), la UDP y Patria Roja. Sin embargo, a lo largo de la década su composición partidaria fue variando como resultado de diversas uniones o rupturas, complejizando así su dinámica política interna. Inicialmente, frente a este crisol de organizaciones políticas surgió la figura de Alfonso Barrantes, quien tuvo un rol dirimente. Hay que tomar en cuenta también que ni en las elecciones generales de 1980, ni en las municipales de 1989, ni en las generales de 1990 la izquierda postuló en un solo bloque.

En el caso de los partidos de derecha habría que tomar en consideración otras variables, como es su predisposición a constituirse en frentes sin que eso implique la pérdida de su propia identidad partidaria. Esta predisposición se debe a una mayor capacidad de adaptación a la contienda electoral, que la que tenía la izquierda, y a un menor apoyo electoral, sobre todo en contraposición con el APRA. Esto se observa cuando AP se ve obligado a aliarse en el gobierno con el PPC para así poder controlar ambas cámaras del Congreso, o cuando el PPC crea una especie de frente Convergencia Democrática (CODE) para participar en las elecciones de 1985, o en la creación del Frente

Y se llama Perú...

Democrático (FREDEMO) que unió a AP, el PPC y a una nueva organización política, el Movimiento Libertad, para las elecciones de 1990.⁵⁴

Entonces, habría también que matizar lo que Tanaka (1998) planteó en cuanto a la concentración del voto por parte del sistema de partidos. En vista de que, como se ha mencionado anteriormente, no sólo interactúan cuatro actores partidarios, los mismos que ni siquiera son constantes en su participación electoral, como es el caso de AP que no participa en las elecciones municipales de 1986 al declararse en reorganización. Además es notorio en los ochenta la necesidad de los partidos de apoyarse en nuevas organizaciones o figuras independientes (Planas, 2000). Tanaka, al parecer, contabiliza sólo los votos válidos y no toma en cuenta los votos en blanco ni los viciados al nombrar los porcentajes de esta supuesta concentración del voto, por lo que los números que presenta son abultados.⁵⁵

En contraposición se puede apreciar un considerable ausentismo que gira alrededor del 26% en todo ese periodo. Si sumamos el porcentaje de los que no se presentaron a votar con los porcentajes de los que votaron en blanco o viciado se va a tener a un sector de la población que, al menos, en cada proceso electoral no se sintió identificado con ninguno de los candidatos. En las elecciones generales de 1980 ese porcentaje fue del 43.2%, en las municipales de 1980 fue del 45.6%, en las municipales de 1983 fue del 53.7%, en las generales de 1985 fue del 22.8%, en las municipales de 1986 fue del 36.8%, en

⁵⁴ Habría que acotar que el FREDEMO participó en las elecciones municipales de 1989 sólo gracias a la presión que ejerció su candidato presidencial Vargas Llosa ante la oposición de los otros líderes partidarios, Belaúnde y Bedoya.

⁵⁵ Señala que la concentración del voto en las elecciones generales de 1980 es del 96.5%, en las municipales de ese año de 92.7%, en las municipales de 1983 del 93.5%, en las generales de 1985 del 97%, en las municipales del 86 del 93.2%, en las municipales del 89 del 71.5% y en las generales del 90 del 68%.

Y se llama Perú...

las municipales de 1989 fue del 52.6%, y en las generales de 1990 fue del 37.2%.⁵⁶ Entonces, durante toda esa década la proporción de ciudadanos que no elige a ninguno de los candidatos que se presentan en los distintos procesos electorales llega al 41.7%. Si a esto le sumamos la presencia de dos grupos políticos alzados en armas y el 54.4% de la volatilidad del voto en los ochenta (Tanaka, 1998), se puede observar que la falta de representación no sólo se hizo presente en el desenlace de la crisis política sino que fue una característica del periodo.

Lo que se puede perfilar entonces es a un electorado joven, de poca experiencia electoral, pero que está en una búsqueda constante por una representación política que satisfaga sus expectativas de cambio y mejora social, sobre todo en un ambiente caracterizado por la inseguridad en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Por el otro lado, se observa a un sistema de partidos poco institucionalizado que se va reconstruyendo constantemente y va incorporando a nuevos actores políticos, en donde la izquierda peruana surge como una importante alternativa de representación. Si se aplicara el mismo estilo de análisis que se ha hecho a la presencia de Fujimori en 1990 a las elecciones de 1980, se podría decir que gran parte de las organizaciones de izquierda, sus militantes y dirigentes, eran *outsiders* puesto que no tenían una participación previa en el sistema de partidos que imperó antes del gobierno militar de Velasco. La izquierda representó en un primer momento la inclusión de grandes sectores sociales que habían sido

⁵⁶ Estos porcentajes tampoco son una referencia contundente en la medida en que no se puede disgregar el voto nulo, por lo que no se puede saber cuántos votos nulos en realidad son votos que se realizaron de manera incorrecta y fueron anulados en la mesa. Asimismo, el ausentismo puede encontrar muchas causas aparte del problema de la representación. Sin embargo, me parecen lo suficientemente importantes como para no ser dejados de lado.

Y se llama Perú...

incorporados a la ciudadanía activa gracias a las importantes reformas que dictó la primera etapa del gobierno militar. Por eso, el gran logro de la izquierda en ese contexto fue hacer creer a gran parte de la población que una sociedad socialista era posible (González, 1999). Pero esa apuesta política de dichos sectores de la población distaba de ser un cheque en blanco.

Por eso, cuando Tanaka (1998) se refiere al segundo requisito que cumplió el sistema de partidos en los ochenta, que fue el de intermediar y representar las demandas e intereses de los grupos de interés y de los movimientos sociales, se equivoca. En primer lugar, y en relación con lo anterior, la izquierda nunca fue capaz de establecer alternativas importantes a las principales políticas de gobierno, como fue la lucha antisubversiva, la regionalización o el tema de la deuda externa, ya que nunca definió claramente una postura a favor del régimen político imperante, con la excepción de algunos sectores al interior de IU (Pásara, 1989).

Estuvo más preocupada por su propio debate ideológico que tenía como objetivo la construcción de una sociedad diferente: "Dado que las propuestas no están pensadas para el gran público, los temas que no son prioritarios para los cuadros de izquierda –aunque lo sean para la ciudadanía general, como (...) la deuda externa (...)– no reciben sino una atención secundaria." (Pásara, 1989: 58). Progresivamente, esta actitud les fue alejando de la población que empezó a ver sus luchas internas como conflictos personales motivados por la ambición. En una encuesta de APOYO en agosto de 1989, hecha en Lima, el 55% de las personas pensaba que la causa principal de la crisis de IU eran las

Y se llama Perú...

rivalidades personales, mientras que sólo un 34% pensaba que se debía a discrepancias ideológicas (Lynch, 1999).

Esta actitud ideológica afecta indudablemente la dinámica de las organizaciones sociales a las que la izquierda se hallaba muy ligada, perjudicándolas en gran medida, puesto que expone constantemente a los trabajadores sindicalizados a la represión generalizada, que no sólo hace peligrar su estabilidad laboral sino también su integridad física.

Este desgaste va a ir aumentando debido a la crisis económica que va a incentivar el crecimiento de un sector informal en la economía, por lo que cada vez más hay menos trabajadores formales, por ende, menos trabajadores sindicalizados. En el campo, el empleo agrícola sufrió desde la década del sesenta una caída marcada en su participación porcentual de la Población Económica Activa (PEA) nacional, del 52.8% del PEA en 1961 pasó al 32.9% en 1981. La reforma agraria dada durante el gobierno militar no cambió en nada este proceso. A la vez, el sector industrial fue incapaz de recibir a los trabajadores provenientes del sector agrario, ya que se basaba en un uso intensivo del capital y no de la mano de obra. Esto se evidencia en su porcentaje en la PEA que casi no varía, del 13.5% en 1961 pasó al 12.6% en 1981. Esto promovió el crecimiento de los sectores informales en la economía que se evidencia cuando se analiza el porcentaje de las denominadas actividades "terciarias" en el PEA: del 24.1% de 1961 se pasó al 36.2% en 1981.⁵⁷ Esta situación se fue agravando a lo largo de la década. En comparación con 1974, a mediados de los ochenta había menos de medio

⁵⁷ Según Stein y Monge (1988) si se le agrega a este porcentaje el sector construcción, que tiene muchas de las características de los informales, el porcentaje llegaría al 40%.

Y se llama Perú...

millón de trabajadores adecuadamente empleados. Asimismo, el número de subempleados había aumentado en un 80% y el de desempleados se había triplicado. Tan sólo en el lapso de 1980 y 1984 el porcentaje de los desempleados había crecido en un 76%. Igualmente, para 1984 la remuneración mínima legal sumaba sólo el 64% de lo que se recibía en 1979, y el 46% de lo que se recibía en 1973. Además, el salario mínimo tan sólo representaba en 1984 el 20% del ingreso mínimo de subsistencia. En vista de ello, los cada vez menos trabajadores formales no se arriesgaban a perder el empleo o a afectar su subsistencia económica (Stein y Monge, 1988).

Paulatinamente, gracias a su indecisión en torno al tema de la lucha armada, la izquierda fue demostrando su incapacidad para representar una alternativa sólida de cambio. Además, la debilidad de las organizaciones sindicales, que fracasaron mayormente en las protestas que protagonizaron en 1988, se fue acrecentando. El detonante de su desprestigio fue la quiebra de IU, lo que motivó a que el electorado buscara nuevas alternativas políticas.⁵⁸ De ser la izquierda latinoamericana con mayor fuerza electoral o la segunda fuerza política del país pasó a tener una votación ínfima y dividida en las elecciones generales de 1990. El cambio fue demasiado brusco, pero no tan inesperado como se piensa, tal como lo señaló uno de los principales dirigentes de IU, Santiago Pedraglio: “A nosotros nos perdonó la vida el pueblo no una sino muchas veces, hasta que un día nos dijo: váyanse a la mierda” (Lynch, 1999). También puede haber influido en este viraje en las perspectivas de la representación política, la emergencia de nuevos sectores medios provenientes

⁵⁸ Tanaka (1998) le da importancia en las elecciones de 1990 a la presencia de un “voto estratégico” que benefició a Fujimori en la medida en que buscaba que Vargas Llosa no saliera ganador. Sin embargo, habría que preguntarse qué votos no son estratégicos en una contienda electoral.

Y se llama Perú...

de los sectores informales de la economía, caracterizados por un “agresivo arraigo cultural de sabor provinciano y popular” (Stein y Monge, 1988).

Por otra parte, el accionar de Sendero Luminoso caracterizado por su vesánica violencia y dogmatismo habían ido desacreditando la opción de una sociedad socialista. Esto fue quedando claro con el terror que fue desatando con sus atentados y asesinatos (CVR, 2003; Gorriti, 1990). El terror se desata en 1983 cuando la CVR registra 1107 muertos o desaparecidos causados por Sendero, cifra que casi se va a duplicar al año siguiente como se muestra en el cuadro a continuación. Luego, la violencia causada por Sendero va a disminuir hasta 1989, cuando vuelve a arreciar en su intento por hacer fracasar las elecciones municipales de ese año. En 1989 se registraron 1413 muertos o desaparecidos, en 1990 fueron 1371, en 1991 fueron 1015, con lo cual Sendero va entrando progresivamente en una fase de repliegue. A pesar de ello, sectores altamente ideologizados de la izquierda marxista se van desgajando de IU y uniéndose a los grupos alzados en armas.⁵⁹ Esto explica también por qué IU no zanjó definitivamente con el tema de la lucha armada por el temor a seguir perdiendo dirigentes, por eso nunca renuncia explícitamente al uso de la violencia como herramienta política (CVR, 2003).⁶⁰

⁵⁹ En diciembre de 1986 once dirigentes de Patria Roja dirigen una carta pública al entonces Secretario General de su organización en donde critican el alejamiento de su postura militar, orientada a organizar la lucha armada en pos de la revolución. Este grupo se separa de Patria Roja y forma el UNIR-Bolchevique, que tiempo después se disolvió y algunos de sus integrantes pasaron a las filas del MRTA y Sendero. Algo parecido sucedió en marzo de 1990 cuando algunos militantes radicalizados del PCP abandonan sus filas y formaron el Bloque Popular Revolucionario y el Frente Patriótico de Liberación, cuyos militantes luego se incorporaron a Sendero y al MRTA

⁶⁰ También a finales de los ochenta se puede apreciar cierta militarización del PCP y del Partido Unificado Mariateguista (PUM) que en vista de los ataques de Sendero a sus dirigentes políticos proponen la autodefensa armada de sus militantes. Uno de los dirigentes del PUM incluso propuso declararle la guerra a Sendero (CVR, 2003).

Si se analiza el prototipo de las víctimas de Sendero, se puede también colegir el por qué se desprestigió la izquierda en algunos sectores populares. Se trata en su mayoría de hombres jóvenes entre los 20 y 40 años, con un bajo nivel educativo, casados, campesinos y quechuahablantes. Más de 7 000 de las víctimas tenían entre 20 y 40 años, 6 756 sólo habían cursado la primaria, 10 473 eran casados o tenían convivientes, 11 376 tenían como idioma materno al quechua y 6 897 eran campesinos. Además, aparte de los campesinos asesinados por Sendero, 2 359 fueron autoridades y dirigentes locales. En realidad, la mayor parte de víctimas de SL provenía de aquellos sectores sociales que la izquierda decía representar. No resulta nada sorprendente que para las elecciones presidenciales de 1990, la votación que obtuvo Fujimori en los departamentos con mayor proporción de quechuas y aymaras, en la segunda vuelta electoral, haya sido de un 67% en comparación con un 14% para Vargas Llosa (Degregori, 1991).⁶¹

En cuanto al APRA, AP y el PPC su desempeño estuvo también lejos de ser ejemplar. Tuesta (1995) califica al PPC como un partido meramente electoral que carece de mayor presencia política en los periodos en donde no hay campañas electorales. Además, sus votantes provienen casi únicamente de la clase media alta del país y están circunscritos principalmente a los distritos residenciales de Lima (Planas, 2000). Por su parte, Tuesta (1995) califica a AP como el partido menos programático. Asimismo, Vargas Llosa afirmó que AP carecía de una estructura partidaria a nivel nacional (Vargas Llosa, 1993). Su debilidad orgánica fue manifiesta tras su fracaso electoral de

⁶¹ Estos departamentos son: Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Puno. Además también son zonas donde la violencia política se ha mostrado más encarnizada.

Y se llama Perú...

1985 en donde obtuvo sólo el 7% de los votos válidos por lo que se tuvo que declarar en reorganización y no participar en las elecciones municipales de 1986.

El caso del APRA es mucho más complejo, ya que rápidamente logra superar su crisis interna de inicios de los ochenta y consolida una posición política de centro izquierda que se muestra eficaz para dejar sin juego político a los partidos de izquierda. Aún así, según Tuesta (1995) lo que se evidencia con el APRA es que va perdiendo su condición de partido multclasista. A pesar de todo, sobre todo del mal manejo económico que hizo su gobierno y la ausencia de una adecuada política antisubversiva, el APRA obtiene una votación importante para las elecciones parlamentarias de 1990 que le otorga 53 diputados y 17 senadores, con lo que se convierte en la segunda fuerza política dentro del Congreso, tras el FREDEMO. Curiosamente, su relativo éxito en la década del ochenta no se debe a sus cualidades “democráticas”, más bien, al dominio de ciertas prácticas políticas no formales, como el clientelismo, el personalismo y el patrimonialismo. Así también, a un oportuno manejo de la coyuntura política que implicaba, ya desde finales de los años setenta, afirmar su posición como de “izquierda democrática”.

El tercer y último requisito que menciona Tanaka (1998) se refiere a la capacidad que tienen los partidos relevantes de mantener los pactos explícitos e implícitos para que el juego democrático pueda continuar. Señala que los intereses que tenían los partidos en mantener el juego democrático eran mayores que las ganancias que hubieran obtenido al sabotearlo. Sin embargo, esto no parece ser cierto para los mismos actores políticos a lo largo de la

Y se llama Perú...

década del ochenta. Ya se ha mencionado cómo la izquierda organizada alrededor de IU no termina por decantarse a favor del sistema democrático. Incluso, a finales del primer gobierno aprista, corren rumores de que García está organizando un autogolpe de estado con la excusa del avance senderista, lo que hace reaccionar a algunos sectores militares y empresariales. La sospecha, la desconfianza y, especialmente, una forma confrontacional de hacer política, caracterizaban la interrelación entre los distintos actores políticos.

El planteamiento de Tanaka no toma en cuenta como actores relevantes a SL y el MRTA, ni menciona las particularidades de una transición política en la cual sólo se comprometen dos actores políticos, el APRA y el PPC. Basta mencionar que las agrupaciones de izquierda que participaron en la Constituyente no firmaron la Constitución. Asimismo, AP se mantuvo al margen de todo este proceso en una decisión de último momento, por lo que se sumó desde la otra orilla a la postura de las organizaciones radicales como Sendero y Patria Roja, que tampoco participaron.

Y se llama Perú...

CUADRO 1
PERÚ 1980-2000: CANTIDAD DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS POR PRESUNTO RESPONSABLE GRUPAL

AÑO	TOTAL	PRESUNTO RESPONSABLE GRUPAL				
		PCP SENDERO LUMINOSO	AGENTES DEL ESTADO	CADS	MRTA	NO DETERMINADO Y OTROS
TOTAL	22 507	12 564	7 260	466	339	1 878
1980	23	13	6	-	-	4
1981	49	34	9	-	-	6
1982	576	379	148	8	2	39
1983	2 256	1 107	990	26	3	130
1984	4 086	2 053	1 728	110	1	194
1985	1 397	700	585	33	7	72
1986	920	488	344	4	2	82
1987	1 135	737	274	12	4	108
1988	1 470	929	400	15	19	107
1989	2 400	1 413	663	27	65	232
1990	2 327	1 371	602	90	53	211
1991	1 837	1 015	483	71	66	202
1992	1 771	928	574	28	62	179
1993	1 016	721	174	15	17	89
1994	411	225	109	3	16	58
1995	290	166	50	8	14	52
1996	177	93	50	8	4	22
1997	140	78	26	2	2	32
1998	105	57	23	2	-	23
1999	86	38	17	3	1	27
2000	35	19	5	1	1	9

Fuente: CVR, 2003

En cambio, lo que se puede constatar con mayor claridad es una política confrontacional que se caracteriza por análisis políticos de corto plazo y por un deseo, no del todo oculto, de “aniquilar” a todo rival político.⁶² Ese es uno de los obstáculos que hace tan difícil la concertación política en los ochenta. Tuesta (1995) afirma que el sistema de partidos que se desarrolló entre 1978 y 1989 se caracterizó, entre otras cosas, por posiciones políticas semi-irresponsables. A su vez, Lynch (1999) plantea:

“El hecho que estos partidos no entendieran sus propuestas como planteamientos de un grupo para el conjunto, sino como la expresión de un grupo que representaba al conjunto (*el partido del pueblo, el partido de la clase*

⁶² Lynch (1999) se refiere a la política confrontacional como a una concepción totalizadora que busca la eliminación del contrario.

obrero), les hacía imposible asumir la interacción con los otros partidos como una competencia democrática y por lo tanto como base de un orden plural.⁶³

2. El patrimonialismo de los ochenta.-

Otra de las características importantes que define al régimen político peruano de los ochenta es el patrimonialismo, que se aprecia cuando se analiza el uso que le dan a los recursos del Estado los gobernantes o aquellos que ostentan algún tipo de poder político. En ese sentido, lo más notorio es la forma como se fue estipulando el sistema electoral para favorecer o para desfavorecer a determinados candidatos o agrupaciones políticas. Para Tanaka (1998) el sistema de dos vueltas que se estableció en el contexto de la Constituyente de 1979 para la elección presidencial, fue hecho con la finalidad de impedir que la izquierda llegara al poder. En una hipotética segunda vuelta se esperaba que todas las fuerzas políticas que no eran de izquierda se agruparan en torno al otro candidato.

Para 1984 hubo otro cambio importante en el sistema electoral promovido por el partido gobernante de entonces, AP. Se aprobó una modificatoria de ley en donde se decretaba que los votos válidos tendrían que ser contados tomando en cuenta a los votos viciados y blancos. Esta medida estaba orientada a impedir la victoria del APRA en primera vuelta. Asimismo, durante el gobierno de García hubo al menos un intento oficial para modificar la constitución para permitir la reelección presidencial. Esto fue motivado por la

⁶³ Un ejemplo de estas dificultades de llegar a una concertación se dio en agosto de 1982 cuando el APRA rechazó la propuesta del presidente Belaúnde de otorgarles cuatro ministerios.

ambición política del propio García y por el enorme apoyo popular que tuvo su gobierno durante sus dos primeros años:

“De esta manera (...) las discusiones sobre el cambio de las reglas de juego se realizan bajo la perspectiva de intereses de las fuerzas políticas que ostentan el poder. Las reformas políticas no se llevan a cabo mirando el futuro sino el corto plazo, lo que agrega mayores problemas a los que se quieren resolver.”
(Tuesta, 1995:83).

El uso de los recursos del Estado no se limitó al cambio del sistema electoral para beneficio de algunos interesados, sino también se utilizó el dinero del Estado para favorecer directamente a un candidato durante su campaña electoral. Esta particularidad fue tan común que Tuesta (1995) pareciera sorprenderse de que Belaúnde no empleara un intenso gasto social para beneficiar al candidato de su partido, Javier Alva Orlandini, en las elecciones generales de 1985. Explica esto de acuerdo a las pugnas internas dentro de AP, en donde Belaúnde, al parecer, no quería que la candidatura de Alva Orlandini llegara al poder puesto que podía opacar su propia influencia política dentro de su partido. Algo parecido sucedió en las elecciones de 1990 cuando García asumió una posición personal contraria a la del candidato aprista, Alva Castro, aunque no de manera explícita. Esta medida también se dio por el temor de García de ver mermada su influencia política dentro del APRA, por ende, sus posibilidades a postular de nuevo a la presidencia (Tanaka, 1998). Reyna (2000), por su parte, incide en el manifiesto protagonismo presidencial de García en las elecciones municipales de 1986, en donde el propio presidente parecía estar postulando a la vez para alcalde.

En las elecciones presidenciales de 1990, el uso de los recursos del Estado para desmedro de la candidatura de Vargas Llosa se hace evidente. En un inicio, García decidió apoyar la candidatura de Barrantes, sin embargo en enero de 1990 se decepcionó de su labor política durante la campaña electoral, lo que coincidió con un cambio importante en las encuestas. Alva Castro, el candidato del APRA, había pasado al segundo lugar de las preferencias. Para apoyar a Barrantes, García había designado a su asesor Hugo Otero, quien le había diseñado la campaña electoral de 1985. No obstante, Barrantes se negó a trabajar con Otero, no parecía motivado, se quejaba a menudo de que García quería manipularlo, e incluso, llegaba ebrio a los mítines (Tanaka, 1998). En vista de ello, Tanaka (1998) especula que la intención de García fue restarle votos a Pease para que la candidatura de Barrantes pudiera reflotar de nuevo. Para ello, digita algunas portadas en el diario Página Libre, bajo la dirección de Guillermo Thorndike, en donde se informa grandilocuentemente que Fujimori había superado a Pease en las encuestas. El diario Página Libre, que sólo circulaba en Lima Metropolitana, fue creado por el propio García en 1990 con la expresa intención de utilizarlo en la campaña electoral. Aunque esto fue negado hasta el último momento por su entonces director, Guillermo Thorndike, García lo dejó en evidencia en unas declaraciones suyas en una entrevista que sostuvo con el periodista Beto Ortiz cuando se encontraba exiliado en Colombia.⁶⁴ Cuando el entrevistador le pregunta a García si era el propietario del diario Página Libre, éste le responde: “Bueno, no era sólo mío. Cuando constatamos la fuerza que tenía Vargas Llosa en los medios, nos dimos cuenta

⁶⁴ Diario La Primera, 22 de junio del 2008. Esta fue la última entrevista que concedió Thorndike a los medios de prensa, ya que recientemente ha fallecido.

que la única forma de hacerle frente era poner un periódico y le encargamos al gordo Guillermo Thorndike que lo dirigiera” (Ortiz, 2000). Esta forma de hacer política desde el gobierno fue ratificada en las declaraciones recientes del presidente García ante una reunión de banqueros latinoamericanos: “En el Perú, el presidente tiene un poder, no puede hacer presidente al que él quiera, pero sí puede evitar que sea presidente quién él no quiere. Yo lo he demostrado”.⁶⁵ Esto fue una directa alusión a la campaña electoral de 1990. Aún así, queda la duda de si García ha demostrado más cosas: “Oiga, señor Ortiz, hágame el favor: ¿quién cree usted que inventó a Fujimori?” (Ortiz, 2000).

A partir de ese momento, el crecimiento de la intención de voto de Fujimori en las encuestas va a ser sostenido. A inicios de marzo Fujimori había superado la barrera del 1%, logrando a finales del mismo mes llegar al 9% según la encuestadora APOYO (Tanaka, 1998). Al parecer, García se había convencido de la necesidad de crear otro candidato que pudiera competir con Vargas Llosa, por lo que había mandado emisarios a tantear distintas posibilidades. Una de ellas fue la del líder de una secta religiosa, que postulaba también a la presidencia, Ezequiel Ataucusi. García envió a su ministro del Interior, Agustín Mantilla, para conferenciar con él: “De aquella incursión en el templo israelita, Mantilla regresó estupefacto: no, ese no era el hombre.” (Ortiz, 2000). En ese contexto, Fujimori surge como la mejor elección, idea que se consolida cuando logra llegar a la segunda vuelta electoral, por lo que decide ordenar al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el general Edwin

⁶⁵ Diario Perú 21, 25 de marzo del 2009.

Y se llama Perú...

Díaz, que apoye la candidatura de Fujimori (Lynch, 1999; Rospigliosi, 2000; Obando, 1999; Uceda, 2004). Tanaka (1998) también señala que García envió a Hugo Otero a apoyar a Fujimori entre la primera y la segunda vuelta electoral.

Esta forma de utilizar los recursos del Estado para provecho personal termina recreando políticas estatales de corte clientelista, porque al personalizar la relación entre los representantes y representados se recrea la imagen de que los representantes son los únicos capaces de otorgar ciertos beneficios sociales y económicos a la población. De esta forma se aseguran votos para su reelección o para la obtención de otros cargos políticos. Lynch (1999) postula que tanto Belaúnde como García, aunque de diferentes formas y maneras, utilizaron al aparato y los recursos del Estado para satisfacer a sus "clientes". Asimismo, Tuesta (1995) señala que los parlamentarios de AP desarrollaron clientelas políticas para cargos menores. También señala que durante el gobierno aprista el APRA logró copar los puestos de la administración pública de tal manera que su carnet de militancia pasó a ser un documento importante. Incluso los nuevos actores sociales, como las madres de los comedores populares o del vaso de leche, que en un inicio fueron vistos como nuevos ejemplos de la activa participación popular en la política, demostraron con el tiempo que constituían más bien una nueva forma de asistencialismo, en donde se le había puesto un tono reivindicativo a la caridad (Pásara, 1991). Nena Delpino afirma que el discurso izquierdista ha contribuido paradójica y fundamentalmente, a través de prácticas asistencialistas, a que esto suceda (Pásara, 1991).

Y se llama Perú...

Todo ello coadyuva a que se generen estructuras burocráticas informales, basadas en las relaciones personales del propio gobernante, lo que genera que ciertas personas que no son funcionarios públicos puedan acumular cierto poder político de acuerdo a su influencia o grado de cercanía con el presidente. En muchos casos esto provoca conflictos y recelos entre los miembros del partido y estos allegados, que suelen ser denominados como asesores, ya que afecta principalmente la forma como se toman las decisiones políticas. Aunque se comenta que estas “camarillas” que se forman alrededor del gobernante se pueden encontrar en los gobiernos de Belaúnde y García, no he encontrado datos específicos al respecto. Dentro de las FFAA se señala que se organizan “argollas” alrededor de los posibles futuros Comandantes Generales, con la esperanza de obtener más adelante beneficios personales (Obando, 1999). Más evidente resulta la tendencia de estos gobernantes de tomar decisiones políticas inconsultas con respecto a su partido y la crítica que los militantes les dirigen por no hacer un gobierno del partido.⁶⁶ Por ejemplo, Tuesta (1995) afirma que Belaúnde tomaba las decisiones políticas más importantes sin consultar a su comité político. En el XVI Congreso Nacional del APRA los militantes apristas interrumpieron en varias ocasiones el discurso de Alan García criticando la presencia de algunos de sus asesores en el gobierno. Con Fujimori, la presencia e influencia de estos allegados en el poder va a ser más notoria.

⁶⁶ Estas críticas de los militantes enfocadas a una mayor participación del partido en el gobierno pueden ser algo ineludibles dentro de la misma dinámica política ya que probablemente es una de las maneras en que se ejerce presión sobre los dirigentes. Aunque también puede ser sintomático de una forma confrontacional y sectaria de ver la política.

Como consecuencia de estas actitudes patrimonialistas, se puede evidenciar en los ochenta altos niveles de corrupción que afectan casi de forma generalizada a gran parte del Estado. Para inicios de esa década los sectores más afectados eran la burocracia, la policía y las Fuerzas Armadas (Uceda, 2004; Rospigliosi, 2000; Gorriti, 1990). Para mediados de la década de los ochenta, con la captura de uno de los más importantes capos del narcotráfico en el Perú se descubrieron los contactos que tenía con altos oficiales en la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) (Gorriti, 1990). Asimismo, para 1984 estalló un escándalo de corrupción a raíz de la compra de dos motonaves, el Mantaro y el Pachitea, que se malograron sin entrar en actividad. El agravante de este hecho fue que se tuvo que pedir un préstamo internacional en 1981 para realizar esta compra. Para Lynch (1999) la corrupción se extendió durante el gobierno de García. Un alto dirigente empresarial, según uno de sus entrevistados habría llegado a decir: “mira, con estos verdes yo hago bailar a los apristas”. Para finales de los ochenta, la sensación de la población era que la corrupción era uno de los grandes problemas del país.

3. El personalismo de los ochenta.-

Tal como se ha definido al personalismo en el primer capítulo, éste se desarrolla tanto en el ámbito del liderazgo político como en la forma como ese liderazgo se interrelaciona con los demás elementos del régimen político. En el primer aspecto se pueden encontrar varios indicadores interesantes.

Y se llama Perú...

CUADRO No. 29:
EXPLICACIONES A LA CRISIS ECONÓMICA
EN EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA

RAZONES:	TOTAL
Corrupción	25
Mala gestión administrativa	16
Mal manejo económico	11
Falta de apoyo político	4
No tuvo programa económico	4
Conflicto con organizaciones	4
Caudillismo demagógico de AGP	3
Estatización de la banca	3
Empresarios no invirtieron	3
Aplicó ideología errónea	2
Demagogia del gobierno	2
Otros	11
NS/NC	12
TOTAL	100

FUENTE: Encuesta realizada en la ciudad de Lima a 610 personas, por la empresa APOYO. La pregunta fue: ¿A quién considera como el principal responsable de la crisis económica del país?

Fuente: Lynch (1999)

El primero de ellos está relacionado con la forma como los partidos políticos eligen a sus candidatos electorales y a su dirigencia. Para los ochenta lo que se puede apreciar es que los principales actores políticos, el APRA, el PPC, AP, y las distintas organizaciones de izquierda, están compuestos por pequeñas elites dirigenciales, claramente diferenciadas del común de la militancia puesto que se trata de estructuras partidarias jerárquicas y verticales. Esto se da al margen de su discurso ideológico. Básicamente los partidos políticos se fueron organizando alrededor de algunos liderazgos bien definidos. De esta forma, no se podría entender al APRA sin Haya de la Torre, a AP sin Belaúnde o al PPC sin Bedoya. La trayectoria personal de cada uno de estos líderes políticos ha ido de la mano con la trayectoria de sus respectivos partidos políticos. Por ello, ha terminado primando la imagen política sobre la elaboración ideológica. Para la izquierda, si bien es cierto que pareciera primar el debate ideológico, según Lynch (1999) y Gonzáles (1999), al parecer,

Y se llama Perú...

muchas veces lo supuestamente “ideológico” terminó escondiendo rencillas o ambiciones personales.⁶⁷

En ese sentido, se puede decir que no había mucha cabida para la democracia interna dentro de los partidos políticos de los ochenta. Sus principales líderes se convirtieron por antonomasia en los candidatos perpetuos. Haya de la Torre mientras estuvo vivo fue el candidato vitalicio del APRA en las elecciones presidenciales, salvo cuando ese partido se vio obligado a negociar su apoyo político a otro candidato. Igualmente, Belaúnde fue candidato a la presidencia en tres ocasiones. Bedoya, por su parte, postuló a la presidencia dos veces y a la alcaldía de Lima en tres ocasiones, logrando ser alcalde en una oportunidad. En el caso de la izquierda, lo que se puede apreciar dentro de IU es una sumatoria de pequeños liderazgos que compiten constantemente entre sí por obtener una mayor cuota de poder. A lo largo de la década quedó demostrado que esa dinámica también resultó nociva para el desarrollo político de IU.⁶⁸ Además, ninguno de estos líderes partidarios se mostró dispuesto a ceder su cuota de poder dentro de sus propios partidos. Para Tuesta (1995) se trataba de un problema de diseño institucional puesto que la posibilidad de que pudieran postular de nuevo a la presidencia provocó que Belaúnde y García mantengan el control sobre sus partidos. En el caso de

⁶⁷ Hay que tener en cuenta para el caso de la izquierda marxista que existen algunos elementos ideológicos que ayudan a reforzar el personalismo dentro de sus organizaciones. Entre ellos se pueden encontrar la concepción del partido de cuadros y la noción que manejan de una vanguardia política, entre otros.

⁶⁸ Barrantes intenta asumir tras su éxito electoral en las municipales de 1983 un liderazgo personalista dentro de IU pero no logra su cometido y a la larga coadyuva a generar la división de IU en 1989. Para Lynch (1999) el liderazgo de Barrantes se basaba en dos cualidades: una importante capacidad de mediación entre las distintas facciones y una gran capacidad de comunicación con la ciudadanía.

Y se llama Perú...

IU su indefinición con respecto al régimen político frustró cualquier intento de democratización interna.

Este tipo de liderazgo político además se va a coaligar con rasgos clientelistas y populistas, donde ni siquiera la izquierda es la excepción. Para Lynch (1999) la izquierda desarrolla durante los setenta y ochenta una forma de representación corporativa de tipo clientelista.⁶⁹ Con respecto al populismo, Lynch (1999) afirma que tanto el APRA como AP tienen en la interpelación carismática de sus líderes el recurso fundamental de comunicación con la población. Para Tuesta (1995) el diseño institucional presidencialista que tiene el régimen político permite que la figura del presidente se apoye más en la opinión pública y en su propia ascendencia sobre la masa ciudadana que en el sistema de partidos. Es decir, que la forma como recrean la representación política se da a través de sus liderazgos partidarios y no tanto a través de sus partidos. Aunque en el caso del APRA también se puede ver una sólida estructura partidaria, por lo que ese modelo de representación política no excluye la posibilidad de constituir dicha estructura. Un caso bastante ejemplar de este tipo de interpelación carismática se puede apreciar en los “balconazos” que da García durante los primeros años de su gobierno donde se reproduce un cierto afán de comunicación “directa” y poco institucionalizada con la población. Para Lynch (1999) esto presuponía una democracia plebiscitaria que debilitaba las instituciones representativas, por lo que fue un presagio del recurso de legitimación que utilizaron después los llamados independientes. Para Crabtree (1999), García intentó apelar a una comunidad de intereses

⁶⁹ Más detalles sobre el clientelismo durante los ochenta se pueden encontrar en la sección anterior.

Y se llama Perú...

amplia, especialmente a los sectores medios organizados, como el sector informal, intentando hacer a un lado a los partidos políticos, incluyendo al suyo, para sustituirlos por una fuerte dosis de liderazgo personalista y autoritario, en una relación directa con “el pueblo”.

El personalismo en el ámbito gubernamental provocó el predominio del Ejecutivo con respecto a los otros dos poderes del estado, especialmente del Legislativo. Para Lynch (1999) el “caudillismo” promueve al presidencialismo ya que entiende a la Presidencia de la República como una especie de trofeo mayor de la actividad política. Se produce un hiperpresidencialismo que genera una polarización política ya que prevalece en la lucha política las valoraciones de corto plazo. La subordinación del parlamento se da entonces a través del uso reiterado de la legislación delegada como forma para aprobar leyes, por lo que la mayoría de leyes aprobadas, sobre todo las más importantes fueron creadas por el Ejecutivo (Lynch 1999). En ese sentido, el parlamento tan sólo dictó el 47% de las normas durante el gobierno de Belaúnde y el 37% durante el gobierno de García (Tuesta, 1995).

El presidencialismo se vio acentuado por la incapacidad del Congreso de ejercer un efectivo control sobre los gobiernos de los ochenta. Esto se debió en gran medida a que los gobiernos lograron consolidar en los procesos electorales mayorías parlamentarias, las mismas que fueron creadas artificialmente, según Tuesta (1995), gracias al diseño institucional del régimen político que subrepresentaba y sobrerrepresentaba algunas circunscripciones en beneficio de algunos partidos políticos como el APRA. En 1980 AP consiguió 26 senadores y 98 diputados, y gracias a la alianza con el PPC pudo

Y se llama Perú...

controlar ambas cámaras.⁷⁰ De igual manera, el APRA obtuvo en las elecciones de 1985, 30 senadores y 104 diputados. Degregori y Grompone (1991) plantean que al funcionar estos gobiernos con mayorías parlamentarias, los acuerdos políticos se hicieron innecesarios.

Este predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo también garantizó cierta impunidad para el gobierno y algunas de sus instituciones afines, como las Fuerzas Armadas, especialmente en el contexto de la guerra interna de los ochenta. La incursión violenta de Sendero en la política nacional a inicios de los ochenta demostró además que el Estado tenía severas deficiencias para cubrir todo el territorio nacional. Esta situación se agravó por la incursión de las Fuerzas Armadas en la lucha contrasubversiva, por la autonomía con la que goza dicha institución y por las varias declaraciones de estados de emergencia en todo el país. Tanto Sendero como las Fuerzas Armadas lograron crear zonas liberadas del control gubernamental. Unos por la impotencia del gobierno y los otros gracias a su permisividad.

Entonces, el personalismo cada vez más se fue perfilando como autoritario, ya no sólo por la propia organización jerárquica y vertical de los principales actores políticos de los ochenta, que fueron los partidos, sino también por la forma como se afrontó la lucha antsubversiva. Los gobiernos de los ochenta demostraron su incapacidad para establecer pautas concretas y eficaces para afrontar a Sendero por lo que optaron por dar mayores prerrogativas a los militares (Rospigliosi, 2000). Sin embargo, tanto militares como políticos no supieron evaluar la situación correctamente. Esto produjo

⁷⁰ El PPC obtuvo 6 senadores y 10 diputados.

que el mayor número de víctimas, muertes y desapariciones forzadas ocurrieran durante los gobiernos de Belaúnde y García. En ese sentido, la mayor ola de violencia por parte del Estado contra la población civil se produjo con el ingreso de las Fuerzas Armadas al conflicto, ya que se desató una política de represión indiscriminada, que paradójicamente retrasó el proceso de deslegitimación de Sendero ante la población campesina, como ocurrió entre mediados y finales de los ochenta (CVR, 2003).

Para Rospigliosi (2000) la autonomía de las Fuerzas Armadas se evidencia en la forma como interactuó con las demás instituciones del Estado. Afirma que jamás se intentó una supervisión institucional rutinaria de las FFAA desde el Parlamento, ni los partidos intentaron formar a expertos civiles en materia militar. Además, tampoco existió un mayor control en el manejo de las FFAA de su propio presupuesto ni en la designación de sus mandos, que incluía a veces la designación de militares en los puestos ministeriales respectivos. Incluso, plantea que la ratificación de los ascensos a generales y almirantes por el Senado fue un filtro muy tenue, pero que no dejó de incomodar a los militares. Por ello, dentro de la escala de valores de las FFAA, la democracia y la constitución ocupaban un lugar subordinado. Por eso, Lynch (1999) afirma que las FFAA tienen un comportamiento que las asemeja más a un grupo con intereses propios que a una organización subordinada a los intereses públicos que eventualmente pudiera defender al Estado.

Las declaratorias de estados de emergencia y las prerrogativas que se les dio a las Fuerzas Armadas dentro de ese contexto demostraron la debilidad de los civiles ante los militares y las limitaciones que tenía el régimen político

de los ochenta. Asimismo, potenciaron la autonomía de las Fuerzas Armadas que en el contexto de la crisis económica y de deterioro de los sueldos, incluyendo el de los militares, fue un campo de cultivo para la corrupción, especialmente la vinculada con el narcotráfico. Para fines de los ochenta el presupuesto de las FFAA quedó reducido a la mitad, a la vez que los salarios mensuales de los generales disminuyeron en 200 dólares mensuales. Esta precaria situación económica afectó el desenvolvimiento de las FFAA en su lucha antisubversiva, sobre todo en las zonas en donde se producía hoja de coca. En realidad, los estados de emergencia en las zonas productoras de coca sirvieron para ocultar actos de corrupción por parte de algunos elementos de las FFAA relacionados al narcotráfico. En un primer momento, la excusa que se utilizó fue el supuesto uso que se le dio al dinero proveniente del narcotráfico para financiar operaciones militares antisubversivas (Scott Palmer, 1992).⁷¹ Además, esta situación delictiva aún está vigente en algunas de las zonas de emergencia que aún se mantienen en el país.⁷²

Por otro lado, los iniciales intentos del gobierno del APRA por cambiar la política antisubversiva pronto cayeron en el olvido, por lo que se acentuó nuevamente una política represiva que tuvo como punto álgido la matanza de

⁷¹ Scott Palmer (1992:71) plantea que el uso proveniente del narcotráfico como alternativa para la financiación de las operaciones militares antisubversivas resulta ser una posibilidad válida a tomar en cuenta. En cierta medida se lamenta la oposición que se generó ante esta posibilidad tanto por parte de la policía peruana como del gobierno de Estados Unidos: "However, because the government's economic crisis had forced General Arciniega to rely, to a significant extent, on local resources (i.e., drug money) to finance his military operations, he was the target of significant opposition by Peruvian police and the USA government"

⁷² En una entrevista personal con Clare Wright con motivo de su investigación doctoral sobre la situación de los estados de emergencia en el Perú, Ricardo Soberón señaló que muchos de los estados de emergencia todavía vigentes en el Perú se debían a la relación existente entre esas zonas y el narcotráfico. La entrevista se realizó el 20 de febrero del 2009 en Lima.

Y se llama Perú...

los penales ocurrida en 1986.⁷³ Se optó por una estrategia de cooptación a los militares de más alto rango: “Dicho modelo requiere la concesión de privilegios especiales (promociones, cargos políticos y favores económicos) a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas a cambio de su apoyo al régimen.” (Obando, 1999: 355). Con estas medidas se acentuaron los matices clientelares en las relaciones dentro del Estado.

Se puede apreciar entonces que desde los ochenta existe una guerra de baja intensidad desatada por las fuerzas del orden y el gobierno como respuesta a las acciones violentas de Sendero y el MRTA. Rospigliosi (2000) afirma que los escuadrones de la muerte ya existían en los ochenta, por lo que no fueron una creación exclusiva del gobierno de Fujimori.⁷⁴ Más bien, lo que va a suceder es el cambio de la visión que tienen los militares al luchar contra los subversivos, de las matanzas al asesinato selectivo. Para ello el uso de los servicios de inteligencia va ir cobrando importancia aunque con severas limitaciones y sesgos que van a condicionar su desarrollo. Uno de estos sesgos es el uso de la inteligencia militar o policial para espiar a los opositores políticos. Obando (1999: 360) afirma que García utilizó al SIN para mantener una vigilancia sobre los militares: “Dada la creciente magnitud de la corrupción dentro del Ejército, esto permitía conocer los malos manejos de los mandos, no para erradicarlos sino, al contrario, para chantajearlos, como un modo de mantener el control y de prevenir actos de deslealtad.”

⁷³ Para Uceda (2004) existen pruebas de que esto se realizó con el consentimiento del gobierno aprista.

⁷⁴ La militarización progresiva de la política en los ochenta no sólo afectó a la izquierda, sino también al APRA que optó por la formación de un grupo paramilitar para reforzar las acciones armadas de las FFAA (Uceda, 2004) e intimidar a los opositores políticos (Obando, 1999). Varios de sus militantes fueron enviados a Corea del Norte donde recibieron entrenamiento militar. Evidentemente, esto es negado por el APRA

Esto va de la mano con la percepción de los militares de la necesidad de un gobierno cívico-militar que sea más autoritario y que delegue mayores funciones a los militares en materia antisubversiva. Todo ello sale a luz cuando se debela años después la conspiración de un grupo de militares que llega a redactar un extenso plan en donde exponen al detalle estos planteamientos. Dicho plan sería conocido como el Plan Verde o el Libro Verde y detallaba un posible gobierno de al menos veinte años de duración:

“Destacaba la necesidad de una reestructuración radical, incluyendo la venta de las industrias claves que habían sido nacionalizadas veinte años atrás y una reducción drástica en la magnitud de la intervención estatal. Al mismo tiempo, destacaba la importancia de realizar una fuerte campaña para acabar con la subversión, y con este fin defendía un modelo de control político firme. En otras palabras, era liberal en el sentido económico y autoritario en el político.”
(Obando, 1999: 362).

III. El régimen político fujimorista.-

1. La competencia política con Fujimori.-

El primer elemento que se tiene que resaltar tiene relación con el rol que juegan los movimientos sociales y las organizaciones sindicales a fines de los ochenta. Tal como se ha mencionado anteriormente, distintas razones influyeron para que los partidos políticos reemplazaran como espacios privilegiados de confrontación política a las organizaciones sindicales. En parte, el mismo diseño institucional dejaba de lado a las organizaciones sociales en la medida en que los procesos electorales se convertían en el principal eje de la dinámica política. Los resultados electorales se convirtieron en la mejor manera para medir el poder político que tenía cada partido, no como antes que se medía de acuerdo a la cantidad de sindicatos que cada partido controlaba.⁷⁵ Incluso, el diseño del sistema electoral tampoco favorecía tanto a la relación partido-elector, en cambio el voto preferencial permitía afianzar la relación candidato-elector, dejando de lado, en cierta medida, a los partidos políticos. Se podría decir que había una cierta inclinación personalista en la forma como estaba diseñado el sistema electoral.

Cuando se desencadena la crisis política en 1987 con el enfrentamiento entre el gobierno y los grandes empresarios y financistas, en medio de una inflación galopante, los sindicatos ya habían decidido incrementar por su parte la confrontación con el gobierno, buscando recuperar la iniciativa política y los

⁷⁵ Cuando Letts (1981) analiza el poder político de las organizaciones de izquierda en los setenta, al no haber elecciones, lo hace tomando en cuenta la cantidad e importancia que tienen los sindicatos que cada agrupación controlaba.

beneficios laborales perdidos. Esto provoca el incremento notable de la protesta social en todo el país. En 1988 el número de huelgas y la cantidad de horas-hombre perdidas convierten a ese año en el pico más alto de la protesta social en toda la década.⁷⁶ Aún así, el gobierno demuestra que tenía una enorme capacidad de respuesta política y llevó el desafío de las organizaciones sindicales al extremo, por lo que mantuvo una posición intransigente y represiva. Su estrategia consistía en desgastar a las protestas sociales en un primer momento, para después de su repliegue conceder algunos de los beneficios por los que se había luchado (Reyna, 2000). Era una manera bastante inteligente de demostrar a la población la inutilidad de esa vía de lucha política. Frente a ello, las dirigencias sindicales no pudieron renovar su repertorio de acciones de protesta por lo que cayeron en el descrédito. Aunque hay que reconocer que estas organizaciones sociales no tenían la fortaleza que habían alcanzado durante los setenta. El repliegue de estos actores políticos se fue dando desde el año siguiente: en 1989 se registraron 667 huelgas, en 1990 fueron 613, en 1991 fueron 315, en 1992 fueron 219, en 1993 fueron 151 y en 1994 fueron 168 (Lynch, 1999). 1988 fue en realidad el último canto del cisne de las organizaciones sociales que a lo largo de toda la década habían luchado infructuosamente para recuperar el protagonismo político perdido. En ese sentido, cuando Fujimori llega al poder no encuentra a organizaciones sindicales capaces de hacerle frente.

El sistema electoral sufre alteraciones importantes a partir del autogolpe de estado de 1992. En ese año, tras la clausura del poder legislativo, Fujimori

⁷⁶ En ese año hubo 814 huelgas y se considera que se perdieron 38' 275 000 horas-hombre.

Y se llama Perú...

se ve obligado por la presión internacional a convocar a una Constituyente para que redacte una nueva constitución y a la vez legisle como si fuera un parlamento. Para esas elecciones de fines de 1992, se plantea que el Congreso Constituyente Democrático (CCD) conste de una sola cámara con 80 representantes. La unicameralidad del Legislativo peruano sería uno de los cambios más importantes. Además, se acordó que su número sería de tan sólo 120 representantes. En comparación con el congreso de los ochenta se trataba de un congreso bastante reducido numéricamente, cuyos representantes serían elegidos, a partir de las elecciones de 1995, por un distrito electoral único. El problema de sobrerrepresentación y subrepresentación que señaló Tuesta para los ochenta, se reemplazó por una banalización de la representación en donde no quedaba claro a quién representaba cada congresista electo.

Asimismo, los gobiernos regionales instituidos al final del gobierno aprista fueron desactivados. En realidad, lo que se pretendía era un mayor y más efectivo control sobre el Legislativo, que implicaba una mayor centralización del poder político. Planas (2000) afirma que el distrito electoral único tenía la finalidad de beneficiar a las listas electorales de dimensión nacional, como lo fueron las distintas organizaciones políticas de Fujimori, en desmedro de los partidos políticos ya que les facilitaba el no tener que organizar una estructura partidaria a nivel nacional. Esta debilidad estructural se aprecia en la enorme dificultad que tiene Fujimori para presentar listas municipales para las elecciones de 1993, que va a ser una característica suya en todas las elecciones municipales de la década del noventa.

Otro de los cambios fue anular la posibilidad de postular a la presidencia y al congreso a la vez, siendo esto paradójico puesto que fue la herramienta que le permitió a Fujimori llegar a la presidencia. Era una manera de evitar que otro Fujimori pudiera disputarle el poder, como intentó hacer el entonces alcalde de Lima Ricardo Belmont en esa primera etapa. Esta medida junto con el incremento de los requisitos para inscribir a una agrupación política buscaban reducir las posibilidades de la competencia política que habían caracterizado a la década anterior, sobre todo en una coyuntura que le iba siendo adversa a los principales opositores políticos de Fujimori. Eso provoca que a causa de los magros resultados electorales conseguidos en las elecciones de 1995, el AP y el PPC perdieran su inscripción como partidos. Al APRA sólo lo salvo la votación parlamentaria que obtuvo, mínimamente superior a lo estipulado en la ley electoral.

Por otro lado, la sumatoria de los porcentajes de ausentismo, votos en blanco y votos viciados se incrementó notablemente en comparación con la década anterior, que tuvo un promedio por cada proceso electoral del 41.7%. El promedio porcentual de las elecciones del CCD en 1992, de las municipales de 1993 y de las elecciones presidenciales de 1995, fue del 52.1%. Para las elecciones del CCD hubo un 52.7% que no endosó su voto a ningún candidato, siendo interesante el incremento del ausentismo en relación con las elecciones de 1990, del 22% se pasó al 29%, en un contexto en donde Sendero Luminoso se encontraba en franco repliegue. El ausentismo para las elecciones municipales de 1993 se incrementó nuevamente y alcanzó el 34.4%, dando como total del 59.6%. Para las elecciones de 1995 el porcentaje total baja al

44%. Estos porcentajes muestran una importante continuidad con respecto a la década del ochenta que va más allá de la crisis política de finales de 1980. Tienen mayor relación con esta debilidad crónica con que nace el régimen político a inicios de los ochenta, casi asfixiado por la violencia política de los grupos subversivos como por la violencia económica de los agentes financieros internacionales. Esta debilidad del régimen político también tiene relación con la debilidad de sus principales actores políticos. Por un lado está la indefinición de la izquierda con respecto al régimen, mientras que por el otro está la crítica férrea que difundió el gobierno militar contra los partidos “tradicionales”. En ese sentido, el auge de los independientes que se desarrolla con las elecciones de noviembre de 1992 no llega a cubrir el vacío de un importante sector de la población que sigue manteniéndose al margen del régimen político, al menos en relación a los procesos electorales.

Durante el primer gobierno de Fujimori la competitividad política se ve restringida por iniciativa del propio gobierno, aunque con el total apoyo de las FFAA. El contexto de la guerra interna le permite a Fujimori utilizar al Servicio de Inteligencia Nacional como una especie de policía política (Rospigliosi, 2000; Uceda, 2004). Aunque esto tampoco es una novedad puesto que García le había dado un uso similar. Con Montesinos en la dirección del SIN, esta institución había tomado mayores atribuciones y contratado más personal, por lo que su capacidad operativa cada vez fue mucho mayor. Además, la nueva legislación antsubversiva le colocaba en una posición superior con respecto a los servicios de inteligencia de cada una de las armas de las FFAA. En cierta medida, el SIN se convirtió en la estructura partidaria del gobierno.

La poca disposición que tenía el gobierno hacia el diálogo y el poco respeto que sentía hacia las leyes se demostraron en las elecciones de noviembre de 1992 donde se tenía que elegir al CCD. Fujimori advirtió explícitamente, con marcado acento autoritario, que no iba a permitir cualquier tipo de resultado electoral que significara una vuelta al pasado (Tuesta, 1995). Era una invitación bastante clara para que los partidos no se presentaran a competir en esas elecciones, tal como sucedió en la mayoría de casos, salvo la excepción del PPC.⁷⁷ Por eso, Tuesta (1995) afirma: “En un contexto que incluía a partidos políticos desprestigiados y fuera de juego, la competencia electoral disminuyó, la incertidumbre electoral desapareció y los resultados pudieron, incluso, no ser respetados”. En esa elección del 22 de noviembre se iba escoger a 80 representantes mediante el distrito electoral único bajo el sistema proporcional y con la posibilidad de utilizar el voto preferencial doble.

Igualmente, la permisibilidad del Jurado Nacional de Elecciones no le puso ninguna traba a la inscripción de la alianza Cambio 90/Nueva Mayoría para las elecciones de 1992, cuando el sistema electoral claramente estipulaba que las alianzas se realizaban entre agrupaciones previamente inscritas en el registro electoral, que no era el caso de Nueva Mayoría. Además, tampoco reguló la extraña composición de esa lista parlamentaria en donde el único grupo con derecho a presentar candidatos, Cambio 90, no tenía ni el 5% de los postulantes (Planas, 2000).

Del desconocimiento del APRA, AP y parte de la izquierda de las elecciones de noviembre de 1992 se pasó a la sospecha de fraude en las

⁷⁷ El APRA, AP, el Movimiento Libertad, el PUM y la IU decidieron no participar en esos comicios electorales.

Y se llama Perú...

elecciones del referéndum de 1993 que sirvió para aprobar la Constitución de Fujimori. Los resultados del referéndum no fueron muy satisfactorios para Fujimori puesto que demostraron un estrecho margen entre los votos del SI y del NO.

Para las siguientes elecciones, las generales de 1995, en donde todos los principales partidos políticos habían decidido nuevamente participar, un escándalo pareció confirmar las sospechas que ya se venían dando sobre la limpieza de los procesos electorales de ese periodo. La noticia estalló el 5 de abril de 1995 con el allanamiento de una vivienda en la ciudad de Huánuco en donde se encontró a varias personas rellorando cédulas de votación a favor de distintos candidatos oriundos de ese departamento. Este hecho no sólo afectó a políticos vinculados al gobierno sino también a candidatos de otras tiendas políticas. La denuncia que en un primer momento se manejó en reserva, preservándose la identidad del denunciante, fue hecha ante el Jurado Nacional de Elecciones de esa ciudad por el ex diputado aprista Héctor Huerto Milla.⁷⁸ Al parecer, las cédulas de votación fraguadas, que habían sido obtenidas de manera ilegal del propio Jurando Nacional de Elecciones en Lima, iban a ser intercambiadas por las verdaderas con ayuda de miembros del ejército. Hay que recordar que el departamento de Huánuco se encontraba en esos momentos bajo un estado de emergencia. Después de este descubrimiento, surgieron nuevos rumores sobre otros casos de fraude en el resto del país.

La coyuntura política del referéndum demostró la incapacidad de la oposición de concertar una acción conjunta. Tal como Lynch (1999) lo ha

⁷⁸ Entrevista personal con Huerto Milla.

mencionado para los ochenta, esta poca capacidad de concertación era una muestra del predominio de una forma confrontacional de ejercer la política. En ese sentido, Fujimori mantuvo esta tendencia con la única diferencia de que tuvo mayor éxito en sus resultados. Desde el inicio de su gobierno manejó un discurso anti-partidos, heredero del discurso del no partido del gobierno militar, crítico con las formas tradicionales de hacer política. Dicho discurso cobra bastante importancia para moldear los nuevos intereses electorales de representación de la población.

Al no haber militado políticamente en ninguno de los partidos más importantes durante los ochenta, algunos investigadores le colocaron la etiqueta de *outsider* a Fujimori (Lynch, 1999; Tanaka, 1998). Lynch (1999) señala que el *outsider* es un individuo que viene de fuera del sistema de partidos y de la sociedad política, con un prestigio ganado en otras actividades y que desarrolla un discurso condenatorio de la política y de los políticos.⁷⁹ Sin embargo, en esta conceptualización se confunde lo que podría ser la caracterización de un tipo de actor político con la mención de una forma estratégica de hacer política. No se puede emplazar al discurso anti-partidos, que también fue utilizado por el gobierno militar durante su llamada primera fase (1968-1975), como un recurso privativo de un solo tipo de actor político. Responde, más bien, a un posicionamiento coyuntural de un actor político determinado, para enfrentar eficazmente cierto tipo de oposición que puedan representar agrupaciones políticas más consolidadas. Además, habría que

⁷⁹ También afirma que su relación con la población no la entiende como un acto deliberativo sino como un acto de relaciones públicas, pero esto más tiene que ver con una estrategia política coyuntural que no es ajena a los mismos actores partidarios.

Y se llama Perú...

poner en duda el tipo de actor político que representaría un *outsider*, especialmente para el caso peruano.

El *outsider* más renombrado vendría a ser Alberto Fujimori. No obstante, en toda la década de los ochenta se pueden encontrar a “independientes” que con relativo éxito han participado en la política partidaria. Estos son los casos de Alfonso Barrantes y Mario Vargas Llosa. Incluso a Barrantes se le ha mentado como el primer “independiente”. Para Planas (2000) las agrupaciones políticas en los ochenta comenzaron a convocar crecientemente a figuras independientes para que se unieran a sus filas, por lo que su aparición en el escenario político nacional en realidad poco tenía de novedosa. Tanto Belmont como Vargas Llosa habían sido voceados al interior de AP a mediados de los ochenta como posibles candidatos a la alcaldía de Lima y a la presidencia, respectivamente. La diferencia ostensible con Fujimori estaría en que estos se dejaron “cooptar” por agrupaciones pertenecientes al denominado sistema de partidos, mientras que él no, era un independiente a toda prueba. Pero si se analiza la trayectoria personal de Alberto Fujimori, se puede observar que de independiente e inexperto tenía poco.

Diversos autores reconocen que las universidades peruanas, especialmente las públicas, se habían politizado extremadamente desde los años setenta (Lynch, 1990; 1999; CVR, 2003; Jochamowitz, 1993). Tal como había sucedido con algunos sindicatos, las organizaciones estudiantiles de izquierda, especialmente las de vertiente marxista, fueron desplazando al APRA del control de distintas universidades. Una de ellas fue la universidad de San Marcos, que es la universidad estatal más importante del país, de donde los

Y se llama Perú...

estudiantes radicalizados lograron sacar del rectorado, a finales de los años sesenta, a uno de los dirigentes apristas más connotados: Luis Alberto Sánchez. Esta politización de la vida universitaria se va a desarrollar alrededor de los principales órganos de gobierno estudiantil y se va a extender a lo largo de los ochenta.⁸⁰

Cuando Fujimori concluyó su carrera de agronomía en la Universidad Nacional Agraria de la Molina decidió continuar ligado a esa institución pero en el campo de la enseñanza matemática. Por lo que fue profesor de esa universidad desde los años setenta. Poco a poco, según uno de sus primeros biógrafos, se irá gestando en Fujimori el deseo de asumir cargos de mayor importancia en la administración de la universidad. Para ello estará obligado a participar de la política interna de la misma, por lo irá acumulando progresivamente experiencia política, puesto que se verá obligado a trazar tanto con estudiantes radicalizados como con facciones de profesores también interesados en la cuota de poder que una universidad puede otorgar. Para los setenta en la Universidad Agraria actuaban distintas fuerzas políticas: el APRA, Patria Roja, Pucallacta (que luego se uniría a Sendero) y un pequeño grupo de izquierda de orientación albanesa, que reunía en ese entonces a los líderes más populares del tercio estudiantil (Jochamowitz 1993). Entonces, se puede afirmar que los primeros pasos políticos de Fujimori se dan en una de las mejores escuelas de aprendizaje político que tiene la sociedad peruana:

“Es curioso que generalmente se considere a Alberto Fujimori como un hombre sin pasado político (...) Las universidades del país son como pequeños países

⁸⁰ Para más detalles sobre el proceso de radicalización en la Universidad de San Marcos se pueden consultar Lynch (1990) y Sánchez (1987).

que funcionan de lunes a viernes, y de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tienen presidentes, parlamentos y turbas. Regularmente hay elecciones y no faltan los golpes de estado, las guerras civiles y las ocupaciones territoriales (...) Cuando Fujimori comenzó la campaña electoral de 1990, era ya un político maduro formado en la adversidad.” (Jochamowitz 1993: 194-195).

Resulta curioso, por decir lo menos, que los dos personajes más autoritarios de las décadas del ochenta y del noventa, Abimael Guzmán y Alberto Fujimori, respectivamente, hayan surgido desde de los ambientes universitarios (Panfichi, 1993). Según Jochamowitz (1993), Fujimori se empieza a interesar en la política universitaria después de su regreso de cursar un posgrado en Estados Unidos en 1972, cuando solicitó enseñar los primeros cursos de matemáticas, y dejar de lado los cursos avanzados que antes dictaba. Para este autor, esas clases se vuelven muy populares porque Fujimori no reprobaba a casi nadie, lo que le permite ganar fuerza en las “bases”. Su primer cargo como autoridad universitaria lo obtuvo en 1974 cuando fue nombrado Director del Programa Académico de Ciencias, aunque era un puesto más que todo simbólico. Para 1977 Fujimori tuvo una de sus pocas derrotas políticas al postular al cargo de Vice-rector, gracias a la traición de sus circunstanciales aliados.

Para los inicios de los ochenta, la correlación de fuerzas políticas entre los estudiantes varía en la Universidad Agraria. Los “albaneses” derrotan en las elecciones estudiantiles a Patria Roja y se ponen al mando del movimiento estudiantil de esa universidad. Fujimori no tardó mucho tiempo en establecer lazos con la nueva dirigencia estudiantil. Para Jochamowitz (1993), Fujimori empleó con los estudiantes la misma táctica que había utilizado con los

Y se llama Perú...

profesores de ciencias en la elección universitaria de 1977, convirtiéndolos en el “fiel de la balanza”, en la fuerza que podría definir una elección. Señala también que algo similar hizo con los evangélicos en las elecciones presidenciales de 1990. Su nuevo objetivo político eran las elecciones universitarias de 1984, donde pensaba postular nuevamente al cargo de Vicerector. Para ello, y como una forma de ir acumulando fuerzas, postula al decanato de la facultad de Ciencias en donde queda empatado en cuatro elecciones seguidas, logrando ganar a la quinta vez al llegar a un acuerdo verbal con su contrincante. Al parecer, con una estrategia política bien calculada que le permitió engrandecer sus aspiraciones originales para terminar postulando al rectorado mismo, Fujimori vence en las elecciones de 1984 con la ayuda del sector estudiantil. Curiosamente, su forma de posicionarse en el máximo poder de la universidad es muy parecida a la que efectuó en 1990, ambas se basan en el pragmatismo: “Con una sencilla alianza entre estudiantes, empleados y un puñado de profesores, **erradicó por completo la influencia de su propio tercio**. Así quedó dueño absoluto de la situación por mayoría de votos.” (Jochamowitz, 1993: 239).⁸¹ Posteriormente, a finales de los ochenta llegó a ser Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, que demuestra el éxito que alcanzó, incluso, en la política interuniversitaria.

Sus contactos políticos, siendo Rector de la Agraria, no se limitaron a los estudiantes ni a los sectores organizados de los profesores o los trabajadores.

⁸¹ En 1990 haría algo similar al atacar las posturas políticas de los partidos. El resaltado y subrayado es mío. Otro aspecto interesante que se da con su llegada al rectorado de la universidad Agraria es el aparente cambio en su carácter, inmediatamente se convierte en el maestro de ceremonias de todas las fiestas de la universidad donde demuestra una buena capacidad para relacionarse con los trabajadores no docentes de la universidad.

Y se llama Perú...

Gracias a la intermediación de un profesor universitario con militancia aprista, Absalón Vásquez, logra entrar en contacto con altos dirigentes del APRA. Aprovecha para esto las ceremonias de graduación del fin de año, en donde invita al dirigente histórico del APRA Armando Villanueva, quien es la llave maestra para mejorar sus relaciones con el gobierno, logrando después que el entonces presidente García acepte una de sus invitaciones. En retribución de sus atenciones fue recibiendo a cambio algunos encargos del gobierno: asesor de planes agrarios, Presidente del hipotético cinturón ecológico de Lima, miembro de una comisión negociadora de una huelga en la región San Martín. Luego, el propio García lo convocaría para que dirigiese un programa televisivo para el canal del estado, que si bien nunca superó el 3% de audiencia (Lynch, 1999), “fuera de Lima era diferente. En muchos lugares del país, el canal 7 era la única señal que entraba. Semana tras semana, el conductor fue llegando a su público cautivo y en el restante fue dejando un primer rastro en la memoria, como una casa vagamente conocida” (Jochamowitz, 1993: 261). El programa duró en total 3 años en el aire. Asimismo, según declaraciones del propio Fujimori, el APRA le ofreció el Ministerio de Agricultura a finales de su gobierno, pero no aceptó porque “si hubiera aceptado el ministerio, no habría tenido la menor oportunidad (de ser presidente)” (Jochamowitz 1993: 261). Sin embargo, para las elecciones generales de 1990, Tuesta (1995) señala que Fujimori fue donde el APRA y la Izquierda Socialista para solicitar una candidatura en sus listas al Congreso, pero sin mayor suerte.⁸² En vista de todo esto, queda claro que ni Fujimori era un político inexperto ni estaba desvinculado de los principales actores políticos de la época. Más bien,

⁸² Jochamowitz (1993) confirma que Fujimori recurrió al IS más no al APRA.

Fujimori es un ejemplo bastante bueno de cómo el régimen político de los ochenta va atrayendo a su dinámica política a distintos actores, como sucedió con gran parte de la izquierda, en su afán por irse renovando.

En realidad, lo que sucede con los denominados *outsiders* o independientes es que representan la forma como los actores políticos, sean viejos o nuevos, se van adaptando a las transformaciones que se han producido en la dinámica política, las mismas que no necesariamente son duraderas, y más bien, en algunos casos, sólo responden a las alteraciones propias de una situación de crisis política. En el caso de aquellas personalidades exitosas, aparentemente sin un vínculo claro con los partidos que predominaron en los ochenta, lo único que los diferencia de otras personalidades como Barrantes o el propio Vargas Llosa, es la visibilidad que tiene en determinada coyuntura su posición política anti-partidos o “apolítica”. Sin embargo, esto es tan sólo una postura política, tal como lo fue la decisión de Vargas Llosa de aliarse con AP y el PPC. Ni unos ni otros son más independientes con respecto al sistema de partidos, sobre todo porque muchos de los políticos que levantaron la bandera de la “independencia” provenían de las canteras de los denominados partidos “tradicionales” (Planas, 2000). El trasvase de dirigentes y militantes de las organizaciones partidarias hacia los nuevos movimientos electorales, afecta indudablemente y ahonda la precaria situación política en que Fujimori los había puesto tras el autogolpe. El propio Fujimori tuvo la intención de participar en el proceso electoral de 1990 en la lista de dos partidos políticos, lo que no se produjo por la propia negativa de dichas agrupaciones. Otro caso es el de Ricardo Belmont quien a pesar de ser

Y se llama Perú...

considerado como el primer *outsider* endosó su voto al de Vargas Llosa en contra del “independiente” Fujimori, durante la segunda vuelta electoral, con una intención clara de posicionarse al lado de los partidos políticos que conformaban el FREDEMO.⁸³ En ese sentido, el término *outsider* carece de toda utilidad práctica puesto que hace mención a un posicionamiento político coyuntural y no a una característica inherente de un grupo particular de actores políticos. En todo caso, lo que se podría señalar a fines de los ochenta e inicios de los noventa es la incapacidad de los partidos políticos de incorporar en sus filas a las nuevas figuras que van surgiendo, tal como estuvieron haciendo a mediados de los ochenta, y de evitar la fuga de sus propios militantes y dirigentes.

La victoria electoral de Fujimori en 1990 se debe más a las consecuencias de la propia dinámica electoral, evidentemente anómala en comparación con los procesos electorales previos, debido principalmente a un grave proceso de crisis política que se venía desarrollando desde 1987. Por ello, dentro de esa campaña electoral terminaron primando cuestiones identitarias de tipo étnico al momento de elegir por qué candidato votar. Para Grompone (1991) el discurso político de Vargas Llosa, que uniformiza a todos como posibles beneficiarios de una economía de libre mercado, deja de lado temas como la diversidad social y étnica, lo que contribuye a crear una imagen del FREDEMO como un enclave de las clases dominantes. Esta imagen del FREDEMO como el partido de los ricos, que tiene sustento en varios elementos

⁸³ Dentro de Acción Popular, para las elecciones de 1985, se habían barajado los nombres de Vargas Llosa y Pérez de Cuellar como dos posibles candidatos de ese partido. Pérez de Cuellar fue el principal opositor político de Fujimori en las elecciones de 1995 (Tanaka 1998). Además, el mismo nombre de Belmont había sido barajado por AP para las elecciones municipales de 1983 (Planas 2000).

Y se llama Perú...

que confluyen en la coyuntura de la campaña electoral (como fue la desmedida propaganda televisiva de sus candidatos), en un país donde la riqueza se asocia a determinados rasgos físicos, termina generando un distanciamiento entre este candidato con gran parte de la población. Aunque este distanciamiento no constituye una respuesta elaborada por parte de ese sector de la población:

“los clivajes étnicos cuando toman expresión política no manifiestan necesaria y únicamente que haya aflorado un discurso elaborado sobre identidades sociales y culturales. En cambio, la apelación a referentes primarios constituye probablemente la única respuesta disponible cuando existen situaciones de asilamiento y de desestructuración de otras estructuras mediadoras”
(Grompone 1991: 41)

Desde el inicio de la década del ochenta se puede observar que los nuevos sectores sociales que fueron incorporados a la ciudadanía plena deciden apostar por nuevos actores políticos, y no tanto por planteamientos ideológicos. Estos sectores están buscando consolidar y mejorar su posición social por intermedio de una adecuada representación política que vele por sus intereses. Por eso, se produce una importante politización del país que pauta en términos de clase a la lucha política cuando la izquierda surge como esa representación, aunque en el fondo este discurso político resultó ser sólo la parafernalia lingüística que acompaña a toda acción política de los setenta y ochenta: “la izquierda confundió las protestas de los movimientos populares — referidas principalmente a demandas de tipo salarial, sindical y de cambio de la política económica del gobierno—, tomándolas como aspiraciones revolucionarias que trastocarían el orden social vigente.” (CVR, 2003-I: 166).

Incluso en el ámbito de las propias organizaciones políticas de izquierda la división a causa de diferencias étnicas o fisionómicas estaba presente, ya que las distancias en realidad no eran tan ideológicas como se hacían ver. Se podría decir que la dirigencia de cada partido marxista de los setenta representaba por asociación a un determinado grupo y clase social. Gonzáles (1999) lo demuestra en las entrevistas que realiza donde, por ejemplo, sus entrevistados señalan que la dirigencia de Vanguardia Revolucionaria estaba compuesta por jóvenes que habían salido de los colegios más caros y exclusivos de Lima, lo que se correspondía con una fisionomía específica: eran además blancos y rubios. Por eso, Lynch (1999) plantea como un problema la creciente falta de semejanza étnico social entre representantes y representados, que al parecer no varía mucho tras el gobierno militar, sobre todo si se analiza la procedencia social de muchos de los líderes de la izquierda. Podrían haber cambiado los postulados ideológicos, pero la política peruana de los ochenta seguía dominada por determinados sectores sociales acomodados en desmedro de la gran mayoría de la población. Entonces, para fines de los ochenta lo que se observa es a ese electorado masivo, en constante crecimiento y recientemente ciudadanizado, que sigue buscando una representación política con la cual sentirse identificado, que le permita una relación más cercana con el poder. Fujimori y su grupo de allegados encarna a su modo la inclusión de varios sectores de la población que no habían tenido antes una participación política tan pronunciada: pequeños empresarios, profesionales, evangélicos y profesores universitarios.

El relativo fracaso de los principales partidos políticos de esa década y los errores que cometieron en la coyuntura de las elecciones de 1990 hizo que el voto fuera para el candidato menos conocido pero que supo identificarse mejor con la población. Esto se hizo más evidente en la segunda vuelta electoral cuando los ataques personales contra Fujimori se incrementaron por parte de algunos miembros del FREDEMO. Se le acusó de ser un peruano de segunda generación con lo que quedó en claro su condición de migrante, como la gran mayoría de la población limeña. Señalaron que su madre no hablaba el castellano cuando existe en el Perú un importante sector de la ciudadanía que no tiene al castellano como lengua materna.⁸⁴ Además, Fujimori se presentó así mismo como alguien muy vinculado al agro, por lo que solía aparecer en sus presentaciones públicas conduciendo un pequeño tractor, aunque esto poco tenía de cierto puesto que se había dedicado a la enseñanza de matemáticas en la universidad, por lo que no tenía ninguna experiencia en el campo de la agricultura (Jochamowitz 1993). Entonces, lo que se demuestra con el contundente resultado electoral de la segunda vuelta: “fue que niseis y tusanes (...) se encuentran más cerca del imaginario popular, diría que tanto andino como costeño, que los criollos en su versión pituca.” (Degregori, 1991: 116).⁸⁵ Como lo diría el propio Fujimori, el chinito y los cholitos derrotaron a los pitucos en las elecciones.

⁸⁴ Degregori (1991:111) dice al respecto: “Por eso, quién quiso descalificar a Fujimori porque su madre no hablaba castellano, no advirtió que la mayoría de madres de los peruanos adultos no hablan castellano o lo hablan bastante mal, pues esta lengua recién se difunde masivamente en el país en los últimos 40 años”

⁸⁵ El mismo autor define a los pitucos como a los criollos que además de ser adinerados combinan en su conducta lo transnacional y lo aristocrático.

2. El patrimonialismo en el primer gobierno de Fujimori.-

Como en el caso de la década anterior, se pueden evidenciar prácticas patrimonialistas por parte del primer gobierno de Fujimori que le permiten establecer ciertos beneficios personales y políticos para él y su cohorte de allegados. Incluso se podría plantear la intensificación de dichas prácticas patrimonialistas, las que afectan al sistema electoral, tal como se mencionó en la sección anterior, ya que los cambios que se introducen en el mismo tienen como objetivo entorpecer el funcionamiento de los principales partidos políticos, a la vez que favorecen el surgimiento de organizaciones meramente electorales, sin ningún tipo de estructura orgánica ni desarrollo programático. Para Iguíñez (1999) uno de los objetivos de Fujimori para lograr la estabilidad de su gobierno fue el concentrar el poder de la toma de decisiones y la asignación de recursos en la oficina del Presidente, con la intención de asegurar, también, su continuidad en el cargo.

Al igual que en la década del ochenta se emplearon los fondos del Estado para crear una clientela política que estuviera al servicio de los intereses de Fujimori. Para ello se dotó al ministerio de la presidencia del 25% del presupuesto de la República y se crearon instituciones como el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), dependientes de ese ministerio, para que se encargaran de orientar el gasto social a determinados bolsones electorales. Sobre todo tras el insatisfactorio resultado del referéndum, Fujimori apuntó su gasto social a aquellas regiones del país donde su apoyo había sido insuficiente, concentrándose en aspectos como la

Y se llama Perú...

infraestructura, la electricidad, el saneamiento y las ayudas alimenticias.⁸⁶

Thomas (1999) afirma que existe una directa correlación entre las localidades beneficiadas por FONCODES con los programas de obras públicas y el voto de Fujimori en la elecciones de 1995.

Esta política patrimonialista le permitió al gobierno llegar fortalecido para las elecciones de 1995, en cuyo proceso electoral hasta el propio ejército se vio involucrado, al repartir calendarios, hechos con dinero del Estado, en donde figuraba un *close up* del rostro de Fujimori. Planas (2000: 107) afirma: “Aunque disimula su intención de restringir el pluralismo político con listas o membretes electorales de signo oficialista, en rigor, su estructura política es el propio Estado y su militancia se reduce a la labor proselitista de los funcionarios públicos”.

Esto va a generar un clientelismo bastante pronunciado en la forma como la población se va ir relacionando con el poder, lo que acentúa una actitud pragmática con respecto a la política. No obstante, este pragmatismo no implica, tal como lo señala Grompone (2000), una actitud pasiva por parte de la población al supuestamente delegar la resolución de sus problemas al gobernante de turno. En realidad, el apoyo a Fujimori siempre va ir de la mano con la presencia efectiva de algún beneficio personal recibido, ya sea por una obra que se hizo en una localidad o por algo más específico. “Los recursos políticos estatales se aceptan y se usan simplemente porque se necesitan, en una relación de intercambio, antes que de lealtad.” (Tanaka, 1999: 428).

⁸⁶ Grompone (2000) señala que estas ayudas alimentarias llegaron a asistir al 42% de los hogares peruanos.

Asimismo, la personalización de la política se da tanto por la presencia física de Fujimori en diversos lugares del país, evaluando o inaugurando obras, como por la forma en que la imagen de Fujimori se vincula con la idea del Estado, y por el uso extensivo de la televisión como recurso para expandir mediáticamente la imagen del gobernante. Esto quiere decir que la presencia física no siempre era necesaria para establecer esta intermediación directa con la población, en la medida en que las instituciones que más gasto social realizaban dependían directamente de Fujimori, por lo que se fortalecía la relación de que el gobernante era equivalente al Estado, y a la vez, el Estado era Fujimori. Esta fusión, en el imaginario popular, entre Estado y gobierno tiene mucho que ver, tal como lo ha señalado Martín (2002), por la propia parafernalia simbólica con que está dotado el Estado peruano por su diseño presidencialista, que ya era un rasgo inherente al régimen político en los ochenta. Por último, el uso de los medios de comunicación como herramientas de difusión de la actividad política de Fujimori, le permitió rebotar exponencialmente su imagen en todos los lugares del país y recrear así una supuesta cercanía con la población. Era muy común ver en esos años por la televisión a Fujimori ataviado de diferentes maneras, de acuerdo a las costumbres de la población donde era recibido, lo que le permitía acentuar la identificación de las personas con su figura política.

Dada la forma como Fujimori actuó políticamente, las estructuras burocráticas informales, basadas en las relaciones con el propio gobernante, son una necesidad. Para Tuesta (1995: 121): “Si en los periodos anteriores los partidos tuvieron dificultades para influir en las decisiones de gobierno, en este

caso no hubo ninguna posibilidad. Fujimori gobernó con el concurso de un pequeño grupo de hombres de su entera confianza y familiares.” Para ello, una de sus primeras decisiones políticas fue desestructurar al propio movimiento que lo llevó a la presidencia.

De por sí tampoco se trataba de un grupo político con una estructura definida, más bien había sido una lista confeccionada a último momento, con candidatos que en un inicio no esperaron llegar al congreso. Incluso, sólo con el ascenso en las encuestas de Fujimori, muchos de ellos recién comenzaron a hacer una campaña política intensiva. Degregori (2007) afirma que las listas parlamentarias, para senadores y diputados, estuvo plagada de improvisaciones y definiciones de último momento. Al parecer, uno de los pocos criterios que se utilizaron para elegir a los candidatos fue que no tuvieran trayectoria política conocida. Al final, tan sólo pudieron presentar 15 listas departamentales para diputados del total de 24.

La conformación de la plancha presidencial de Fujimori muestra la composición social de su lista parlamentaria. Sus vicepresidentes eran un pastor evangelista, Carlos García, y un pequeño empresario exitoso, Máximo San Román. Aunque tan sólo hubo una alianza sólida con el sector evangelista puesto que el apoyo de pequeños empresarios fue individual más que colectivo, ni siquiera el sector evangélico realizó una campaña grupal, cada candidato solventó sus propios gastos y diseñó su propia estrategia electoral. Al final, con un resultado sorprendente Cambio 90 obtiene 32 diputados y 14 senadores, con lo cual se convirtió en la tercera bancada más grande en el congreso, tras el FREDEMO y el APRA. Era la primera vez desde 1980 que el

Y se llama Perú...

partido gobernante tenía una bancada tan reducida. Pese a eso, la belicosidad con la que se trataban los partidos políticos predominantes hasta entonces no alcanzó a Cambio 90.

En contraposición al discurso político que manejó Fujimori con respecto a los partidos políticos que entorpecían su labor en el congreso, la realidad fue diferente. Al parecer, las principales agrupaciones políticas subestimaron la capacidad política de Fujimori por lo que se dejaron cooptar por él, creyendo que estaba sucediendo todo lo contrario. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de políticos “independientes” que “surgen” en el periodo provenía de canteras partidarias (Planas, 2000). La cooptación se produjo en un primer momento por la conformación de un gabinete pluripartidario pero que no contaba con la presencia de algún miembro de Cambio 90 paradójicamente. El nuevo ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros fue el acciopopulista Juan Carlos Hurtado Miller, mientras que los demás provenían de IU y de IS: el ministro de Salud Carlos Vidal, el ministro de Agricultura Carlos Amat y León, la ministra de Educación Gloria Helfer, y el ministro de Energía y Minas Fernando Sánchez. En el parlamento se establecieron ciertas alianzas, en el senado con el FREDEMO, en la cámara de diputados con el APRA que le permitieron a Fujimori componer las mesas directivas de ambas cámaras con miembros de su agrupación. Además, hasta marzo de 1992 se puede evidenciar un uso extensivo de delegación de facultades del Congreso hacia el Ejecutivo por lo que sólo el 13% de las leyes fueron hechas por el Congreso en ese periodo de tiempo, lo cual es una muestra de las facilidades que se le dio a Fujimori para gobernar. Para Tanaka (1998), la táctica de

Y se llama Perú...

Fujimori fue evitar que se creara un bloque parlamentario opositor, por lo que optó por hacer alianzas coyunturas con distintas agrupaciones en distintos momentos.

El verdadero escollo que tenía Fujimori dentro del Congreso era su propia bancada. Estaba compuesta por personas con poca experiencia política y poco capacitadas para la labor en el congreso. Para Degregori (2007) se trataba simplemente de una mala bancada. Por otro lado, Fujimori se mostró reacio desde el comienzo de su mandato a restringir su poder político por los designios de cualquier agrupación política, incluyendo a la suya propia. Por eso, sus allegados más cercanos y su familia conformarían el verdadero núcleo de poder dentro del gobierno. Entre ellos destacaban en un inicio el sociólogo Francisco Loayza y su hermano Santiago Fujimori. Ambos, en el corto y mediano plazo serían alejados de las orillas del poder por otro personaje que se convertiría a la postre en su principal asesor político, e incluso para algunos, en el cogobernante del país: Vladimiro Montesinos Torres. Para desactivar a Cambio 90 lo primero que hizo Fujimori, posiblemente a causa de las críticas que recibió durante su campaña por parte de la Iglesia Católica, fue tomar distancias del núcleo evangélico. Tres días después de la segunda vuelta, el secretario general de Cambio 90, Víctor Honma, proveniente del sector evangélico, fue destituido del cargo sin ninguna decisión colectiva de por medio. En su reemplazo fue nombrada una persona afín a Fujimori, Andrés Reggiardo. Posteriormente, la nueva secretaria general de Cambio 90 desactivó los comités departamentales que estaban dirigidos en su mayoría por evangélicos para poner a gente de su confianza. En vista de ello, el sector

Y se llama Perú...

evangélico dentro del Congreso, que sumaba 32 de sus 46 parlamentarios, solicitaron la formación de una célula parlamentaria independiente, que al final nunca llegó a cobrar forma. Sin embargo, los problemas fueron arreciando entre ese sector y el gobierno. El 14 de julio de 1990, contraviniendo los deseos de Fujimori, la célula parlamentaria de Cambio 90 eligió como su vocero al diputado Gerardo López. En octubre de 1991 se llevó a cabo la acusación constitucional contra Alan García por enriquecimiento ilícito y la bancada oficialista volvió a desconocer un pedido de Fujimori. Él había solicitado que votaran en contra de la acusación pero el resultado fue muy distinto: en la cámara de diputados se abstuvieron mientras que en la de senadores votaron a favor. En esa misma semana, en una entrevista, el segundo vicepresidente del gobierno Carlos García afirmó que Cambio 90 había dejado de existir.

El uso extensivo de membretes electorales en vez de una organización partidaria le dio a Fujimori la posibilidad de asentar su núcleo de allegados en el poder. Todos ellos se convierten en asesores informales del gobierno, por lo que la población es incapaz de interpelarlos o cuestionarlos. Sin embargo, su presencia y su poder político trascienden las trastiendas del poder, por lo que se convierten en personajes reconocidos por la población. El caso más paradigmático es el de Vladimiro Montesinos, un ex capitán del ejército sospechoso de haber vendido secretos militares a los Estados Unidos en los setenta, quien se convierte en el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Lo sorprendente de esta situación era que, al parecer, todos reconocían esta situación irregular pero nadie hizo nada para cuestionarlo, ni

siquiera la oposición. En la encuesta que realiza la revista Debate cada año a distintas personalidades públicas, sobre quiénes son los 10 hombres más poderosos del Perú, el nombre de Montesinos comienza a aparecer desde 1992: en ese año es considerado el cuarto hombre más poderoso y en los tres años siguientes es el segundo, tan sólo superado por el propio Fujimori. Esta misma encuesta revela la presencia mediática de otro de sus asesores, Santiago Fujimori, quien aparece en la encuesta desde 1990, donde sale en el puesto séptimo, de ahí en los dos años siguientes fue quinto, en 1994 fue sexto y en el último año del primer gobierno fujimorista, fue quinto nuevamente.⁸⁷ Bajo esta estructura informal del poder, en donde no siempre los que ostentan un cargo determinado ostentan la verdadera jefatura del puesto, ya que existe una estructura burocrática informal que tiene mayor importancia, la representación política que se recrea, especialmente en los sectores antes marginados de la política como lo fueron los nuevos empresarios, los profesionales y los catedráticos, se basa en una lealtad mayor hacia el gobernante que hacia el propio régimen político, ya que el nivel de cercanía y acceso que tienen a él representa el grado de poder político que tienen.

Igual como en la década pasada, este tipo de práctica política va de la mano con actos de corrupción que parecen comprometer de manera generalizada al funcionamiento del Estado. Entre 1991 y el 2000 hubo 220 operaciones de privatización por un monto estimado en 9 200 millones de dólares, pero tan sólo figuran como ingresos al Tesoro Público 6 444 millones de dólares. Casi la mitad de los ingresos que se registraron al Tesoro se dieron

⁸⁷ La datos de la encuesta de la revista Debates se pueden encontrar en Lynch (1999).

Y se llama Perú...

durante el primer gobierno de Fujimori. Para Dammert (2001: 118), estos fondos que fueron señalados por ley para la lucha contra la pobreza y la pacificación nacional, “se dilapidaron en el pago de la deuda externa, la compra de armamento y la perpetua campaña electoral reeleccionista del Presidente”. Además, afirma que según cálculos realizados en el 2001, se considera que el fisco perdió no menos de 600 millones de soles por favores de tipo tributario a entes privatizados, a cambio de su apoyo político y económico al gobierno. Esto también demuestra el grado de cercanía que tenían ciertos grupos empresariales con Fujimori, ya que se producía una relación de necesidad mutua entre los empresarios y el gobierno.

Una de las características más importantes de los grupos de interés financieros y empresariales del Perú es la manera informal y encubierta que tienen de relacionarse con el poder político, no sólo fuera de los márgenes de lo formal, sino también de lo legal, como se mostró con mayor claridad con los videos de Montesinos. En una entrevista reciente, Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos del país y dueño de uno de los emporios económicos más importantes, reconoció que había financiado muchas campañas electorales. Para las presidenciales de 1980 señaló que había apoyado a 3 candidaturas paralelamente, lo cual parece reflejar la manera pragmática que tiene este sector social al relacionarse con el poder. Al parecer, carecen de cualquier tipo de afinidad con alguna política de gobierno en particular, y no se oponen en principio a ninguna mientras no contravenga sus propios beneficios económicos. En ese sentido, las financiaciones que realizan a determinados políticos en realidad son contraprestaciones, puesto que esperan como

Y se llama Perú...

retribución ciertos favores a cambio. Romero, al ser preguntado si financió todas las campañas electorales, respondió: "Todas no. Muchas me han salido gratis.". Además, al ser interrogado sobre la última campaña presidencial del actual presidente García: "Esa es gratis. Todavía me debe".⁸⁸ Aunque la última afirmación se realizó en tono de broma, existe cierta sensación lúgubre, sobre todo cuando se trata de un personaje que ha sido grabado entrevistándose con Montesinos en su ahora famosa salita del SIN.

En consecuencia, en los noventa se puede apreciar una serie de reformas económicas dirigidas a beneficiar a los grandes sectores empresariales y financieros del país. A pesar de los cambios en la estructura de la sociedad que se dieron a raíz del gobierno militar, la concentración de la propiedad en los ochenta aún es marcada, por lo que las grandes empresas pertenecen en su mayoría a tan sólo 330 familias, de las cuales 80 formaban parte de grupos económicos centrados en bancos (Figuroa, 1999). Para 1989, los 13 grupos económicos más importantes del Perú pertenecían sólo a 12 familias y producían un equivalente al 17% del PBI del país, lo que muestra su importancia económica. Figuroa señala que estos mismos grupos siguen siendo los más poderosos para 1996. Además, se puede evidenciar una tendencia a la concentración de las empresas financieras, entre 1990 y 1993, industriales y de servicios, con lo que se acentúa la presencia de monopolios privados, contrarios a la lógica propia del libre mercado (Figuroa, 1999: Iguiñez, 1999; Agugattas, 1999).⁸⁹ Asimismo, según Iguiñez (1999) se puede evidenciar que los ingresos provenientes de otras fuentes distintas a las tasas

⁸⁸ El Comercio, 5 de abril del 2009.

⁸⁹ La concentración bancaria es casi el doble del promedio de América Latina (Iguiñez, 1999)

Y se llama Perú...

de interés de los bancos, se incrementaron del 12% a fines de 1990 al 27% en 1994, a la par que una cuarta parte del crédito bancario se sigue concentrando en empresas relacionadas a los propios bancos.

El único momento en donde deciden participar directamente en la política nacional fue a causa de la crisis política que se desató a finales de los ochenta, entre otras cosas, porque sus intereses económicos se vieron amenazados. Esto motivó que por primera vez en la historia del Perú, los grandes empresarios y financistas salieran a protestar a las calles contra el gobierno de entonces. Posteriormente, se unirían a la gesta de Vargas Llosa que daría a luz al Movimiento Libertad en un primer momento, y luego al FREDEMO. El pragmatismo de este sector es notorio puesto que abandonan el proyecto libertario del FREDEMO en pos del marcado autoritarismo del gobierno fujimorista.

Buena parte de la corrupción durante el primer gobierno de Fujimori deriva del narcotráfico.⁹⁰ Según las declaraciones de un hermano del difunto narcotraficante Pablo Escobar, éste financió con un millón de dólares la campaña de Fujimori de la segunda vuelta electoral. El contacto se realizó a través de Montesinos quien venía trabajando con Escobar en el negocio de la cocaína desde finales de los años setenta (Uceda, 2004; Dammert, 2001; Bowen 2003). Según evidencia recogida por la DEA, diversos grupos de las FFAA durante el primer gobierno de Fujimori han recibido dinero de los

⁹⁰ Álvarez (1999) señala que desde fines de los setenta la droga en el Perú influye a nivel macroeconómico. Entre 1981-1988 las drogas ilícitas tenían cierto impacto en la bolsa de valores, en el precio de las acciones, puesto que se usaba para el blanqueo del dinero. También afirma (1999: 212): “Entretanto, aunque es difícil conocer la magnitud en que la coca ha contribuido a la corrupción dentro de las agencias estatales, no hay duda de que existen muchos interesados en su permanencia. Puede que esto sea particularmente cierto entre los mismos responsables de su eliminación.”

Y se llama Perú...

traficantes para poder operar libremente en las zonas de producción de droga (Álvarez, 1999). Las mayores prerrogativas que se le dieron a los militares dentro de los estados de emergencia, como fue encargarles el combate contra el narcotráfico, facilitó la tarea de un sector vinculado a Montesinos de encubrir a los narcotraficantes a cambio de cupos de dinero (Bowen 2003). Esto se demuestra con las sumas encontradas, tras la caída del tercer mandato de Fujimori, al general Nicolás Hermoza, quien fue Comandante General del Ejército desde 1991 hasta 1998 y al general Víctor Malca, quien fue ministro de Defensa desde noviembre de 1991 hasta enero de 1996. Al primero se le ha encontrado US\$ 20'550,000, mientras que al segundo US\$ 16 millones (Caretas 2002). En total, durante todo el gobierno de Fujimori la suma detectada en la red de corrupción de su gobierno es de US\$ 233'741,027; sin embargo, según algunas fuentes judiciales de la revista Caretas la suma estimada llegaría a los mil millones de dólares.⁹¹

3. El personalismo de Fujimori.-

La figura política de Fujimori fue precedida por un actor político que siempre privilegió la maximización de sus posibilidades de supervivencia política y de su poder personal, que manejó su gobierno, además, con un discurso marcadamente mesiánico (Tanaka, 1998). En realidad, la principal característica de los presidentes peruanos ha sido el de creerse mesías con encargos providenciales de salvación (Lynch, 1999). Como no era nada nuevo,

⁹¹ A Montesinos se le ha encontrado 33 millones de dólares en Suiza y 8 millones más en Luxemburgo, pero no serían todas sus cuentas.

Y se llama Perú...

Fujimori extremó las características personalistas que tanto el diseño institucional del régimen político presidencialista como las prácticas políticas habían permitido en la década anterior. Su postulación fue en realidad un esfuerzo individual que se vio obligado a convertirse en colectivo por las propias necesidades de la coyuntura que le impidieron postular en alguna lista partidaria y por las leyes electorales que le obligaban a postular dentro de una agrupación. En ningún momento tuvo la intención de crear una agrupación política estructurada, y cuando tuvo la oportunidad de construir un partido político, al llegar al poder, no la tomó en cuenta. Al contrario, Fujimori se empeñó en desactivar a los únicos núcleos organizados de su agrupación Cambio 90 para colocar a allegados suyos en puestos claves de la misma (Degregori y Meléndez 2007).

Para ello se rodeó de personas de su entera confianza, entre ellos algunos familiares como su hermano Santiago Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi, que lo único que tenían en común era su lealtad política hacia el gobernante. Al dejar de funcionar en la práctica Cambio 90, le surge la necesidad de crear otra agrupación, Nueva Mayoría, para las elecciones de noviembre de 1992. Para las mismas, se decide fundir en una sola alianza a las dos agrupaciones fujimoristas, Cambio 90-Nueva Mayoría. La particularidad de los candidatos de esa lista era que tan sólo el 5% de sus integrantes provenían de Cambio 90. La selección de candidatos fue hecha por el propio Fujimori con su grupo de asesores sin ningún tipo de elección interna. Todo se manejó de la manera más vertical y arbitraria posible. Esto fue una constante en la dinámica política de Fujimori durante todo su periodo de gobierno. Esta personalización

Y se llama Perú...

de las relaciones políticas que establece Fujimori le limita la capacidad de tener candidatos en todo el país en las elecciones municipales de 1993. Resulta paradójico que el gobierno a pesar de todos los recursos a su favor y con una reconocida actitud patrimonialista no haya sido capaz de copar todas las candidaturas posibles ni siquiera de los lugares más importantes como Lima Metropolitana, en donde el candidato respaldado por Fujimori tuvo que retirar su candidatura debido al poco apoyo electoral que recibía en las encuestas.

Para Planas (2000) lo que ocurre es el predominio de los membretes electorales sobre los partidos políticos dentro de un régimen político que se había caracterizado también por cierta confusión nominal. No existía con claridad en la normatividad electoral una distinción entre movimientos electorales, frentes políticos, listas electorales y partidos políticos, por lo que tampoco había mayores restricciones para la participación de unos y otros. Además, la mayoría de los partidos políticos preponderantes de los ochenta habían cambiado de nombre para las distintas elecciones, tan sólo el APRA en el periodo mantiene su misma nomenclatura. Por ejemplo, el PPC fue el CODE en las elecciones de 1985 y parte del FREDEMO en 1990. La creación de nuevas agrupaciones políticas por cada proceso electoral le permite a Fujimori asentar su posición contraria a una supuesta política no tradicional, por tanto, alejada de los partidos políticos. Asimismo, puede recrear la imagen de que cada membrete electoral en “realidad” representa el anhelo de determinados sectores sociales que se organizan para brindarle su apoyo.

Casi todos los investigadores del periodo concuerdan en que Fujimori desarrolló una política populista, con la excepción de su enfoque económico

Y se llama Perú...

que se orientó más hacia el mercado y no hacia una política estatista.⁹² Un populismo que no es sólo una consecuencia de sus atributos personales ni de la propia coyuntura política:

“Está claro que García y Fujimori tienen algunas características en común. Ambos gobiernos estuvieron presididos por líderes de cierta inclinación autoritaria dispuestos a cambiar las reglas del juego en forma drástica cuando les convino. Ambos evitaron compartir el poder con otros, ignorando instituciones e intermediarios, prefiriendo legitimarse por medio de una invocación directa al “pueblo”. Ambos fueron propensos al personalismo, preocupados enormemente con su popularidad y desdeñosos hacia los sistemas formales de fiscalización.” (Crabtree 1999: 47)

Para Crabtree (1999) los partidos políticos tuvieron muchos de los rasgos autoritarios en su forma de organización, claramente verticales en su forma de tomar decisiones, clientelistas y personalistas. Todo ello hizo para este autor que los partidos no pudieran cumplir fielmente con su papel representativo. En ese sentido, si bien es cierto que la postura política anti-sistémica que asumió Fujimori sirvió para neutralizar a sus adversarios políticos, nunca implicó dejar de lado ciertas prácticas políticas que como el personalismo, se mantuvieron durante su gobierno, e incluso, se vieron reforzadas. De esta manera, el gobierno de Fujimori presentó los siguientes rasgos para Crabtree (1999): la personalización del poder político, puesto que Fujimori se vio como la fuente principal de toma de decisiones dentro del gobierno por lo que insistía en la lealtad y subordinación de los miembros de su gabinete; la reafirmación del Ejecutivo por encima de otras funciones del

⁹² Crabtree (1999) plantea esto como la variante de un nuevo concepto: el neopopulismo.

Y se llama Perú...

Estado, como puede ser el control del Legislativo; capacidad para forjar una nueva relación con el pueblo, donde lo “suyo no era un carisma nacido de la oratoria ampulosa, sino más bien un atractivo derivado de su conducta modesta y una reputación basada en cualidades “japonesas” como la honestidad, el trabajo y la eficacia” (Crabtree 1999: 62); el uso de los recursos del Estado para aumentar su reputación, especialmente en los sectores más pobres; y la estrecha relación que une al gobierno de Fujimori con las FFAA.

Para esta sección he resaltado como dos cualidades relacionadas con el personalismo al predominio que ejerce el Ejecutivo sobre el Legislativo y la relación existente entre algunos grupos de interés, como los empresarios y las FFAA, con Fujimori. Con respecto a lo primero, Martín (2000) ha señalado como una de las paradojas del gobierno de Fujimori la persistencia del presidencialismo y de la fe en liderazgos políticos a pesar de la crisis que afecta a los partidos políticos. No obstante, esto no tendría nada de sorprendente si se entendiera a los actores que surgen durante la crisis política como parte de un proceso natural de renovación política, con la única diferencia de tener abiertamente un discurso anti-sistémico de mucho éxito dentro de un contexto de gran inestabilidad política. Por eso, las redes de consolidación predominantes que caracterizan al régimen político se mantienen, e incluso, se refuerzan.

Ya se ha señalado con anterioridad que el predominio del Ejecutivo durante el primer gobierno de Fujimori sobre el Legislativo es absoluto desde abril de 1992, pero también es constatable desde los inicios del gobierno mismo. Eso explica por qué el 87% de leyes promulgadas fueron hechas por el

Y se llama Perú...

gobierno, hasta antes del autogolpe de 1992, mientras que el Parlamento sólo redactó un 13% de las mismas. Con la instalación del CCD el control del gobierno sobre el congreso se hizo mucho más evidente por la no participación de la mayoría de los partidos políticos en esas elecciones. Estos partidos a pesar de tener una postura en común no fueron capaces de articular una oposición unida, lo que se hace más evidente en las elecciones de 1995 donde no pudieron articular una única candidatura de oposición. Por otra parte, la oposición existente dentro del CCD era mínima. En general, el número reducido de congresistas (80) facilitó a Fujimori su control, el mismo que se fue incrementando. Para Tuesta (1995) con la constitución de 1993 se amplió el poder presidencial con lo que su influencia sobre los partidos políticos se hizo mayor.

Para que un gobierno personalista se pueda mantener en el poder necesita del apoyo de actores lo suficientemente importantes como para garantizarle su permanencia. Estos actores secundarios suelen provenir de sectores o instituciones proclives a repetir las mismas prácticas políticas con igual o mayor intensidad. Tales fueron los casos de los sectores financieros y empresariales del país y de las FFAA.

Con las FFAA el gobierno pronto llegó a un acuerdo ni bien estuvo en la antesala del poder, a la espera del cambio de mando. Esta relación cercana se fue forjando gracias a la intermediación de Vladimiro Montesinos y a la anuencia del propio García, quien había apoyado discretamente a Fujimori en los últimos tramos de su campaña electoral, facilitándose el acceso al SIN. Tal como lo señala Bowen (2003), Fujimori se vio envuelto en intrigas y amenazas

Y se llama Perú...

de golpe de estado, algunas de ellas ficticias, que lo hicieron apoyarse en las FFAA, quienes a su vez veían en Fujimori un aliado necesario.

Para finales de los años ochenta se puede observar un cambio dentro de las FFAA al analizar el problema de la subversión. Se planteó entonces la necesidad de emplear una guerra de baja intensidad mucho más selectiva al momento de escoger sus objetivos. Para que esto fuera posible, un sector dentro de esa institución creía necesario la existencia de un gobierno cívico-militar de larga duración para que otorgue la anuencia y los recursos del Estado. Una conspiración golpista se fue gestando en ese sentido en los últimos años del gobierno de García. Los militares temían además algún intento desesperado del entonces presidente para perpetuarse en el poder. Por otro lado, algunos analistas advertían la posibilidad de que García buscara un golpe de estado que lo derrocara para presentarse luego como un mártir de la democracia. En realidad, la crisis política se encontraba en su fase más aguda.

Aunque este planeamiento militar nunca llegó a darse, al parecer fue tomado en cuenta al momento de planear el autogolpe del 5 de abril de 1992. Entre las medidas que se implementaron tras el golpe, muchas de ellas estaban orientadas a incrementar el poder político de los militares dentro de las zonas de emergencia. Un intento previo de Fujimori en ese sentido había sido bloqueado pocos meses atrás por el Congreso. Los estados de emergencia durante ese periodo también se convirtieron en una manera de ejercer un control directo contra la población. Ahora, sin ningún Congreso de por medio, Fujimori y los militares se encontraron sin ningún tipo de ataduras para emplear su modelo de lucha antsubversiva que contemplaba la creación de grupos

Y se llama Perú...

especiales encargados de asesinatos, desapariciones y atentados. Junto con ello, se dotó de mayores prerrogativas al SIN, que fue controlado por su asesor Montesinos, con lo que se acentuó una política represiva contra sus opositores políticos. A causa de esta política se produjeron los asesinatos de La Cantuta y de Barrios Altos, ambos durante el primer gobierno de Fujimori (Uceda 2004). La sentencia reciente contra Fujimori demuestra que existió una política estatal represiva articulada por el gobierno con ayuda de algunos sectores de las FFAA; siendo sentenciado por ello a 25 años de prisión al ser considerado como autor mediato de los delitos de homicidio calificado, con la circunstancia agravante de alevosía, lesiones graves y secuestro agravado con la agravante de trato cruel.⁹³

En el caso de los grupos de interés empresariales, estos no se vieron afectados de igual manera por la crisis política que se inició a finales de los ochenta, como fue el caso de los sindicatos de trabajadores, tal como lo plantea Tanaka (1998). Lynch (1999) identifica que paralelamente a la disminución de la influencia política de las organizaciones sindicales, los grandes sindicatos, las FFAA y una tecnocracia ligada a los organismos financieros internacionales se fueron articulando de tal manera que influyeron crecientemente, tanto de forma directa como a través de los partidos, en las tomas de decisiones de los gobiernos.⁹⁴ El apoyo de los grandes empresarios peruanos explica por qué Fujimori tiene un importante apoyo en sectores sociales altos. Tanto el apoyo de las FFAA como del empresariado se produce en tanto se basa en una relación personal con el gobernante y en la medida en

⁹³ La Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia es de fecha 7 de abril del 2009.

⁹⁴ Lynch denomina a estos tres elementos como poderes fácticos.

Y se llama Perú...

que son lazos de apoyo recíproco, por lo que sirven para acentuar más el personalismo del régimen político peruano.

IV. El desenlace de la crisis.-

Lo que termina sucediendo con las elecciones de 1995, y previamente con el Congreso Constituyente Democrático, es lo que se denomina como una salida institucional, puesto que son las elecciones generales de 1995 el procedimiento institucionalizado, reconocido internacional y nacionalmente, que permite reinstaurar la siempre relativa estabilidad política que caracteriza al régimen peruano.

Esta salida institucional obligó a los partidos políticos que se habían mantenido al margen en las elecciones de noviembre de 1992 a reinsertarse dentro del sistema, a riesgo de quedar excluidos de no hacerlo. Para Dobry (1988), una salida institucional implica que la intervención de procedimientos institucionalizados contribuye de manera significativa a estabilizar el valor de los recursos y las líneas de acción puestas en práctica, con lo cual se reduce la fluidez de las movilizaciones multisectoriales.

Además, dicha intervención tiende a imponer a los protagonistas de las confrontaciones, juegos que canalizan su acción, tácticas y cálculos hacia emplazamientos dentro del campo político legítimo. Como sucedió con el PPC y parte de la izquierda en la Constituyente de 1993, que en vez de fortalecer el bloque de la oposición liderado por el APRA y AP, ambos postulaban el abstencionismo, decidieron apostar por una oposición que no los excluyera de la dinámica política. En realidad, la pobre actuación que tuvo la oposición de los partidos políticos ante Fujimori se debe más a la fragmentación de sus posturas y a sus ambiciones irreconciliables que al uso de una determinada

estrategia, como pudo ser la abstención o la participación en las elecciones de fines de 1992. La fallida unidad de la oposición impidió un mejor resultado en el referéndum que decidió la aprobación de la Constitución de 1993, donde incluso aún persisten sospechas de fraude. Dobry (1988) también acota que las salidas institucionales implican negociación por parte de algunos actores predominantes.

La particularidad de esta crisis política peruana es que no trajo como consecuencia el cambio del régimen político. Sus principales redes de consolidación se mantuvieron a pesar de la voluble y difícil situación política que se vivió entre 1987 y 1995. A su vez, lo que se pudo evidenciar es que durante la crisis política se intensificó la presencia de sus principales instituciones informales: la competencia política restringida, el personalismo y el patrimonialismo. Aunque ahora se pueden notar estos resultados, durante esa coyuntura era poco probable que algunos de sus actores políticos hayan podido prever el desenlace que tuvo todo este proceso.

La crisis política se inició en mayo de 1987 debido a varias razones. En primer lugar se puede evidenciar la importante polarización política que se va desarrollando a partir de ese año. Hay que tomar en cuenta que con la llegada de Alan García al poder, se produce una gran expectativa nacional en gran parte de la población, que se evidencia con el apoyo electoral que obtuvo en las elecciones de 1985. Los altos porcentajes de popularidad presidencial de sus primeros dos años de gobierno le restan iniciativa política a la oposición. El mejor ejemplo de ello fue la declaratoria unilateral del MRTA de un cese al fuego. Para 1987 la coyuntura política está cambiando y la izquierda busca

Y se llama Perú...

recuperar su iniciativa política. En ese contexto, el 19 de mayo de 1987, la CGTP realizó su primer paro nacional contra el gobierno aprista. Previamente, el 15 de mayo se realizó un paro policial.

Por otro lado, la crisis económica ya se venía sintiendo en la población, con lo que los índices de popularidad del presidente se vieron afectados. García en respuesta a ello opta por reforzar su propia imagen pública, por lo que rechazó la posibilidad de realizar un ajuste severo en la economía y decidió mantener el control interno de su propio partido. Esto se debía al carácter marcadamente personalista de García, que antepuso sus propios intereses políticos a los del país y de su partido. En ese sentido, como una medida para paliar la crisis económica, en abril de 1987 decidió lanzar un programa de bonos de inversión del tesoro público. Todas las empresas con ventas anuales a las 200 unidades impositivas iban a estar obligadas a comprar los bonos. Esta medida hizo reacción al sector empresarial del país, quienes mostraron su más rotundo rechazo. Según Tanaka (1998: 151): “Hoy sabemos que con el fracaso de esta iniciativa empezó el camino que condujo al gobierno de García a su crisis”. García no pudo imponerse a los empresarios, quienes emplearon una resolución del Poder Judicial para dejar fuera de juego al gobierno.

Dentro del APRA, la proximidad a las elecciones de 1990 había forjado una facción dirigida por el ministro Alva Castro que buscaba hacerse con el poder. En vista de ello, Alva Castro tomó la decisión de renunciar a su cargo en el Ejecutivo en mayo de 1987 y anunciar su postulación a la presidencia de la Cámara de Diputados. Intentaba alejarse del presidente para así no quemar su

propia figura política de cara a 1990. Para García esto fue un desafío directo a su poder político dentro del partido, por lo que declaró el 22 de junio: “En el APRA no hay renunciadas. Todo aquel que dé un paso atrás es un traidor” (Tanaka, 1998: 151). Sin embargo, fue en el XVI Congreso Nacional del APRA cuando el poder de García se vio oficialmente limitado. Alva Castro Resultó elegido en ese congreso como nuevo Secretario General, a la vez que García perdió su cargo como presidente de su partido.

Las movilizaciones multisectoriales, o mejor dicho, las protestas sociales en distintos sectores de la población se potencializaron con la incursión política de los grandes empresarios después del mensaje presidencial del 28 de julio de 1987. En su mensaje, García anunció la estatización de la banca. Esta no era una propuesta nueva, había sido contemplada años atrás en la Comisión del Plan Nacional del APRA para su campaña presidencial de 1985. Incluso, estuvo a punto de anunciarse en el mensaje presidencial del año anterior, pero en último momento García desistió de hacerla pública.

Con esta medida, se polarizó completamente a la sociedad puesto que el tema del debate se concentró alrededor del modelo económico. Además, no sólo fueron los grandes empresarios los que entraron a tallar directamente en la política, sino también otros sectores que se harían visibles con mayor claridad en las elecciones de 1990. Para Rospigliosi (2000) el enfrentamiento de García con los empresarios completó las condiciones para un golpe militar.

Para Reyna (2000) García sólo quiso recuperar la iniciativa política más no tuvo nunca una posición firme para aplicar la medida. Su propuesta obtuvo reparos de senadores apristas y posteriormente su accionar político fue

Y se llama Perú...

bloqueado nuevamente por el Poder Judicial. Como resultado de esta medida la derecha política peruana se pudo organizar a través del Movimiento Libertad y la figura de Mario Vargas Llosa. La situación de gran inestabilidad política que provocó esta medida movilizó a algunos sectores de las FFAA que tentaron la posibilidad de un golpe militar. En enero de 1989 el embajador de Estados Unidos, Alexander Watson, advirtió públicamente que su gobierno no apoyaría ningún golpe de estado. En el mismo mes, Vargas Llosa le pidió al APRA que impidiera el golpe de estado contra García. A esas alturas la popularidad del presidente había disminuido considerablemente: de tener un 40% en julio de 1988 pasó a un 11.4% en julio del año siguiente.

La izquierda agrupada en IU se había dejado arrastrar con la medida de la estatización de la banca de García, a pesar de que era considerada la principal fuerza política para llegar al poder en 1990. Sin una claridad en cuanto al rumbo que tenía que tener, la izquierda peruana para 1988 se enfrascó en la preparación de su primer Congreso Nacional. Como un primer paso se carnetizó a todos sus militantes, alcanzando a inscribir a 130 mil. El Congreso de IU se realizó a fines de enero de 1989 con la asistencia de 3500 delegados elegidos tanto por los comités de base (70%) como por los cupos partidarios (25%) y el resto por las comisiones nacionales de IU. Según Lynch (1999), el Congreso fue dominado por la dinámica de sus partidos integrantes, que impidieron la expresión de las bases de manera independiente. Las facciones se crearon alrededor de una postura que estaba a favor de la lucha armada y los que estaban a favor de la democracia. Paradójicamente, la postura violentista, aliada con el sector de los cristianos de izquierda, se impusieron.

Y se llama Perú...

Este resultado motivó la ruptura del frente. Al parecer, este resultado parecía algo previsible, lo que explicaría la ausencia de Barrantes en dicho Congreso.

Habría que acotar que tanto los problemas internos del APRA como la división que se cernió sobre la izquierda no eran producto de su debilidad, al menos no lo fue hasta 1990, sino más bien de las enormes posibilidades que tenían de ser gobierno para 1990. Barrantes opta por una postura altamente personalista basada en las encuestas que le dan una alta intención de voto. La otra facción de la izquierda todavía cree que el camino de la revolución es posible por lo que opta por su radicalización. En el caso del APRA, García busca por un lado preservar sus opciones de liderazgo dentro de su partido para una futura postulación mientras que Alva Castro apunta a su propia candidatura presidencial para 1990.

De igual manera, el triunfo de un independiente en las elecciones municipales de Lima Metropolitana, Ricardo Belmont, tampoco configuró un nuevo escenario político en donde quedarían relegados los principales partidos políticos del momento. Al parecer, lo que había surgido era la necesidad de buscar una representación política que identitariamente se asemejara más al electorado, aunque esto no se dio al margen de los partidos. El apoyo popular del que gozaba Barrantes provenía de su enorme capacidad para relacionarse con la población. Incluso, García tenía esa capacidad.

Lo que sucede en las presidenciales de 1990 es fruto de la incapacidad política de Vargas Llosa, por un lado, y las maniobras políticas de García, por el otro. Vargas Llosa presentó de manera descarnada, cada vez que pudo, con cierta ingenuidad política, las consecuencias que tendría el modelo económico

que pensaba aplicar. A la par, García coordinó desde el Estado una ferviente oposición política contra Vargas Llosa, que lo llevó a fundar su propio diario, acción que no iba dirigida a apoyar a su propio candidato partidario. Era una postura abiertamente confrontacional y dañina con respecto al sistema político. Como parte de su campaña de desprestigio, coadyuvó a que la imagen pública de Fujimori cobrara notoriedad.

En todo caso, el desprestigio de los partidos políticos no se evidencia en los resultados electorales de 1990, como lo ha señalado con anterioridad Tanaka (1998), a lo sumo reseña la grave crisis en que se suma la izquierda del país. El autogolpe de estado de 1992 es el causante directo de que los partidos políticos predominantes en los ochenta queden relegados de la dinámica política. El estilo de confrontación política al que estaban acostumbrados, primero, los había hecho subestimar a Fujimori, y segundo los incapacitó para establecer una oposición unitaria. Las nuevas elecciones de noviembre de 1992 desgajaron a una parte de esa oposición, y las elecciones de 1995 confirmaron que cada agrupación política, a pesar de la crisis que los había llevado Fujimori con su posicionamiento anti-partidos, tenía su propia agenda.

Los resultados electorales de 1995, con su característico alto grado de volatilidad electoral, evidencian a un electorado pragmático y cínico, motivados en gran medida por la sensación de fatalidad que producía el verse expuestos a una situación extrema de crisis económica que los había llevado prácticamente a preocuparse por su subsistencia. El cuadro final muestra cómo la mayor parte de los trabajadores en el Perú se encuentran subempleados,

ganando menos de lo necesario para mantener a sus familias. Desde 1989 más del 70% de la población se encuentra subempleada. La aparente pasividad del electorado señala en realidad un modelo de sobrevivencia política afincado en instituciones informales como el personalismo, el patrimonialismo, el clientelismo y la corrupción, que había entrado en crisis para fines de los ochenta cuando partidos como el APRA, PPC, AP e IU se muestran incapaces de satisfacer las necesidades inmediatas de grandes sectores de la población. Por tanto, resulta muy difícil hablar de un nuevo régimen político cuando la dinámica política se sigue guiando por los mismos patrones que imperaron en la década de los ochenta.

La forma como se desenvuelve el primer gobierno de Fujimori, con un manejo personalista del poder político hasta el punto de no contar con una estructura partidaria que lo secunde, con una utilización patrimonialista de los recursos del Estado, especialmente para sustentar medidas de corte populista, y con la presencia de procesos electorales que no cerraban del todo la posibilidad de la competencia política, a pesar que estuvieron fuertemente monitoreados por el gobierno y los servicios de inteligencia, remarcaron las principales características del régimen político que venía funcionando desde 1980.

Lo más probable es que aún mantengamos ese mismo régimen político en la actualidad, a pesar del llamado “retorno” a la democracia que algunos políticos se esfuerzan en enfatizar. Posiblemente, la idea del retorno es más una postura política que una realidad. Bastaría observar la forma como se manejan los Estados de Emergencia en el país que se volvieron a instaurar a

Y se llama Perú...

mediados del gobierno de Toledo. Qué prácticamente los habitantes de 56 distritos a nivel nacional no gocen de la plenitud de sus derechos políticos por vivir en zonas de emergencia hace más de ocho años de manera ininterrumpida, sin contar las décadas de 1980 y 1990, es una patética realidad que simboliza las contradicciones entre la formalidad y la informalidad en nuestro régimen político. Por eso, resulta más adecuado alejarse de la falsa dicotomía entre dictadura y democracia que pareciera dominar los análisis sobre la historia política peruana de los últimos 40 años. En todo caso, se hace evidente la necesidad de nuevos estudios que aporten otras interpretaciones que expliquen mejor este proceso.

AÑOS	SUBEMPLEADOS %	DESEMPLEADOS %
1980	26	7.1
1981	26.8	6.8
1982	28	6.6
1983	33.3	9
1984	36.8	8.9
1985	42.2	10.1
1986	42.6	5.3

Y se llama Perú...

1987	34.9	4.8
1988	37	7.1
1989	73.5	7.9
1990	73.1	8.3
1991	78.5	5.9
1992	75.7	9.7
1993	77.6	9.9

Fuente: Figueroa (1999)

V. Bibliografía

- ABUGATTAS, L. (1999) Estabilización, reforma estructural y desempeño industrial. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.
- AGÜERO, F. (2003) El nuevo doble "desafío": Cómo ajustar el control democrático y la eficacia en el ejército, la policía y los servicios de inteligencia. III Asamblea General del Club de Madrid, Madrid.
- ALVAREZ, E. (1999) Efectos económicos del sector ilícito de drogas en el Perú. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.
- ARCE, E. (2004) *Movimientos agrarios y campesinos. Perú 1969-1976*, CEDEP, Lima.
- BELAUNDE, J. D. (1999) Justicia, legalidad y reforma judicial en el Perú (1990-1997). In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.
- BLONDET MONTERO, C. (2002) *El encanto del dictador: mujeres y política en la década de Fujimori*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- BOBBIO, N. (1983) *Diccionario de Política*, Siglo XXI, Madrid.
- BOWEN, S. & HOLLIGAN, J. (2003) *El espía imperfecto: la telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos*, Peisa, Lima.
- BUSLLEU, G. (2003) Matriz colonial y partidos políticos en el Perú contemporáneo 1956-2003. In: *Instituto Interuniversitario de*

-
- Iberoamérica*. Universidad de Salamanca, Salamanca.
- CHANG-RODRÍGUEZ, E. (2007) *Una vida agónica. Víctor Raúl Haya de la Torre*, Editorial del Congreso del Perú, Lima.
- CONTRERAS, C. & CUETO, M. (2004) *Historia del Perú contemporáneo: desde las luchas por la Independencia hasta el presente*, IEP, Lima.
- COTLER, J. & GROMPONE, R. (2000) *El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*, IEP, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- CRABTREE, J. (1999) Neopopulismo y el fenómeno Fujimori. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.
- CRABTREE, J. & THOMAS, J. (1999) *El Perú de Fujimori: 1990-1998*, Universidad del Pacífico - Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- DAMMERT, M. (2001) *El Estado mafioso. Fujimori - Montesinos: el poder imagocrático en las sociedades globalizadas*, El Virrey, Lima.
- DEGREGORI, C. I. (1993) Identidad étnica, movimientos sociales y participación política en el Perú. In: *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos* (Ed. A. ADRIANZÉN). IEP, Lima.
- DEGREGORI, C. I. (2000) *La Década de la anti política: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*, IEP, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- DEGREGORI, C. I., CORONEL, J. & PINO, P. D. (1999) Gobierno, ciudadanía y democracia: una perspectiva regional. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico,

Lima.

DEGREGORI, C. I. & GROMPONE, R. (1991) *Demonios y redentores en el nuevo Perú: una tragedia en dos vueltas*, IEP, Lima.

DEGREGORI, C. I. & MELENDEZ, C. (2007) *El nacimiento de los otorongos: el congreso de la república durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000)*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

DOBRY, M. (1988) *Sociología de las crisis políticas: la dinámica de las movilizaciones multisectoriales*, Centro de investigaciones Sociológicas: Siglo XXI de España, Madrid.

DURAND, F. & THORP, R. (1999) La reforma tributaria: análisis del experimento SUNAT. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.

FIGUEROA, A. (1999) Distribución de ingresos y pobreza en el Perú. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.

GONZALES DE OLARTE, E. (1998) *El neoliberalismo a la peruana: economía política del ajuste estructural, 1990-1997*, IEP: Consorcio de Investigación Económica, Lima.

GONZÁLES, O. (1999) *Señales sin respuesta: los Zorros y el pensamiento socialista en el Perú, 1968-1989*, PREAL, Lima.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. A., GONZÁLEZ MARRERO, S. (2004) *El Perú bajo Fujimori [recurso electrónico]: alumbramiento, auge y ocaso de una dictadura peruana*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Y se llama Perú...

GORRITI ELLENBOGEN, G. (1990) *Sendero: historia de la guerra milenaria en el Perú*, Editorial Apoyo, [Lima].

HALL, P. (1986) *Governing the economy: the politics of state intervention in Britain and France*, Polity Press, Cambridge.

HERMET, G. (2000) El engañoso encanto de las teorías: un balance. *Foro Internacional*, XL 2, pp. 255-277.

HOPKINS, R. (1999) El impacto del ajuste estructural en el desempeño agrícola. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.

HUERTO VIZCARRA, H. (2008) ¿Esquizofrenia democrática? El rol de la izquierda marxista peruana en la construcción del sistema democrático durante la transición de 1977-1980. In: *XIII Encuentro de Latinoamericanistas españoles*. Castellón, España.

IGARTÚA, F. (1993) Historia de una traición. In: *Oiga*. Lima.

IGUÍÑEZ, J. (1999) La estrategia económica del gobierno de Fujimori: una visión global. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.

JARA, U. (2003) *Ojo por ojo: la verdadera historia del Grupo Colina*, Norma, Lima.

JOCHAMOWITZ, L. (1993) *Ciudadano Fujimori. La construcción de un político*, Peisa, Lima.

JOCHAMOWITZ, L. (2002) *Vladimiro*, El Comercio, [Lima].

Y se llama Perú...

KISIC, D. (1999) Privatizaciones, inversiones y sostenibilidad de la economía peruana. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.

LETTS, R. (1981) *La izquierda peruana: organizaciones y tendencias*, Mosca Azul, Lima.

LYNCH, N. (1990) *Los jóvenes rojos de San Marcos. El radicalismo universitario de los años setenta*, El zorro de abajo, Lima.

LYNCH, N. (1999) *Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los independientes. Perú 1980-1992.*, Fondo Editorial de la UNMSM, Lima.

MARCUS-DELGADO, J., TANAKA, M (2001) *Lecciones del final del fujimorismo*, Instituto de Estudios Peruano, Lima.

MARSH, D. & STOKER, G. (1997) *Teoría y métodos de la ciencia política*, Alianza Editorial, Madrid.

MARTÍN SÁNCHEZ, J. (2000) Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo reinventar la democracia. In: *Sistemas políticos y procesos de integración económica en América Latina* (Ed. R. NAVARRO). Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla.

MARTÍN SÁNCHEZ, J. (2002) *La revolución peruana: ideología y práctica política de un gobierno militar 1968-1975*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-Americanos [etc.], Sevilla [etc].

MARTIN SANCHEZ, J. (2002) *Perú 28 de Julio: discurso y acción política, el*

Y se llama Perú...

día de fiestas patrias, 1969-1999, Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla.

MAUCERI, P. (1989) *Militares. Insurgencia y democratización en el Perú : 1980-1988*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

MÉNDEZ, C. (2006) Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglos XIX al XX. In: *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador, Quito.

MURAKAMI, Y. (2007) *Perú en la era del chino. La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador*, IEP, Lima.

NORTH, D. (1993) *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, Fondo de Cultura Económica, México.

O' DONNELL, G. (1993) Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencia a países postcomunistas. In: *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*. IDES, Buenos Aires.

O' DONNELL, G. (1997) *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Paidós, Buenos Aires [etc].

O' DONNELL, G. (2004) Notas sobre la democracia en América Latina. In: *La democracia en América Latina: El debate conceptual sobre la democracia*. PNUD.

O' DONNELL, G., SCHMITTER, P. C., WHITEHEAD, L. & LOWENTHAL, A. F.

- (1988) *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Paidós, Buenos Aires.
- OBANDO, E. (1999) Fujimori y las Fuerzas Armadas. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.
- ORTIZ, B. (2000) Yo trabajé para Alan García. s/n, Lima.
- PANFICHI, A. & FRANCIS, C. (1993) La guerra de los dioses: Abimael Guzmán y Alberto Fujimori: liderazgos políticos autoritarios en el Perú *Debates en Sociología*, 18.
- PÁSARA, L. (1989) *La izquierda en la escena pública*, CEDYS, Lima.
- PÁSARA, L. (1991) *La otra cara de la luna: nuevos actores sociales en el Perú*, Manantial, Buenos Aires.
- PEASE GARCIA, H. (2003) *La autocracia fujimorista: del Estado intervencionista al Estado mafioso*, Pontificia Universidad Católica del Perú; Fondo de Cultura Económica, Lima
- PEDROSA, F. (2005) Las relaciones personales también importan. Instituciones informales, redes y partidos políticos. In: *Revista Redes*.
- PETERS, B. G. (2003) *El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política*, Gedisa, Barcelona.
- PION-BERLIN, D. (2008) Militares en democracia en el nuevo siglo. Cuatro descubrimientos inesperados y una conclusión sorprendente. In: *Nueva Sociedad*. Friedrich Ebert Stiftung, Buenos Aires.

PLANAS, P. (2000) *La democracia volátil. Movimientos, partidos, líderes políticos y conductas electorales en el Perú contemporáneo*, Friedrich Ebert Stiftung, Lima.

REYNA, C. (2000) *La anunciación de Fujimori. Alan García 1985-1990*, Desco, Lima.

RHODES, R. A. W. (1997) El Institucionalismo. In: *Teoría y métodos de la ciencia política* (Eds. D. MARSH & G. STOCKER). Alianza Editorial, Madrid.

ROSPIGLIOSI, F. (2000) *Montesinos y las fuerzas armadas: cómo controló durante una década las instituciones militares*, IEP, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

SÁNCHEZ, L. A. (1987) *Testimonio Personal: memorias de un peruano del siglo XX.*, Mosca Azul, Lima.

SCOTT PALMER, D. (1992) Peru, the Drug Business and Shining Path: Between Scylla and Charybdis? *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* vol. 34 n° 3.

STEIN, S. & MONGE, C. (1988) *La crisis del Estado patrimonial en el Perú*, IEP, Lima.

STIGLITZ, J. (2003) El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina. In: *Revista de la CEPAL*. Naciones Unidas, Santiago de Chile.

TANAKA, M. (1998) *Los Espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada*, Instituto

de Estudios Peruanos, Lima.

TANAKA, M. (1999) Del movimientismo a la media-política: cambios en las relaciones entre la sociedad y la política en el Perú de Fujimori. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.

TANAKA, M. & MARCUS-DELGADO, J. (2001) *Lecciones del final del fujimorismo*, IEP, Lima.

TANAKA, M. & TRIVELI, C. (2002) *Las trampas de la focalización y la participación: pobreza y políticas sociales en el Perú durante al década de Fujimori*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

THOMAS, J. (1999) El mercado laboral y el empleo. In: *El Perú de Fujimori: 1990-1998* (Eds. J. CRABTREE & J. THOMAS). Universidad del Pacífico, Lima.

TOVAR, T. (1985) *Velasquismo y movimiento popular. Otra historia prohibida*, DESCO, Lima.

TROCELLO, M. G. (2004) Violencia simbólica y patrimonialismo. El caso "San Luis". In: *Revista Electrónica de Psicología Política*. Universidad Nacional de San Luis, San Luis.

TUESTA SOLDEVILLA, F. (1987) *Perú político en cifras. Elite política y elecciones.*, Fundación Friedrich Ebert, Lima.

TUESTA SOLDEVILLA, F. (1995) *Sistema de partidos políticos en el Perú. 1978-1995*, Fundación Friedrich Ebert, Lima.

TUESTA SOLDEVILLA, F., PANFICHI, A. (1997) *Los enigmas del poder*:

Y se llama Perú...

Fujimori 1990-1996, Funfacción Friedrich Ebert, Lima.

UCEDA, R. (2004) *Muerte en el pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano*, Planeta, Bogotá.

VARGAS LLOSA, Á. (1991) *El diablo en campaña*, El País Aguilar, Madrid.

VARGAS LLOSA, M. (1993) *El pez en el agua*, Seix Barral, Barcelona.

VIVAS, F. (2002) 5 de abril de 1992 El Autogolpe de Alí Baba. In: *Caretas*.
Lima.

WRIGHT, C. (2007) Estados de Excepción en América Latina. Con especial referencia a los casos del Perú y Bolivia. In: *Instituto Interuniversitario de Iberoamérica*. Universidad de Salamanca, Salamanca.

ZAVERUCHA, J. (2008) La militarización de la seguridad pública en el Brasil. In: *Nueva Sociedad*. Friedrich Ebert Stiftung, Buenos Aires